

RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ESPAÑA

NORMATIVA

RECONOCIMIENTO Y
PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO EN ESPAÑA
NORMATIVA

Ministerio del Interior
2015

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
<http://publicacionesoficiales.boe.e>

Edita



Fecha de edición: Octubre 2015

NIPO (edición impresa): 126-15-113-1

NIPO (edición web): 126-15-114-7

Depósito Legal: M-33407-2015

Imprime: Tórculo, S. A.



ÍNDICE

Presentación	5
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo	7
Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo	57

PRESENTACIÓN

La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, se aprobó con un amplio consenso parlamentario y se ha identificado internacionalmente como un modelo para el resto de países democráticos en la medida que establece un completo marco de compensación, asistencia, apoyo y reconocimiento a las personas que integran este colectivo. Este hecho determinó que el Ministerio del Interior publicara en 2012 una edición bilingüe de la ley español-inglés.

Las importantes modificaciones que la ley ha experimentado desde 2011 se han incorporado a la publicación sucesivamente, lo que ha permitido disponer de un texto consolidado en todo momento. Esta permanente actualización da ahora un paso más con la presentación en inglés del reglamento que desarrolla la ley, aprobado mediante Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre.

En ambos casos, la iniciativa de la edición ha correspondido a la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación, y la traducción misma de la ley y el reglamento al inglés se ha realizado por el Servicio de Traducción adscrito a dicha Subdirección General. De igual forma, en las dos ocasiones ha participado la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, revisando los textos en inglés, a la que agradecemos tan valiosa colaboración.

Se completa, por tanto, esta publicación bilingüe con el convencimiento de que su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras contribuirá al conocimiento de la normativa básica reguladora del reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo en España.

El Secretario General Técnico
JUAN ANTONIO PUIGSERVER MARTÍNEZ

**Ley 29/2011, de 22 de septiembre,
de Reconocimiento y Protección Integral
a las Víctimas del Terrorismo**

BOE núm. 229, de 23 de septiembre de 2011

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

Con la presente Ley, la sociedad española, a través de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. Esta Ley es, por tanto, un signo de reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida. El apoyo integral que persigue representa el esfuerzo compartido de reparación que las víctimas y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en última instancia la reparación integral de la víctima. De acuerdo con estos cuatro principios fundamentales, el Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones.

El valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. El Estado salvaguarda así el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas.

Las víctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Por ello esta Ley, a través de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de España por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor número de víctimas mortales y de heridos tanto en los ataques

terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional.

Este homenaje no sería genuino ni completo si, al mismo tiempo, no se reconoce el papel que han desempeñado las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Ertzaintza, «Mossos d'Esquadra», o de las policías locales, víctimas todos de atentados terroristas. El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos difíciles años son, sin duda alguna, un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la Constitución y sus valores.

Asimismo los colectivos representativos de las víctimas del terrorismo en nuestro país, asociaciones, fundaciones y movimientos cívicos, numerosos y plurales, son sin duda un pilar fundamental en el apoyo a las familias que han sufrido el zarpazo del terror. Son también un instrumento de participación y de canalización de sus demandas y pretensiones, de visibilidad y vertebración, contribuyendo también a la deslegitimación social del terrorismo y a la difusión de los principios de convivencia democrática en el marco del Estado constitucional y de Derecho. Esta Ley también pretende reforzar su estatus y su papel en nuestra sociedad, reconociéndoles como interlocutores legítimos y favoreciendo sus iniciativas y programas de apoyo a las víctimas. En este sentido, es incompatible con la participación democrática en los distintos ámbitos de representación el apoyo o la justificación del terrorismo.

El respeto a la justicia como exigencia básica del Estado de Derecho, de acuerdo con sus normas y garantías. Los poderes públicos garantizarán en este sentido y en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas. Concretamente, trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal.

Igualmente, los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, de quien ha sufrido el daño y de quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas. En este sentido, la presente Ley es también una manifestación de la condena más firme de la sociedad española hacia el terrorismo practicado en nuestra historia, incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores más elementales de la civilización. Nuestro reconocimiento a sus víctimas mediante esta Ley es la mejor forma de denunciar su sinrazón a lo largo de todos estos años.

El desarrollo de estos principios en la presente Ley y en los términos que ella establece debe perseguir la reparación moral, política y jurídica de las víctimas, expresión a su vez de la solidaridad debida con ellas y sus familias, atendiendo al daño sufrido y a su mejor y más pronta recuperación.

Porque, cuando el terrorismo golpea a las sociedades democráticas, causa víctimas para destruir al Estado y a sus instituciones, afectando a la convivencia en paz y en libertad, en este sentido, el terrorismo, más que otros delitos violentos, supone la cosificación de las personas, a las que pretende privar de su humanidad. Ciudadanos y representantes políticos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, niños y mayores, son utilizados, de forma indiscriminada o selectiva, como medios para fines ideológicos, religiosos o identitarios imposibles e indeseables; el uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia envenena definitivamente éstas y convierte, medios y fines, en un todo incompatible con la libertad, el pluralismo y la democracia.

Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.

Este esfuerzo y compromiso colectivo, plasmado en la presente Ley, se concreta en el reconocimiento y en el apoyo integral a las víctimas del terrorismo que supone asimismo un aumento, también cualitativo, de las ayudas, prestaciones y honores a los que tienen derecho aquéllas.

La Ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del reconocimiento subjetivo de la condición de víctima con el principio de la ciudadanía. La incorporación normativa de este principio lleva a proteger también a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la Unión Europea con independencia de que éstos vayan dirigidos o no contra «intereses españoles», sean realizados por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior.

Los principios de respeto, justicia y solidaridad son los que justifican que se haya reunido en un cuerpo normativo la plural legislación existente con anterioridad y que se vino aprobando desde los orígenes de nuestra democracia para dar respuesta a las necesidades de víctimas y familiares.

Esta Ley integral articulada bajo el principio de constituir un cuerpo legal unitario regula de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas directas y todas aquellas que permitan que la incorporación a la vida familiar, social o laboral se realice en las mejores y óptimas condiciones posibles. Sin perjuicio de que, en determinados aspectos y una vez formulado el reconocimiento de los derechos, deba acudir para su adecuada ejecución a su complementación con otros instrumentos normativos y especialmente en aquellos supuestos en que es necesario contar con las diferentes Administraciones Públicas que ejercen competencias sobre materias específicas; respecto de quienes fallecieron y sus familiares, quienes sufrieron en su integridad, o en aspectos como los de sanidad, vivienda o empleo.

La dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo. Por ello constituye un eje fundamental de la Ley la defensa de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes física o psicológicamente, sufrieron los daños directos y a sus familias.

La prohibición de que en los lugares públicos se haga ostentación mediante símbolos, monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas se complementa con otras medidas de respeto que se incorporan en relación con el tratamiento que los medios de comunicación hagan de las imágenes de personas y familias.

En esta Ley se han mantenido, actualizándolos, todos aquellos aspectos que han estado presentes en la normativa hasta ahora vigente, a la vez que se han incorporado nuevas medidas que responden a propuestas puestas de manifiesto por los colectivos de representación y defensa de las víctimas, y a la necesidad de dar respuesta a nuevas manifestaciones transnacionales del terrorismo o a la participación española en operaciones internacionales de paz y seguridad.

Esta concepción integral de la atención a las víctimas del terrorismo no sería completa si solo se hubiera proyectado hacia el futuro. Por ello la Ley contempla su aplicación retroactiva a todos los actos acaecidos a partir de 1 de enero de 1960 y abre su aplicación retroactiva para quienes en aplicación de la legislación anterior hayan podido recibir en concepto de ayudas o indemnizaciones cuantías inferiores a las que la presente Ley establece.

II

El título primero se inicia definiendo el objeto y finalidad de la Ley desde la perspectiva de la protección integral de las víctimas de terrorismo, destacando de manera expresa la defensa de la dignidad de las víctimas, incor-

porando junto a los destinatarios de la misma una nueva figura, la de los amenazados, y, en cuanto al ámbito temporal, señalando que su aplicación se extiende a los sucesos acaecidos desde el 1 de enero de 1960.

El título segundo incorpora las medidas que, por su carácter general e inmediato, han de ponerse en práctica ante la situación de atentado terrorista. Parte de la necesaria colaboración y cooperación de todas las Administraciones Públicas de manera que los medios de que todas y cada una de ellas disponen, se pongan al servicio de las víctimas y las personas afectadas de manera que reciban y dispongan de atención personalizada para poder hacer efectivos sus derechos.

El título tercero, dedicado a los derechos y prestaciones, se inicia con la enumeración y definición de los distintos destinatarios de esta Ley a la vez que se mantienen las previsiones ya existentes en la normativa anterior sobre su régimen jurídico, sistema de compatibilidad y tratamiento fiscal. A continuación se incorporan las reglas relativas a los abonos por causa de fallecimiento, las personas beneficiarias y el orden de prelación de las mismas. Se regulan, con remisión expresa a los Anexos de la Ley, las prestaciones y ayudas por los daños personales correspondientes. Se contempla la necesaria adecuación en relación con las cargas familiares.

Es en este título donde se incorpora alguna de las principales innovaciones de esta Ley. En primer lugar se ha procedido a unificar en esta Ley las prestaciones que hasta el momento actual venían reguladas de manera diferenciada en las leyes anteriores, a la vez que se ha incrementado su importe. Se mantiene el principio de asunción por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil señalando una cuantía específica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en sus diferentes grados y lesiones no invalidantes, de manera que todas las víctimas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio, evitando con ello posibles diferencias de trato económico ante situaciones iguales. Todo ello sin perjuicio de que las víctimas conservan el ejercicio de acciones civiles para poder reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado.

En segundo lugar se ha regulado expresamente el sistema indemnizatorio para los supuestos de ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero. Regulación que estaba pendiente de desarrollo y que había constituido una de las demandas de las diferentes asociaciones de víctimas. Para configurar estas ayudas excepcionales y en atención a su naturaleza se han tenido en cuenta los criterios generales que son de aplicación en otros ámbitos de la actividad indemnizatoria de la Administración. Así se ha fijado la cuantía del cincuenta por ciento para quienes tengan su residencia habitual en el país en

que se produzcan los daños; y un cuarenta por ciento para quienes no tengan su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista.

A continuación se han incorporado los diferentes artículos en los que se configuran las diferentes indemnizaciones por daños de carácter material, daños sufridos en viviendas y vehículos, en establecimientos mercantiles e industriales y en sedes de organizaciones y partidos políticos.

Respecto del procedimiento de solicitud y tramitación de las ayudas e indemnizaciones se mantiene la competencia en el Ministerio del Interior y se adoptan algunas medidas para simplificar la tramitación y garantizar la participación y presencia de este Ministerio en otros órganos que puedan intervenir y en particular, siempre que así lo autoricen los interesados, para poder recabar información de los Tribunales sobre documentos, informes y otros datos que obren en su poder y que puedan resultar de interés para resolver los expedientes.

En el título cuarto se configura ya de manera integral todo el conjunto de medidas que bajo la denominación de «régimen de protección social» tienen como finalidad atender las necesidades de todo tipo que a lo largo de la vida se generan para quienes se han visto afectados por la acción terrorista.

Respecto de las necesidades de atención sanitaria se incorpora la previsión de formación especializada de los profesionales sanitarios para abordar la atención y tratamiento de las víctimas, en los planes nacionales de salud se incorporará un plan de atención integrada e integral para la atención de las mismas y el Sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica, a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley.

De manera complementaria y adicional se regulan las ayudas para financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas y gastos médicos en las cuantías que puedan no estar cubiertas por los respectivos sistemas de previsión a los que las víctimas estén acogidas.

Para atender las necesidades que se producen como consecuencia de los efectos que las acciones terroristas producen en la vida se garantiza la posibilidad de movilidad geográfica y funcional, la reordenación de los tiempos de trabajo y se contempla la obligatoriedad de que los planes de políticas activas de empleo contemplen un apartado dirigido a las víctimas en condiciones adecuadas a sus necesidades físicas o psíquicas.

Estas medidas permitirán a quienes hayan sufrido la acción terrorista no solo poder continuar con sus actividades profesionales sino adquirir nuevas formaciones para incorporarse en condiciones de calidad a la vida laboral.

Se contempla la posibilidad de que por parte del Ministerio del Interior y atendiendo a situaciones de especial necesidad personal o familiar se puedan

otorgar ayudas extraordinarias. Si bien la Ley en su conjunto ofrece todo un sistema de garantía de apoyo y ayuda, se ha considerado necesario dotar a la Administración de un instrumento complementario para poder atender a quienes se puedan encontrar en estas situaciones especiales.

Se incorporan previsiones relativas a la posibilidad de ejercer derecho de preferencia de acceso a vivienda tanto en régimen de adquisición como de alquiler para quienes puedan necesitar, como resultado o secuelas de la acción terrorista, cambiar de vivienda o lugar de residencia.

En el ámbito educativo se regulan las exenciones de tasas académicas, sistemas de becas y apoyo dentro del sistema educativo, junto a la adaptación de los sistemas de enseñanza.

Se completa con la previsión de que a los extranjeros que en España sean víctimas de terrorismo se tenga en cuenta esta condición para la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza.

El capítulo séptimo de este título cuarto es reflejo de la importancia que la defensa y protección de la dignidad de las personas víctimas de terrorismo tiene para la sociedad en su conjunto. La protección de su intimidad, la declaración de ilicitud de aquella publicidad que pretenda dar un trato despectivo o vejatorio a las víctimas o familiares, la necesidad de que por parte de los medios de comunicación se evite todo uso desproporcionado o inadecuado de las imágenes personales de las mismas y la realización por parte de las Administraciones Públicas de campañas y actividades de formación y sensibilización de los profesionales de la información, darán como resultado que la dignidad de las víctimas sea respetada en todo momento.

El título quinto está destinado en su totalidad a proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jurídica especializada, se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas, para prevenir una victimización secundaria.

En todo caso los Jueces y Tribunales velarán y protegerán la dignidad y la seguridad personal de las víctimas en la tramitación del proceso, evitando la utilización de signos e inscripciones que puedan ofenderles o denigrarles.

Dentro de estas medidas se contempla la implementación y consolidación de una oficina de apoyo a las víctimas en la Audiencia Nacional y de oficinas específicas para la atención personalizada atendidas por personal especializado.

La defensa de la dignidad de las personas víctimas de acciones terroristas se complementa en el título sexto con el necesario reconocimiento público y social a través del sistema de condecoraciones y honores públicos, La Real Orden de Reconocimiento de las víctimas del terrorismo que se otorga, con

el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas y, con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas.

Además se establece que los poderes públicos impulsarán medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas, y mediante actos, símbolos, monumentos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y que velarán por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las víctimas del terrorismo en todos los actos institucionales que les afecten.

El contenido del título séptimo responde a la necesidad de proteger la dignidad pública de las víctimas. El Estado asume esta protección y se declara expresamente la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas. Para ello las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar estas situaciones.

El Ministerio del Interior asume la obligación de mantener los adecuados cauces de información, apoyo y participación, así como la elaboración de informes y la presentación de iniciativas y propuestas normativas que resulten necesarias a la vista de la experiencia y de las necesidades que se vayan poniendo de manifiesto para mantener debidamente actualizadas las necesidades de apoyo y protección a las personas víctimas del terrorismo.

La esencial labor desarrollada por las asociaciones y organizaciones de víctimas justifica que, dentro de este título, se dedique un capítulo especial al fomento del movimiento asociativo.

Además de formular una declaración expresa al reconocimiento público y social de su labor se recoge la actividad subvencional destinada a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de las víctimas.

En cumplimiento de esos principios y de configurar un marco legislativo que dé respuesta a la necesidad de protección integral para las víctimas del terrorismo no solo se han establecido previsiones hacia el futuro. Por ello la Ley en su disposición adicional primera aborda la aplicación retroactiva para quienes a lo largo del tiempo hubieran podido recibir indemnizaciones o compensaciones económicas inferiores a las contempladas en el anexo I de la norma.

En las disposiciones adicionales se complementan las previsiones sustantivas incorporadas en el texto, con la creación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Comisión de Análisis del tratamiento de las víctimas del terrorismo, la incorporación dentro del Plan de Empleo del Reino de España de un plan propio para quienes siendo víctimas del terrorismo se encuentren inscritos como demandantes de empleo, la adopción de medidas sobre el acceso de las víctimas al empleo público, y la actualización de las indemnizaciones por daños.

Título primero. Disposiciones generales

Título segundo. Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la protección de las víctimas

Título tercero. De los derechos y prestaciones derivados de actos de terrorismo

Capítulo primero. Disposiciones generales

Capítulo segundo. Abono de daños

Sección primera. Daños personales

Sección segunda. Daños materiales

Capítulo tercero. Procedimiento y competencia

Título cuarto. Régimen de protección social

Capítulo primero. Asistencia sanitaria

Capítulo segundo. Derechos laborales y de Seguridad Social

Capítulo tercero. Ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo

Capítulo cuarto. Actuaciones en materia de vivienda

Capítulo quinto. Ayudas educativas

Capítulo sexto. Derechos específicos de los extranjeros víctimas del terrorismo

Capítulo séptimo. Derechos de los afectados en el tratamiento de las informaciones correspondientes a las víctimas del terrorismo

Título quinto. Protección de las víctimas en los procesos judiciales

Capítulo único. Principios rectores y derechos de la víctima de terrorismo ante los Tribunales españoles

Título sexto. Reconocimientos y condecoraciones

Título séptimo. Tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo

Capítulo primero. Tutela institucional

Capítulo segundo. Fomento del movimiento asociativo y fundacional

Anexo I. Indemnizaciones por daños físicos y psicofísicos. Baremos

Disposición adicional primera. *Aplicación retroactiva a quienes ya hubieran obtenido ayudas e indemnizaciones*

Disposición adicional segunda. *Comisión de Análisis del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud*

Disposición adicional tercera. *Plan de Empleo*

Disposición adicional cuarta. *Medidas de empleo público*

Disposición adicional quinta. *Competencias autonómicas*

Disposición adicional sexta. *Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo*

Disposición adicional séptima. *Actualización de las indemnizaciones por daños físicos y psicofísicos*

Disposición transitoria

Disposición derogatoria única

Disposiciones finales

Disposición final primera. *Desarrollo reglamentario*

Disposición final segunda. *Consideración de las asociaciones de víctimas como asociaciones de utilidad pública*

Disposición final tercera. *Consignación económico-presupuestaria de la Ley*

Disposición final cuarta. *Normas supletorias*

Disposición final quinta. *Entrada en vigor*

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista.

Artículo 2. Valores y finalidad

1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad.
2. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político. Dignidad, simbolizando en las víctimas la defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las víctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.
3. Para el cumplimiento de estos valores la Ley articula un conjunto integral de medidas que corresponde impulsar e implantar a la Administración General del Estado y a las Administraciones Públicas competentes, encaminadas a conseguir los siguientes fines:
 - a) Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y asegurar la reparación efectiva y la justicia con las mismas.
 - b) Dotar de una protección integral a las víctimas del terrorismo.
 - c) Resarcir a las víctimas, mediante las indemnizaciones y ayudas previstas en la Ley, de los daños personales y materiales sufridos como consecuencia de la acción terrorista.
 - d) Fortalecer las medidas de atención a las víctimas del terrorismo, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito de la protección social, los servicios sociales y sanitarios.
 - e) Reconocer los derechos de las víctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

- f) Establecer mecanismos de flexibilización y coordinación en el conjunto de trámites administrativos que son precisos para obtener las indemnizaciones, ayudas y prestaciones previstas en la Ley.
- g) Establecer un marco específico en el tratamiento procesal de las víctimas, especialmente en los procesos en los que sean partes. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra el terrorismo.
- h) Reconocer y apoyar a las personas objeto de amenazas y coacciones de los grupos terroristas y de su entorno.

Artículo 3. Destinatarios

La presente Ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.

Será aplicable igualmente, a las víctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines señalados en el párrafo precedente aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales.

Artículo 3 bis¹. Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones previstas en la ley

1. Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la presente ley aquellas personas en las que concurra alguno de los dos siguientes supuestos:
 - a) Cuando en virtud de sentencia firme, se les hubiere reconocido el derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en esta ley.
 - b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En estos casos, la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

¹ Artículo añadido por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012). Modificado por Ley 17/2012, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE núm. 312, de 28 de diciembre de 2012).

2. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.

Artículo 4². Titulares de los derechos y prestaciones

Se considerará titulares de los derechos y prestaciones regulados en la presente Ley a:

1. Las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley, son consideradas como víctimas del terrorismo.
2. Las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la víctima al que se refiere el apartado anterior, y en los términos y con el orden de preferencia establecido en el artículo 17 de esta Ley, puedan ser titulares de las ayudas o de los derechos por razón del parentesco, o la convivencia o relación de dependencia con la persona fallecida.
3. Las personas que sufran daños materiales, cuando, conforme a este artículo, no tengan la consideración de víctima de actos de terrorismo o de titular de ayudas, prestaciones o indemnizaciones.
4. Los términos del reconocimiento de la consideración de víctima o destinatario de las ayudas, prestaciones, e indemnizaciones serán los que establezca para cada una de las situaciones esta Ley y sus normas reglamentarias de desarrollo.
5. En el supuesto de fallecimiento, serán considerados como víctimas del terrorismo, exclusivamente a efectos honoríficos, de respeto, dignidad y defensa pública de estos valores, el cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, abuelos y hermanos. Todo ello sin perjuicio de los derechos, prestaciones, indemnizaciones y demás ayudas que les otorga la presente Ley.
6. Los familiares de los fallecidos y de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados, hasta el segundo grado de consanguinidad, así como las personas que, habiendo sido objeto de atentados terroristas, hayan resultado ilesas, a efectos honoríficos y de condecoraciones, sin derecho a compensación económica alguna.

² Apartado 6 modificado por Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015).

Artículo 5³. De los amenazados

Las personas que acrediten, en los términos del artículo 3 bis de la Ley, sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias por parte de las Administraciones Públicas.

Artículo 6. Ámbito de aplicación territorial

1. El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones se aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española.
2. Asimismo, será aplicable:
 - a) A las personas de nacionalidad española que sean víctimas en el extranjero de grupos que operen habitualmente en España o de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado español o los intereses españoles.
 - b) A los participantes en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista.
3. Los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional, no comprendidos en los apartados precedentes, tendrán derecho a percibir exclusivamente la ayuda fijada en el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 7. Ámbito de aplicación temporal

Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a los hechos que se hubieran cometido desde el 1 de enero de 1960.

³Modificado por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).

TÍTULO SEGUNDO

Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la protección de las víctimas

Artículo 8. Información general

1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán protocolos generales de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista, con la finalidad de prever las acciones inmediatas a ejecutar y los servicios u organismos llamados a intervenir en estos casos. La Administración General del Estado establecerá los criterios para la elaboración de los citados protocolos.
2. Para conseguir la máxima eficacia en la ejecución de los protocolos, las Administraciones Públicas establecerán mecanismos específicos de coordinación y cooperación que comprenderán la creación de unidades o puestos de mando integrados por los responsables de los distintos servicios o intervinientes.
3. Corresponde al Ministerio del Interior, a través de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, y de la Dirección General responsable de la asistencia a las víctimas del terrorismo, impulsar y coordinar la elaboración, ejecución y difusión de los protocolos.

Artículo 9. Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata

1. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán, con carácter inmediato y gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y buscando en todo caso su mejor y más pronta recuperación.
2. A tales efectos, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas para articular un sistema inmediato, coordinado y suficientemente organizado capaz de paliar, en el plano individual, los efectos de un atentado terrorista.

Artículo 10. Asistencia sanitaria de urgencia

1. La asistencia sanitaria de urgencia será prestada por los órganos y entidades que componen el Sistema Nacional de Salud en las condiciones que establezcan sus normas de funcionamiento.

2. Las autoridades sanitarias y el personal de dirección de los establecimientos sanitarios adoptarán procedimientos específicos dirigidos a localizar e informar a los familiares de las víctimas sobre el estado de éstas. El Ministerio del Interior será el habilitado para recabar de las citadas autoridades y centros sanitarios cuanta información precise para la debida prestación de los servicios de atención a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.
3. La asistencia a la que se refiere este artículo incluirá, en el régimen que reglamentariamente se determine, la asistencia psicológica y psiquiátrica que sea necesaria hasta que se adquiera este derecho de conformidad con lo que se indica en los artículos siguientes.

Artículo 11. Información específica sobre ayudas, indemnizaciones y demás prestaciones

1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan.
2. Dicha información será personalizada y adaptada a las características y a las situaciones que padecen las personas afectadas por un atentado terrorista, y estará orientada al reconocimiento del régimen previsto en esta Ley y al conjunto de prestaciones que se contienen en el Sistema Nacional de Salud.
3. Se articularán los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizará que las personas a las que la presente Ley es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades.

Artículo 12. Gastos de sepelio e inhumación

La Administración General del Estado, en los términos que reglamentariamente se establezcan, asumirá los gastos de traslado, sepelio e inhumación e/o incineración de las personas que resulten fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista.

Artículo 13. Asistencia consular y diplomática

La Administración General del Estado en el exterior establecerá instrumentos de atención específica a las víctimas españolas mediante asistencia consular y diplomática efectiva en las situaciones de atentado terrorista en el extranjero.

TÍTULO TERCERO

De los derechos y prestaciones derivados de actos de terrorismo

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 14. Delimitación de los derechos y prestaciones

1. Las personas comprendidas en el artículo 4, apartado primero, tendrán los derechos y las prestaciones establecidas en esta Ley por los daños personales que les hayan causado las acciones terroristas. Si como consecuencia de la actividad delictiva la víctima hubiese fallecido, los titulares serán las personas que se indican en el artículo 4 apartado segundo de la Ley.
2. Las personas comprendidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, tendrán, asimismo, derecho a que el Estado les abone la cantidad impuesta a los condenados en concepto de responsabilidad civil en virtud de sentencia firme por terrorismo, en los términos previstos en esta Ley.
3. Las personas comprendidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, tendrán derecho a obtener las prestaciones de los regímenes públicos de protección social con el alcance y régimen específico establecidos en la presente Ley.
4. Las personas comprendidas en el artículo 4, apartado 3, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones por daños materiales previstas en esta Ley.
5. Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas se regirán por las disposiciones específicas del Sistema de la Seguridad Social o del Régimen de Clases Pasivas del Estado que corresponda.

Artículo 15. Régimen jurídico de las ayudas

1. Las ayudas e indemnizaciones establecidas en esta Ley son compatibles con las pensiones, ayudas y compensaciones que pudieran reconocerse en ella o en cualquier otra que pudieran dictar las Comunidades Autónomas.
2. Asimismo, son compatibles con la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por el normal o anormal funcionamiento de la Administración, si bien aquéllas se imputarán a la indemnización que pudiera reconocerse por este concepto, detrayéndose de la misma.

Artículo 16. Exenciones tributarias

Las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones, resarcimientos o ayudas de carácter económico a que se refiere la presente Ley estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de cualquier impuesto personal que pudiera recaer sobre las mismas.

CAPÍTULO SEGUNDO

Abono de daños

SECCIÓN 1ª. Daños personales

Artículo 17. Resarcimiento por fallecimiento

1. En el caso de fallecimiento se abonarán las cantidades dispuestas en el anexo I.
2. Los titulares de este derecho, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, serán, por orden de preferencia, las siguientes personas:
 - a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida.
 - b) En caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida.
 - c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella.
3. En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge o conviviente y la otra a los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales.
4. En los supuestos de concurrencia de personas con el mismo parentesco, la cuantía total se repartirá entre ellas por partes iguales.

Artículo 18. Resarcimiento por daños personales

Las víctimas del terrorismo que como consecuencia del delito sufran daños personales tendrán derecho a las indemnizaciones fijadas en las tablas I, II y III del anexo de esta Ley para los distintos grados de incapacidad, lesiones no invalidantes y secuestro.

Artículo 19. Adecuación en función de las cargas familiares

Las personas a que se refiere el artículo 17, y las víctimas afectadas con un grado de incapacidad permanente, tendrán derecho a que la ayuda que perciban sea incrementada en una cantidad fija de veinte mensualidades del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que corresponda, en razón de cada uno de los hijos, o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima.

Artículo 20⁴. Abono por el Estado de la responsabilidad civil fijada en sentencia. Carácter extraordinario del abono

1. El Estado asumirá con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisión de alguno de los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
2. Las indemnizaciones se extenderán únicamente a los daños físicos o psíquicos.
3. La indemnización se abonará a las víctimas de terrorismo o a las personas indicadas en el artículo 17 y, en defecto de ellas, a sus herederos o a quien se fije como destinatarios en la resolución judicial que se adopte.
4. La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia, no podrá exceder de las siguientes cuantías:
 - Fallecimiento: 500.000 €.
 - Gran Invalidez: 750.000 €.
 - Incapacidad permanente absoluta: 300.000 €.
 - Incapacidad permanente total: 200.000 €.
 - Incapacidad permanente parcial: 125.000 €.
 - Lesiones no invalidantes: 100.000 €.
 - Secuestro: 125.000 €.

⁴Apartado 4 modificado por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE núm. 156, 30 de junio de 2012).

5. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 3 hubieren percibido la ayuda por daños personales, conforme a lo previsto en el artículo 17 de esta Ley, la cuantía del abono extraordinario por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia existente entre la cantidad fijada como responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites del apartado anterior, y la cantidad percibida como ayuda por los daños personales.
6. En el supuesto de que la cuantía de la indemnización fijada en sentencia firme sea igual o inferior a la percibida como ayuda por daños personales, la Administración no desarrollará ninguna actividad.
7. En ningún caso el abono previsto en este artículo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales.

Artículo 21⁵. Subrogación del Estado por el abono de la responsabilidad civil

1. El Estado se subrogará en la titularidad del derecho de crédito nacido de la sentencia que declare la responsabilidad civil derivada del delito hasta el límite de la indemnización satisfecha en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior. La repetición del importe satisfecho por el Estado contra el obligado civilmente por el hecho delictivo se realizará mediante el procedimiento administrativo de apremio previsto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
2. Los destinatarios de las indemnizaciones y prestaciones por terrorismo a quienes la sentencia judicial hubiera reconocido derechos de resarcimiento por un importe superior al recibido del Estado en aplicación de esta Ley, conservarán la acción civil para reclamar la diferencia a los responsables de la acción delictiva causante de los daños.

Artículo 22⁶. Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero

1. Los españoles víctimas de atentados terroristas cometidos fuera del territorio nacional a los que se refiere el artículo 6.3 tendrán derecho a percibir, exclusivamente una ayuda económica, en los términos que a continuación se establecen:
 - Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 50% de las cantidades fijadas en las tablas I, II y III del anexo.

⁵ Apartado 1 modificado por Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE núm. 309, de 26 de diciembre de 2013).

⁶ Apartado 1 modificado por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).

- Si el español no tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 40% de las cantidades fijadas en las tablas I, II y III del anexo.
1. La ayuda económica tendrá carácter subsidiario de las compensaciones que puedan ser reconocidas a la víctima por el Estado donde se haya producido el atentado. Si la indemnización a percibir en el exterior fuera inferior a la establecida en España, el Estado español abonará la diferencia.
 2. En caso de concurrencia de ayudas o compensaciones, el Estado podrá abonar inicialmente el importe total calculado conforme al apartado 1 de este artículo, en calidad de pago a cuenta de la liquidación final correspondiente. En ésta se considerarán los ingresos percibidos por la víctima en el extranjero y se señalará, en su caso, la obligación de reintegro al Estado de la cantidad que proceda.
 3. El reconocimiento de esta ayuda no producirá efectos en otras legislaciones específicas.

Artículo 22 bis⁷. Resarcimiento por secuestro

La persona que haya sido objeto de secuestro, como consecuencia de acciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ley, exigiéndose alguna condición para su libertad, será indemnizada con la cantidad de 12.000 €. En su caso, será indemnizada por los daños personales que el acto de secuestro le haya causado, con el límite de la indemnización por incapacidad permanente parcial y por los días de secuestro según las cuantías resultantes de aplicar la Tabla III del Anexo.

Artículo 22 ter⁸. Anticipos y pagos a cuenta

El Ministerio del Interior podrá anticipar hasta 18.030,36 €, a cuenta de la percepción de la ayuda definitiva, en los casos en que por la gravedad de las lesiones sufridas por la acción terrorista, sea razonable presumir una posterior declaración de incapacidad laboral permanente total, absoluta o una gran invalidez de la víctima.

Igualmente, en los casos de lesiones invalidantes o de incapacidad temporal, podrán abonarse trimestralmente los períodos de baja laboral. Estas cantidades a cuenta serán equivalentes a las que resulte de multiplicar el duplo del IPREM vigente en la fecha en que se produjo la lesión por los días de incapacidad.

⁷ Añadido por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).

⁸ Añadido por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).

SECCIÓN 2ª. Daños materiales

Artículo 23. Alcance de la indemnización por daños materiales

1. Los daños materiales causados como consecuencia o con ocasión de los delitos de terrorismo a quienes no fueren responsables de los mismos, serán resarcibles por la Administración General del Estado en los términos previstos en el presente artículo y los artículos siguientes.
2. La indemnización comprenderá los daños causados en la vivienda de las personas físicas, en establecimientos mercantiles, industriales o elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y los producidos en vehículos.

La Administración General del Estado podrá encargar la reparación de los inmuebles referidos en el apartado anterior a empresas constructoras, abonando directamente a éstas su importe.

Los contratos administrativos a que den lugar las obras de reparación se tramitarán por el procedimiento de emergencia previsto en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sin perjuicio de ello, la Administración General del Estado podrá celebrar convenios con otras Administraciones Públicas, al objeto de que éstas asuman la ejecución de las obras de reparación, abonando aquélla su importe.

Los damnificados que se hubieran beneficiado de obras de reparación realizadas por la Administración General del Estado decaerán en su derecho a reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros las indemnizaciones correspondientes a los daños reparados en los bienes asegurados, las cuales serán percibidas por la empresa ejecutora de las obras, o por la Administración actuante mediante convenio, conforme a las peritaciones oficiales de dicho Consorcio.

3. Los resarcimientos por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad recibida por estos conceptos.
4. No serán resarcibles los daños causados en bienes de titularidad pública.

Artículo 24. Daños en las viviendas

1. En las viviendas habituales de las personas físicas serán indemnizables los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que recuperen las condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos suntuarios. En las viviendas que no tengan el carácter de residencia habitual, el resarcimiento comprenderá el

cincuenta por ciento de los daños, con el límite por vivienda que se determine reglamentariamente.

2. La Administración General del Estado podrá contribuir a sufragar los gastos que origine el alojamiento provisional de aquellas personas que, como consecuencia de un atentado terrorista, tengan que abandonar temporalmente su vivienda y mientras se efectúan las obras de reparación. A estos efectos, podrá celebrar convenios o acuerdos con otras Administraciones Públicas o con organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de siniestro o catástrofe.

Artículo 25. Daños en establecimientos mercantiles o industriales

1. En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos, incluyendo el mobiliario y equipo siniestrado, con el límite de indemnización que se fije reglamentariamente.
2. Con independencia de ello, la Administración General del Estado podrá acordar, en supuestos excepcionales y, en particular, cuando como consecuencia del acto terrorista quedare interrumpida la actividad de una empresa, con riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo, subsidiar la concesión de préstamos destinados a la reanudación de dicha actividad.
3. El subsidio consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista de la diferencia existente entre los pagos de amortización de capital e intereses al tipo de interés fijado por la entidad prestamista, y los que corresponderían al tipo de interés subsidiado, que se determinará en las normas de desarrollo.
4. También podrá celebrar la Administración General del Estado convenios con entidades de crédito al objeto de que éstas establezcan modalidades de créditos a bajo interés, con la finalidad indicada en el párrafo precedente.

Artículo 26. Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales

1. En el caso de sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, el resarcimiento comprenderá el valor de las reparaciones necesarias para que recuperen sus condiciones anteriores de funcionamiento, incluyendo el mobiliario y el equipo siniestrado.
2. Se entenderán comprendidos como daños indemnizables de esta naturaleza, los producidos por actos terroristas en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas.

Artículo 27. Daños en vehículos

1. Serán resarcibles los daños causados en vehículos particulares así como los sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, salvo los de titularidad pública. Para que proceda la indemnización, será requisito indispensable disponer en el momento del siniestro de póliza vigente del seguro obligatorio del vehículo. Siempre que de acuerdo con la normativa específica sea exigible dicho seguro.
2. El resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación. En caso de destrucción del vehículo, o cuando la reparación resulte superior a su valor venal, la indemnización será equivalente al importe de adquisición en el mercado de un vehículo de similares características técnicas y condiciones de uso al siniestrado, con el límite máximo que se establezca reglamentariamente.
3. El resarcimiento tendrá carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contratos de seguro, reduciéndose en cuantía igual al valor de dichos resarcimientos o indemnizaciones, de concurrir éstos.

CAPÍTULO TERCERO

Procedimiento y competencia

Artículo 28^º. Procedimiento para la indemnización por daños corporales o materiales

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el Ministerio del Interior.

Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde que se produjeron los daños. A efectos de plazos, se computa el daño corporal a fecha de alta o consolidación de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. En los supuestos en que, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que correspondiera por fallecimiento.

^ºApartado 1 modificado por Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE núm. 312, de 28 de diciembre de 2012).

De igual modo se procederá cuando, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.

En los casos de daños psicológicos, el plazo de un año empezará a contar desde el momento en el que existiera un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela.

Si la víctima incapacitada hubiera fallecido por causa distinta a las secuelas derivadas del atentado, resultarán beneficiarios de la indemnización que hubiera correspondido al causante las personas a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley, según el orden de preferencia establecido en el mismo.

2. Para la calificación de las lesiones a efectos indemnizatorios será preceptivo el dictamen emitido por un equipo de valoración de incapacidades cuya composición se determinará reglamentariamente según el sistema sanitario del solicitante de la indemnización. En dichos equipos se integrará, en todo caso, un representante del Ministerio del Interior vinculado con la atención a las víctimas del terrorismo.

La calificación de las lesiones permanentes no invalidantes podrá efectuarse, en su caso, por la Asesoría Médica adscrita a la Unidad Administrativa instructora de los resarcimientos.

3. La tasación pericial de los daños materiales se realizará por los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros, al que se reintegrará el importe de los costes incurridos en la tasación de los bienes no cubiertos por contratos de seguros.
4. Las evaluaciones médicas de las lesiones y las tasaciones periciales de los daños materiales, cuando resulten determinantes para adoptar la resolución, suspenderán el procedimiento hasta su incorporación al expediente indemnizatorio.

El Ministerio del Interior podrá, en el ejercicio de las competencias derivadas de este artículo, recabar los datos sobre los procedimientos de reconocimiento de pensiones extraordinarias por terrorismo relacionados con los solicitantes, que obrasen en los ficheros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

5. Las resoluciones dictadas en los mencionados procedimientos pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición o impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
6. El plazo máximo para la resolución del procedimiento es de 12 meses, entendiéndose estimada la petición en caso de haber transcurrido el citado plazo sin haberse dictado resolución expresa.

Artículo 29. Unificación de los órganos de instrucción

1. En el Ministerio del Interior existirá un único órgano administrativo al que corresponderá la instrucción de todos los expedientes a que se refieren los artículos anteriores.
2. Los documentos de evaluación de lesiones que pueda realizar cualquier órgano de la Administración General del Estado vincularán, en lo que a dicha calificación se refiere, a cualquier otro que, conforme a esta Ley, venga obligado a efectuar dicha evaluación para el reconocimiento de una ayuda o prestación, y dispensan a los interesados de la obligación de someterse a nuevos reconocimientos médicos para acreditar dicha evaluación.
3. El citado órgano operará, además, como ventanilla única de cualquier otro procedimiento que pudieran iniciar los interesados ante la Administración General del Estado asumiendo la remisión al órgano competente de las peticiones deducidas y la relación con el interesado.

Artículo 30. Relación con los tribunales

A los efectos de la tramitación de los procedimientos descritos en los artículos anteriores y con la finalidad de comprobar las situaciones y circunstancias que son precisas para la instrucción de los mismos y de evitar molestias y trámites a los interesados, el Ministerio del Interior podrá recabar directamente de los órganos jurisdiccionales los antecedentes, datos o informes que resulten necesarios para la tramitación de los expedientes cuando los interesados autoricen tal petición en el curso de los expedientes en los que son parte.

TÍTULO CUARTO

Régimen de protección social

CAPÍTULO PRIMERO

Asistencia sanitaria

Artículo 31. Sensibilización y tratamiento específico de las víctimas del terrorismo

1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán la actuación de los profesionales sanitarios para la atención específica de las víctimas del terrorismo, y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la atención a las mismas.
2. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico, la asistencia coordinada y la rehabilitación de las víctimas del terrorismo.
3. En los Planes Nacionales de Salud que procedan, se contemplará un apartado de intervención integral y coordinada en los supuestos de las víctimas del terrorismo.
4. El Sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica, a las personas comprendidas en el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, sin que de ello se derive automáticamente derecho alguno en el ámbito de la reparación o de la compensación económica.

Artículo 32. Ayudas para tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria a la dispensada por el Sistema Nacional de Salud

1. Las personas a que se refieren el artículo 4 en sus apartados 1 y 2 podrán recibir ayudas específicas destinadas a financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas, siempre que se acredite la necesidad actual de ellos, que tuviesen vinculación con el atentado terrorista y que no hubieran sido cubiertos bien por un sistema público o privado de aseguramiento, bien por el régimen público de resarcimientos o ayudas a las víctimas de actos terroristas.

2. Serán igualmente resarcibles los gastos por tratamientos médicos, en la cuantía no cubierta por cualquier sistema de previsión al que estas personas estuvieren acogidas.
3. Estas ayudas son complementarias y adicionales a las que se determinan en la presente Ley.

Serán incompatibles con las que establezca, por los mismos conceptos, el sistema público sanitario, y no podrán ser indemnizadas cuando la prestación en cuestión sea cubierta por aquél.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos laborales y de Seguridad Social

Artículo 33¹⁰. Derechos laborales

Las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.

Artículo 34¹¹. De las políticas activas de empleo

Las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos, tendrán derecho, de conformidad con el artículo 3 bis y previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, a ser beneficiarios de las medidas de bonificación a la contratación y de las políticas activas de empleo previstas en la legislación específica.

¹⁰ Modificado por Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012).

¹¹ Modificado por Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012).

Artículo 35. Derechos de los funcionarios y del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas

1. Las personas a las que se refiere el artículo 4, en su apartado 1, que tuviesen la condición de funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica de centro de trabajo, en los términos que se determinen en su legislación específica.
2. En el caso de que se ejercite el derecho a la movilidad geográfica previsto en el apartado anterior, los cónyuges o personas vinculadas por análoga relación de afectividad con aquéllos, tendrán derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que vengan desempeñando, si hubiera plaza vacante en la misma localidad.
3. Estos derechos, en la medida en que resulte compatible con su propio régimen jurídico, serán aplicables, igualmente y en los términos que establezca su legislación específica, al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO TERCERO

Ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo

Artículo 36. Ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo

Sin perjuicio de los resarcimientos y ayudas de carácter ordinario, el Ministerio del Interior podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas. Estas ayudas son compatibles con las ayudas ordinarias previstas en esta Ley.

CAPÍTULO CUARTO

Actuaciones en materia de vivienda

Artículo 37. Tratamiento específico en materia de vivienda pública

Las Administraciones Públicas procurarán que las personas incluidas en el artículo 4 de esta Ley tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente, cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aquella en la que vivían.

1. Las Administraciones Públicas velarán por el establecimiento de un régimen preferente para que también puedan ocupar viviendas de alquiler cuando sean gestionadas mediante sistemas u organizaciones públicas.
2. Las Administraciones Públicas establecerán ayudas para la adaptación de las viviendas de aquellas víctimas que lo requieran debido a las secuelas devenidas de actos terroristas.

CAPÍTULO QUINTO

Ayudas educativas

Artículo 38¹². Exención de tasas académicas

Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas de actos terroristas definidas en el artículo 4, apartado 1, de la presente Ley, así como a los hijos de aquéllos que hayan fallecido en acto terrorista o de aquéllos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a consecuencia de la actividad terrorista.

Artículo 39. Concesión de ayudas al estudio

1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual.
2. Las normas de desarrollo de la presente disposición determinarán las modalidades de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción, estableciendo, en todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras Administraciones Públicas.

Artículo 40. Régimen específico de asistencia a las víctimas en el sistema educativo

1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia educativa podrán establecer un sistema de atención específica a las víctimas del te-

¹² Modificado por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).

- rorismo a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, en sus apartados 1 y 2, mediante la designación de tutores u otros sistemas que permitan la atención individualizada y faciliten la continuación de los estudios que estaban realizando o que pudiesen realizar.
2. Asimismo, las citadas autoridades, en colaboración con los directores y responsables de los centros docentes, procurarán, si fuera preciso, adaptar el régimen docente a sus condiciones físico-psíquicas.

CAPÍTULO SEXTO

Derechos específicos de los extranjeros víctimas del terrorismo

Artículo 41. Concesión de la nacionalidad

La condición de víctima del terrorismo a que se refiere el artículo 4.1 de esta Ley se considerará como circunstancia excepcional a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Derechos de los afectados en el tratamiento de las informaciones correspondientes a las víctimas del terrorismo

Artículo 42. De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad

En las actuaciones y procedimientos relacionados con el terrorismo, se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.

Artículo 43. Publicidad ilícita

De acuerdo con lo establecido en la legislación específica en la materia, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de las víctimas con carácter despreciativo, vejatorio o sensacionalista o con ánimo lucrativo.

Artículo 44. Vigilancia y control

Las instituciones a las que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de las víctimas del terrorismo conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones que puedan adoptar otras entidades.

Artículo 45. Acciones de cesación y rectificación

Las personas reseñadas en el artículo 4 de esta Ley estarán legitimadas para ejercitar ante los Tribunales las acciones de cesación y rectificación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de las víctimas del terrorismo, en los términos que se señalen en la legislación específica.

Artículo 46. Principios aplicables a la información sobre las víctimas del terrorismo

1. Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la imagen de las víctimas del terrorismo, evitando cualquier utilización inadecuada y desproporcionada de ella.
2. La difusión de informaciones relativas a las víctimas del terrorismo tendrá en cuenta el respeto a los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mismas y de sus familias. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Artículo 47. Medios de comunicación

1. A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo anterior, las Administraciones Públicas promoverán acuerdos de autorregulación dotados de mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces que contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
2. Para conseguir la mejor realización de los fines indicados en este artículo y en los precedentes, las Administraciones Públicas competentes podrán promover campañas de sensibilización y formación continuada de los profesionales de la información.

TÍTULO QUINTO

Protección de las víctimas en los procesos judiciales

CAPÍTULO ÚNICO

Principios rectores y derechos de la víctima de terrorismo ante los Tribunales españoles

Artículo 48. Derecho a la asistencia jurídica gratuita

1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la representación y defensa gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima.
Este derecho asistirá también a las personas a que se refiere el artículo 4 en caso de fallecimiento de la víctima.
2. En todo caso, se garantizará la asistencia jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el citado derecho, deberán abonar al Abogado y al Procurador, en su caso, los honorarios devengados por su intervención.

Artículo 49. Mínima lesividad en la participación en el proceso

Los Tribunales velarán por que toda declaración o intervención de alguna de las personas previstas en el artículo 4 de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2, se realice de forma que les suponga las mínimas incomodidades y perjuicios. En particular, se procurará por todos los medios previstos en las leyes que estas personas en sus actuaciones procesales no tengan relación directa visual o sonora con los imputados o acusados por la comisión de acciones terroristas.

En todo caso los Jueces y Tribunales velarán y protegerán la dignidad y la seguridad personal de las víctimas en la tramitación del proceso, evitando la utilización de signos e inscripciones que puedan ofenderlas o denigrarlas.

Artículo 50. Información especializada

1. Las Administraciones Públicas con competencia en materia de medios materiales sobre la Justicia, en colaboración con los órganos de gobierno del Poder Judicial, establecerán los mecanismos de información personalizada que permitan a las personas señaladas en el artículo 4 de la presente Ley conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos.
2. Específicamente, el Ministerio de Justicia establecerá una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.
3. Los citados mecanismos de información pueden consistir en la creación de oficinas específicas, en la presentación telemática de informaciones y en cualquier otro que permita obtener la información que deseen aminorando la dificultad de obtener la misma.
4. Las personas que presten la citada información y atención deberán tener la cualificación suficiente para evitar la duplicidad de trámites y las personaciones innecesarias ante los correspondientes órganos jurisdiccionales.

Artículo 51. Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo

Entre las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional se encuentran:

- Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas del terrorismo.
- Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten.
- Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados.
- Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración.
- Establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados.

TÍTULO SEXTO

Reconocimientos y condecoraciones

Artículo 52¹³. Condecoraciones

1. La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo.
2. Esta acción honorífica se otorga con el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas; con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas; y con el grado de Insignia, a los que tengan la condición de amenazados, a los ilesos en atentado terrorista, así como al cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, los abuelos, los hermanos y los nietos de los fallecidos, así como a los familiares de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados hasta el segundo grado de consanguinidad.
3. El procedimiento para su reconocimiento es el previsto en el artículo 54 de esta Ley.

Artículo 53¹⁴. Requisitos para la concesión de las condecoraciones

1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2 de esta Ley podrán ser titulares de las condecoraciones con el grado de Gran Cruz y Encomienda, en los términos previstos en el artículo anterior.
Las personas a las que se refiere el artículo 4, apartados 5 y 6 y el artículo 5 podrán ser titulares de la condecoración con el grado de Insignia.
2. Las condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente Ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales.

Artículo 54¹⁵. Procedimiento para la concesión de condecoraciones

1. Corresponderá al Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos de concesión de las condecoraciones. Dichos expedientes podrán

¹³ Apartado 2 modificado por Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015).

¹⁴ Apartado 1 modificado por Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE núm. 309, de 26 de diciembre de 2013).

¹⁵ Apartado 1 modificado por Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE núm. 309, de 26 de diciembre de 2013).

ser iniciados a instancia de alguna de las personas a que se refiere el artículo anterior, de las personas que hubiesen sufrido el delito aunque no estuviesen comprendidas dentro de las indicadas en los apartados anteriores, o bien de oficio, previa consulta con los destinatarios, por la Dirección General responsable de la asistencia a las víctimas del terrorismo del citado Ministerio cuando tuviese conocimiento de situaciones que pudieran dar lugar al reconocimiento del derecho.

Cuando la propuesta de condecoración sea la de Gran Cruz, su resolución se producirá mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior.

Cuando la propuesta de condecoración lo sea en el grado de Encomienda y de Insignia, la resolución corresponde al Ministro del Interior y será dictada en nombre de S.M. el Rey.

2. El plazo para la solicitud o para la iniciación de oficio será de cinco años.
3. El plazo máximo para notificar la resolución de las solicitudes será de doce meses desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En aquellos procedimientos en los que no recaiga resolución dentro del plazo señalado, las solicitudes se entenderán estimadas.
4. La resolución estimatoria o desestimatoria pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo.
5. La concesión de una condecoración no comportará por sí misma derecho a las indemnizaciones previstas en esta Ley.

Artículo 55. Reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo en la actividad honorífica del Estado

Con independencia de lo anterior, la condición de víctima del terrorismo será especialmente evaluable para la concesión de las condecoraciones y recompensas que pudieran corresponderles conforme a su profesión, ocupación o lugar de residencia.

Artículo 56. Reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo

Los poderes públicos impulsarán medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas, y mediante actos, símbolos, monumentos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo.

Artículo 57. Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo

El Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para

la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro Nacional para la Memoria de la Víctimas del Terrorismo tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 58. Reconocimiento institucional de la presencia de las víctimas

Se velará por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las víctimas del terrorismo en todos los actos institucionales que les afecten.

Artículo 59. Educación para la defensa de la libertad, la democracia y la paz

Las Administraciones educativas al objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas del terrorismo.

Artículo 60. Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo

Se declara el día 27 de junio de cada año, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.

El día 11 de marzo de cada año se conmemorará el día europeo de las víctimas del terrorismo.

Las instituciones públicas, en esas fechas, impulsarán actos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo con el objeto de mantener su memoria y reivindicar su mensaje ético.

TÍTULO SÉPTIMO

Tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo

CAPÍTULO PRIMERO

Tutela institucional

Artículo 61. Defensa del honor y la dignidad de las víctimas

1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.
2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad.
3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas.
4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes.

Artículo 62. Tutela institucional a las víctimas del terrorismo

1. El Ministerio del Interior designará un órgano de la Administración General del Estado que tendrá por finalidad ser un instrumento de relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo.
2. Asimismo, este órgano actuará en la formulación de propuestas de reformas normativas u organizativas que optimicen el régimen de asistencia y prestaciones establecido o que pueda establecerse para favorecer su situación.

Artículo 63. Informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo

1. El Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaborará informes y realizará estudios, así como propuestas de actuación en materia de asistencia a las víctimas del terrorismo.
2. Dichos informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo destacarán, asimismo, las necesidades de reforma legal al objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las víctimas del terrorismo. Anualmente, el Ministerio del Interior remitirá al Parlamento un informe sobre la situación del colectivo de víctimas del terrorismo y, en su caso, propuestas de actuación.
3. Para la elaboración de estos estudios e informes se procurará, en todo caso, la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y las asociaciones de víctimas.

CAPÍTULO SEGUNDO

Fomento del movimiento asociativo y fundacional

Artículo 64. Reconocimiento del papel y la relevancia del movimiento asociativo

1. Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo contribuyen a fomentar la unión entre las víctimas, la defensa de sus intereses y la mejora de su condición y promueven la concienciación social contra el terrorismo y la preservación de la memoria. Por este motivo, su actuación goza del reconocimiento social que permite a las Administraciones Públicas fomentar su creación y su mantenimiento.
2. Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo son reconocidas por la presente Ley como representantes de las mismas.

Artículo 65¹⁶. Actividad subvencional

La Administración General del Estado deberá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las

¹⁶ Modificado por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado del año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).

asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional se priorizará a aquellas entidades que cuenten con mayor número de víctimas a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones, así como la labor asistencial a favor de las víctimas del terrorismo que se realice por parte de las organizaciones.

ANEXO I

Indemnizaciones por daños físicos y psicofísicos. Baremos

Tabla I. Indemnizaciones por fallecimiento e incapacidades permanentes

Concepto	Euros
Fallecimiento	250.000,00
Gran invalidez	500.000,00
Incapacidad permanente absoluta	180.000,00
Incapacidad permanente total	100.000,00
Incapacidad permanente parcial	75.000,00

Tabla II. Indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes

Las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes se establecerán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la legislación de seguridad social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Tabla III. Indemnizaciones por incapacidad temporal y por secuestro

Concepto	Indemnizaciones
Incapacidad temporal	IPREM/día \times 2, hasta el límite de 18 mensualidades.
Secuestro	IPREM/día \times 3, hasta el límite de lo establecido en este anexo para la incapacidad permanente parcial.

Disposición adicional primera. *Aplicación retroactiva a quienes ya hubieran obtenido ayudas e indemnizaciones*

Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley hubieran percibido como resultado total del importe de las ayudas y del pago, en su caso, de las cuantías por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de esta Ley podrán solicitar en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley, el abono de las diferencias que pudieran corresponderles.

Disposición adicional segunda. *Comisión de Análisis del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud*

1. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisión de Análisis del tratamiento de las víctimas del terrorismo que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias contempladas en esta Ley, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la atención especializada en este ámbito.
2. La Comisión de Tratamiento de las Víctimas del Terrorismo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de las Comunidades Autónomas.
3. La Comisión emitirá un informe anual que será remitido al Pleno del Consejo Interterritorial.

Disposición adicional tercera. *Plan de Empleo*

1. En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se incluirá un programa de acción específico para las personas previstas en el artículo 4, apartado 1 de esta Ley y que consten inscritas como demandantes de empleo.
2. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

Disposición adicional cuarta. *Medidas de empleo público*

Las Administraciones Públicas adoptarán, en el ámbito de sus competencias, medidas conducentes a favorecer el acceso de las víctimas de terrorismo al empleo público.

Disposición adicional quinta. *Competencias autonómicas*

Todo lo establecido en la presente Ley, se entenderá sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia.

Disposición adicional sexta. *Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo*

El Gobierno apoyará e impulsará la aprobación de la Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo, redactada en colaboración con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo del ámbito europeo.

Disposición adicional séptima. *Actualización de las indemnizaciones por daños físicos y psicofísicos*

Las ayudas e indemnizaciones reguladas en esta Ley serán objeto de actualización periódica conforme a las previsiones contenidas en las leyes anuales de Presupuestos Generales de Estado.

Disposición transitoria¹⁷

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que se encuentren en tramitación serán resueltas de conformidad a la normativa aplicable en el momento de presentación de la solicitud.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

¹⁷ Añadida por Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado del año 2012 (BOE núm. 156, de 30 de junio de 2012).

Disposición final primera. *Desarrollo reglamentario*

1. El Gobierno, en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, del Interior y de Trabajo e Inmigración, desarrollará reglamentariamente lo dispuesto en la misma.
2. En el plazo de 1 año, la Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los protocolos de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista. Igualmente, en dicho plazo, impulsará y coordinará la elaboración, ejecución y difusión de esos protocolos de actuación por parte del conjunto de Administraciones Públicas competentes en la materia.

Disposición final segunda. *Consideración de las asociaciones de víctimas como asociaciones de utilidad pública*

Se modifica el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que queda redactado en los siguientes términos:

- a) «Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta Ley, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Disposición final tercera. *Consignación económico-presupuestaria de la Ley*

1. El Gobierno elevará a las Cortes Generales un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para financiar los pagos previsibles a partir de la entrada en vigor de la Ley.
2. Las necesidades presupuestarias ordinarias se consignarán en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final cuarta. *Normas supletorias*

En lo no previsto en esta Ley, será de aplicación la legislación sobre resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo o bandas armadas, las disposiciones sobre subvenciones y ayudas públicas y, en su caso, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Disposición final quinta. *Entrada en vigor*

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

**Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral
a las Víctimas del Terrorismo**

BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2013

El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada por unanimidad por ambas Cámaras legislativas como expresión del reconocimiento y compromiso permanente de la sociedad española hacia todas las víctimas del terrorismo.

En cumplimiento de la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la disposición final primera de la citada disposición legal, el reglamento incorpora las principales novedades legales y se inspira, al igual que aquélla, en una concepción integral de la atención al colectivo de víctimas del terrorismo, así como en los principios de protección de las víctimas de delitos reconocidos por el Derecho de la Unión Europea.

Se recogen en él las reparaciones, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones que se encontraban hasta ahora reguladas de forma separada en los Reales Decretos 288/2003, de 7 de marzo y 1912/1999, de 17 de diciembre, que ordenaban, respectivamente el régimen de resarcimientos por daños derivados del atentado terrorista y el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil derivada de los delitos de terrorismo. Incluye igualmente las distinciones honoríficas anteriormente contempladas en el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

Con la aprobación de este Reglamento se posibilita la plena aplicación del marco de atención integral a las víctimas del terrorismo que estableció la Ley 29/2011 antes citada, permitiendo asimismo avanzar hacia una mejor complementariedad y coordinación de los sistemas de protección de las diversas Administraciones públicas para con las víctimas del terrorismo, objetivo incluido entre las medidas que forman parte del informe para la Comisión de la reforma de las Administraciones Públicas, aprobado por acuerdo de consejo de ministros de fecha 21 de junio de 2013.

La nueva regulación, al igual que la Ley de la que trae causa, persigue asegurar un trato equitativo de las víctimas del terrorismo con independencia del momento y lugar de comisión de los atentados. Dispone, de esta forma, un régimen transitorio destinado a regular los supuestos de aplicación retroactiva de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas desde el 1 de enero de

1960. El ámbito territorial comprende los atentados cometidos en territorio español y en el extranjero, en este último caso tanto si la víctima es española y los daños han sido causados por actos cometidos por grupos que operen habitualmente en España o dirigidos a atentar contra el Estado español o los intereses españoles, como si la víctima es española pero los actos cometidos no reúnen las características mencionadas.

Por lo que se refiere a la estructura del reglamento, éste se ordena en siete títulos y un anexo.

En el título preliminar se dispone el ámbito de aplicación temporal y territorial, los requisitos para la acreditación de la condición de destinatario, la delimitación del contenido de las indemnizaciones, resarcimientos, ayudas y condecoraciones, y el régimen jurídico de las ayudas.

El título primero determina, en sus tres primeros capítulos, los titulares y las cuantías de los resarcimientos que corresponden en los supuestos de fallecimiento, lesiones personales producidas como consecuencia del acto terrorista y secuestro. El cuarto capítulo regula el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil fijada en sentencia. El quinto capítulo dispone el régimen aplicable a las ayudas extraordinarias por atentados terroristas cometidos en el extranjero que no estén incluidas en el régimen general.

El título segundo contempla la regulación de los daños materiales. Se consideran resarcibles, hasta el límite máximo fijado en el reglamento, los daños ocasionados en viviendas, en establecimientos mercantiles o industriales, en la sede de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales, así como los producidos en vehículos.

El título tercero contempla, en su capítulo primero, la prestación de la asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata y sanitaria de urgencia que sea requerida en el supuesto de que eventualmente se produjera un atentado terrorista. Por su parte, los capítulos segundo, tercero y cuarto prevén las ayudas para la asistencia sanitaria y psicossocial complementaria, el tratamiento psicológico, el apoyo psicopedagógico para las víctimas y sus familiares, así como el régimen aplicable a las ayudas educativas y en materia de vivienda pública. Se contempla, asimismo, la posibilidad de otorgar ayudas extraordinarias en los supuestos de necesidad personal o familiar insuficientemente cubiertas y de conceder anticipos a cuenta de las mismas, reguladas en el capítulo quinto. Finalmente, el capítulo sexto recoge una serie de derechos reconocidos en el ámbito laboral a los afectados por la actividad terrorista.

El título cuarto contempla las disposiciones aplicables a la tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones previstas al amparo del reglamento, en el capítulo primero. Asimismo, se establecen en el capítulo segundo las

normas destinadas a facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones a que tuvieran derecho con arreglo a las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, recogiendo así las obligaciones derivadas de la Directiva 2004/80/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de los delitos.

El título quinto incorpora la regulación de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, que puede concederse, de oficio o a solicitud de los interesados, en los grados de Gran Cruz y Encomienda. Con ella se configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo.

Finalmente, el título sexto prevé las disposiciones relativas a la tutela institucional a las víctimas del terrorismo y el anexo contiene los modelos de solicitudes de resarcimientos, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones regulados en el presente reglamento.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de septiembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento

Se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del presente reglamento continuarán su tramitación de conformidad con las normas que les fueran de aplicación en el momento de presentación de la solicitud.

Disposición transitoria segunda. Aplicación retroactiva a quienes ya hubieran obtenido resarcimientos, indemnizaciones y ayudas

1. Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, hubieran percibido como resultado total de los resarcimientos por daños personales, así como del abono, en su caso, de la indemnización

- por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de la citada Ley, podrán solicitar el abono de las diferencias que pudieran corresponderles en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este reglamento.
2. En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este reglamento podrán solicitarse resarcimientos por daños materiales derivados de acciones terroristas que hubieran tenido lugar desde el 1 de enero de 1960, cuando los mismos no hubieran podido ser resarcidos en su día por no estar previsto en el ordenamiento jurídico. En las mismas condiciones, salvo la limitación de plazo, podrán solicitarse ayudas educativas, por tratamientos médicos, asistencia psicopedagógica y extraordinarias.
 3. Para los hechos cometidos antes de la entrada en vigor de este reglamento, el plazo de 5 años previsto en el artículo 49.4 para la concesión de condecoraciones empezará a contar desde el día siguiente al de la publicación de este reglamento.

Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto y, en particular, el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del Terrorismo, y el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo.

Disposición final primera. Título competencial

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española.

Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea

Mediante este reglamento se incorpora al Derecho español la Directiva 2004/80/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a las víctimas de actos de terrorismo cometidos en territorio español o bajo jurisdicción española y a los amenazados por organizaciones y elementos terroristas conforme a lo establecido, respectivamente, en los artículos 3 y 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.
2. Se aplicará igualmente el citado régimen a los hechos cometidos fuera del territorio español, siempre que las víctimas sean de nacionalidad española y concurra, además, alguna de las siguientes circunstancias:
 - a) Que los daños hayan sido causados por actos cometidos por grupos que operen habitualmente en España.
 - b) Que las acciones terroristas estuvieran dirigidas a atentarse contra el Estado español o los intereses españoles.
3. Se aplicará igualmente el citado régimen a los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional no comprendidos en el apartado anterior, en las condiciones previstas en el presente Reglamento.
4. Asimismo, será de aplicación el régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas en el presente reglamento a los participantes en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista.

A estos efectos, se aplicará a:

- a) Los miembros de las Fuerzas Armadas españolas que participen en dichas operaciones, con inclusión de aquellos que, dependientes del Ministerio de Defensa, formen parte de la tripulación de los medios de transporte en los que se realicen los desplazamientos.
 - b) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en dichas operaciones.
 - c) El personal al servicio de las Administraciones Públicas, incluyendo el contratado en España a título individual por el Estado, que se desplace al territorio en que se realice la operación para participar en ella o que se encuentre destinado en dicho territorio.
5. El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a los hechos que se hubieren cometido desde el 1 de enero de 1960.

Artículo 3. Destinatarios

1. Serán destinatarios de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones los afectados por las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la acreditación de la condición de afectado tendrá lugar:
 - a) Por sentencia firme que reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en el ámbito de aplicación de la Ley.
 - b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o la incoación de los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos, en cuyo caso la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho. En los supuestos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 2 de este reglamento, se solicitará informe a los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y del Interior, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los efectos de acreditar los extremos anteriores.
3. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en este reglamento se someterán a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen

en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.

4. Las resoluciones administrativas firmes dictadas por órganos de la Administración General del Estado de las que se derive el reconocimiento a los interesados de la condición de víctimas del terrorismo tendrán eficacia para la tramitación y resolución de los correspondientes expedientes administrativos que se instruyan al amparo de este reglamento, de conformidad con las previsiones que les sean de aplicación.

Artículo 4. Delimitación de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones

1. En el supuesto de fallecimiento de la víctima como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, se reconocerá, en los términos en él contemplados:
 - a) El pago por el Estado de los gastos de traslado, sepelio e inhumación y, en su caso, incineración, efectivamente soportados por los familiares de la víctima, en los términos del artículo 8.
 - b) El abono por el Estado del resarcimiento por fallecimiento en la cuantía reconocida en el artículo 7.
 - c) En su caso, el abono extraordinario a cargo del Estado de la cantidad impuesta en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil por los daños físicos o psíquicos derivados de los hechos comprendidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, en los términos establecidos por el capítulo IV del título I.
 - d) El abono de los daños materiales de conformidad con lo establecido en el título II.
 - e) Las ayudas para tratamientos médicos, asistencia sanitaria y psicosocial complementaria reconocida en el capítulo II del título III.
 - f) Las ayudas educativas de conformidad con lo establecido en el capítulo III del título III.
 - g) Las ayudas en materia de vivienda contempladas en el capítulo IV del título III.
 - h) Las ayudas extraordinarias para situaciones de necesidad, conforme a lo dispuesto en el capítulo V del título III.
 - i) Las condecoraciones otorgadas por el Estado, de conformidad con lo establecido en el título V de este Reglamento.
2. Las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento tendrán derecho al abono por el Estado de los resarcimientos

- por daños personales en las cuantías establecidas por el artículo 10, así como a las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones reconocidas en las letras c) a i) del apartado anterior.
3. Las personas que hayan sido objeto de secuestro, como consecuencia de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, tendrán derecho al abono del resarcimiento en las cuantías establecidas por el artículo 14 de este reglamento, así como a las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones reconocidas en las letras c) a i) del apartado uno.
 4. Las personas que hayan sufrido daños materiales derivados de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y no estén incluidas en alguno de los supuestos anteriores, tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado en los términos establecidos en el título II del presente Reglamento.
 5. Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el exterior y sean víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen habitualmente en España y que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra intereses españoles tendrán derecho al abono por el Estado de los resarcimientos por daños personales en las cuantías establecidas por el artículo 21.

Artículo 5. Régimen especial de ayudas a las personas amenazadas

Las personas amenazadas a las que se refiere el artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, sólo tendrán derecho a la prestación por el Estado de las ayudas extraordinarias del apartado 4 del artículo 42 de este reglamento.

TÍTULO I

Daños personales

CAPÍTULO I

Fallecimiento

Artículo 6. Titulares

1. Serán titulares del derecho de resarcimiento por fallecimiento, con referencia a la fecha en que éste se hubiera producido:
 - a) El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieran legalmente separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida.
 - b) En el caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida.
 - c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente o preadoptivo de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella.

2. De concurrir dentro de un mismo párrafo del apartado anterior varios beneficiarios, la distribución de la cuantía correspondiente al resarcimiento se efectuará de la siguiente manera:
 - a) En el supuesto contemplado por la letra a), la cantidad se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge no separado legalmente o conviviente y otra a los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por partes iguales.
 - b) En el supuesto contemplado en la letra b), la cuantía se repartirá por partes iguales entre las personas con el mismo parentesco.
 - c) En el supuesto contemplado en la letra c), la cuantía se repartirá por partes iguales entre los beneficiarios concurrentes.

3. A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando, en el momento del fallecimiento, viviera total o parcialmente a expensas de éste y no percibiera en cómputo anual rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al 150 por ciento del indicador público de renta que correspondiera en aquel momento, también en cómputo anual.

Artículo 7. Cuantías

La cuantía de indemnización en caso de fallecimiento por acto terrorista será de 250.000 €, cantidad que será incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del indicador público de renta que corresponda a la fecha del acto terrorista, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del fallecimiento.

Artículo 8. Gastos de sepelio e inhumación

1. La Administración General del Estado abonará los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las personas que fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite de 6.000 euros.
2. Los gastos serán satisfechos previa presentación de las facturas correspondientes. Será necesario acompañarlas de la póliza de seguro que cubra estos gastos o de la declaración responsable de ausencia de tal seguro.

CAPÍTULO II

Daños físicos o psíquicos

Artículo 9. Titulares

Serán titulares del derecho al resarcimiento por daños personales, que comprenderán los daños físicos y psíquicos, quienes los hubieran padecido.

Artículo 10. Cuantías

1. Las cuantías de los resarcimientos por daños personales serán las siguientes:
 - a) Gran invalidez: 500.000 euros.
 - b) Incapacidad permanente absoluta: 180.000 euros.
 - c) Incapacidad permanente total: 100.000 euros.
 - d) Incapacidad permanente parcial: 75.000 euros.

- e) Lesiones permanentes no invalidantes: se determinarán de acuerdo con el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación establecido en el anexo del Texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, actualizadas sus cuantías por la resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad, vigente en el momento de presentación de la solicitud, y con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la legislación de Seguridad Social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional. El importe total no podrá exceder, en ningún caso, de la cuantía señalada para la incapacidad permanente parcial.
 - f) Incapacidad temporal: duplo del indicador público de renta diario que corresponda al período en que se encuentre en situación de incapacidad temporal, hasta el límite de 18 mensualidades. A estos efectos, se entenderá que la víctima se encuentra en situación de incapacidad temporal mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el ejercicio de sus actividades profesionales o habituales.
2. Las víctimas afectadas por un grado de incapacidad permanente tendrán derecho a que la ayuda sea incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del indicador público de renta que corresponda, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del acto terrorista que causó la lesión.

Artículo 11. Calificación de las lesiones

1. Para la calificación de las lesiones a efectos de indemnización será preceptivo el dictamen emitido por el equipo de valoración de incapacidades que determine el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que en todo caso se integrará una persona designada por el Ministerio del Interior, al efecto de la valoración del nexo causal de éstas con los actos terroristas. El equipo de valoración de incapacidades sólo requerirá el reconocimiento personal de la víctima y la práctica de pruebas complementarias en los casos en que sea indispensable. No será necesario someterse a nuevos reconocimientos médicos en el supuesto de que los órganos competentes de la Administración General del Estado hayan elaborado ya un informe de calificación de lesiones, en cuyo caso la citada calificación tendrá carácter vinculante para el órgano instructor del procedimiento.

- El coste de los informes, pruebas o exploraciones complementarias será financiado con cargo a los créditos de la sección correspondiente del presupuesto de gastos del Estado, efectuando el Ministerio del Interior el ingreso de las cantidades correspondientes a la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. El informe médico de síntesis consolidado se practicará por un facultativo perteneciente a los servicios médicos de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que el interesado tenga su residencia o, en su defecto, por órgano equivalente del servicio de salud pública de la Comunidad Autónoma.
 3. Para las víctimas no residentes en el territorio nacional, el dictamen se emitirá a la vista de los informes periciales evacuados con motivo de las actuaciones penales seguidas y de los informes y pruebas complementarias que sea preciso recabar de la legación consular más próxima al lugar de residencia de la víctima.
 4. La calificación de las lesiones invalidantes de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía se efectuará por sus respectivos órganos médico-periciales o tribunales. A estos efectos, se incorporará, en todo caso, una persona designada por el Ministerio del Interior para informar sobre la valoración del nexo causal.
 5. La calificación de las lesiones permanentes no invalidantes podrá efectuarse, en su caso, por la asesoría médica adscrita a la unidad administrativa instructora de las ayudas e indemnizaciones, la cual podrá solicitar informes médicos complementarios a los diferentes servicios sanitarios públicos.

Artículo 12. Pagos a cuenta

1. El sistema de pagos a cuenta se aplicará en los supuestos de incapacidad temporal y de lesiones invalidantes derivadas de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento.
2. El Ministerio del Interior podrá anticipar hasta 18.030,36 €, a cuenta de la percepción de la ayuda definitiva en los casos en que, por la gravedad de las lesiones sufridas, sea razonable presumir una posterior declaración de incapacidad permanente total, absoluta o una gran invalidez de la víctima. En tales casos, a instancia de parte o de oficio por el Ministerio del Interior cuando el afectado se viera imposibilitado para ello, el órgano instructor en materia de atención a víctimas del terrorismo tramitará un expediente con carácter de urgencia en el que, una vez comprobado el nexo causal entre las lesiones y los hechos incluidos en el ámbito de aplicación de este reglamento, examinará los informes médicos aportados, a efectos de valorar la presumible incapacidad futura de la víctima, y propondrá a la

Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo la resolución correspondiente sobre la cantidad que deba ser anticipada.

Cuando el afectado no estuviera de acuerdo con la cuantía fijada en dicha resolución, podrá solicitar su reexamen en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de notificación de aquélla

3. En los demás supuestos de lesiones invalidantes o de incapacidad temporal, las cantidades a cuenta serán equivalentes a las que resulte de multiplicar el duplo del indicador público de renta vigente en la fecha en la que se produjo la lesión, por los días de incapacidad, teniendo su abono una periodicidad trimestral.

La instrucción y resolución del procedimiento para su concesión corresponderá a los órganos señalados en el apartado anterior. Para dictar la resolución de concesión, bastará que en el expediente haya quedado acreditada la condición de beneficiario y la situación de baja médica o incapacidad temporal del beneficiario. El primer pago a cuenta estará supeditado, sin embargo, a la presentación del documento que pruebe la permanencia de la situación de baja o incapacidad laboral de la víctima durante todo el período trimestral transcurrido. Los sucesivos abonos, también de periodicidad trimestral, se producirán a medida que se acredite la prolongación de la baja, hasta un plazo máximo de 18 meses.

4. Una vez concedida el alta médica y, en todo caso, transcurrido el plazo de 18 meses previsto en el anterior apartado, se tramitará expediente para el pago total del resarcimiento que corresponda, del que se descontarán las cantidades previamente abonadas.

CAPÍTULO III

Secuestro

Artículo 13. Titulares

La persona que haya sido objeto de secuestro, como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, exigiéndose alguna condición para su libertad, tendrá derecho a las prestaciones reconocidas en el artículo siguiente.

Artículo 14. Cuantía

Procederá el abono de 12.000 euros por el acto del secuestro y el triple del indicador público de renta diario por cada día de duración del mismo, hasta el límite de la indemnización fijada por incapacidad permanente parcial.

Podrá ser resarcido, en su caso, por los daños personales que el acto del secuestro le haya causado.

CAPÍTULO IV

Abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia

Artículo 15. Titulares

Las víctimas de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el abono de las correspondientes indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil por muerte o por daños físicos o psíquicos.

Artículo 16. Cuantía

1. Las obligaciones asumidas por el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se extenderán al pago de las indemnizaciones que traigan causa de las siguientes contingencias:
 - a) Fallecimiento.
 - b) Gran invalidez.
 - c) Incapacidad permanente absoluta.
 - d) Incapacidad permanente total.
 - e) Incapacidad permanente parcial.
 - f) Lesiones permanentes no invalidantes.
 - g) Secuestro.
2. La cuantía de las indemnizaciones se determinará de la siguiente manera:
 - a) Cuando exista sentencia firme que reconozca una indemnización por responsabilidad civil, bien sea por fallecimiento, bien por daños físicos o psíquicos causante de alguna de las contingencias especificadas en el párrafo anterior, se abonará la cantidad fijada en la misma, con el límite establecido en el apartado tercero.
 - b) Cuando la sentencia firme no reconociera ni permitiera reconocer una cantidad en concepto de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos, se abonará la cuantía prevista en el anexo I de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.

3. La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia no cederá de las siguientes cuantías:
 - a) Fallecimiento: 500.000 €.
 - b) Gran invalidez: 750.000 €.
 - c) Incapacidad permanente absoluta: 300.000 €.
 - d) Incapacidad permanente total: 200.000 €.
 - e) Incapacidad permanente parcial: 125.000 €.
 - f) Lesiones permanentes no invalidantes: 100.000 €.
 - g) Secuestro: 125.000 €.

Artículo 17. Régimen jurídico

1. En ningún caso el abono previsto en este capítulo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales.
2. Cuando las personas a las que se refiere el artículo 15 hubieren percibido el resarcimiento por daños personales, la cuantía del abono extraordinario de la responsabilidad civil por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia que pueda existir entre la cantidad fijada por responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites establecidos en el apartado tercero del artículo anterior, y la percibida por daños personales.

Artículo 18. Subrogación del Estado en las acciones de responsabilidad civil

1. El Estado se subrogará en las acciones que los perceptores de las indemnizaciones y prestaciones recibidas en aplicación de esta Ley puedan ejercer contra los responsables de los actos de terrorismo hasta el límite de la indemnización satisfecha por el Estado. A estos efectos deberán, con carácter previo a la percepción de las ayudas y prestaciones, transmitir al Estado las acciones civiles correspondientes.
2. Los destinatarios de las indemnizaciones y prestaciones por terrorismo a quienes la sentencia judicial hubiera reconocido derechos de resarcimiento por un importe superior al recibido del Estado en aplicación de esta Ley, conservarán la acción civil para reclamar la diferencia a los responsables de la acción delictiva causante de los daños.
3. A tales fines, las personas que tengan derecho a ser indemnizadas acompañarán a su solicitud el documento por el que transmiten al Estado las acciones derivadas de la responsabilidad civil que pudieran corresponderles.

Artículo 19. Comunicación con los órganos jurisdiccionales

Las concesiones de indemnización se comunicarán al órgano jurisdiccional que hubiere dictado la resolución que declaró la responsabilidad civil en la que el Estado hubiere quedado subrogado.

CAPÍTULO V

Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero

Artículo 20. Titulares

Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el exterior y sean víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen habitualmente en España y que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra intereses españoles, tendrán derecho a percibir el resarcimiento excepcional regulado en el presente capítulo.

Artículo 21. Cuantía

1. Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produce la acción terrorista, le corresponderá el 50 % de las cantidades fijadas para los supuestos de fallecimiento, daños personales y secuestro en los artículos 7, 10 y 14 de este reglamento.
2. Si el español no tuviera residencia habitual en dicho país, la ayuda a percibir será del 40 % de las cantidades señaladas en los artículos citados en el apartado precedente.

Artículo 22. Carácter subsidiario

1. Esta ayuda tendrá carácter subsidiario de las que pudieran ser reconocidas a la víctima por el Estado donde se produzca el atentado. A tal efecto, el órgano instructor podrá recabar la información pertinente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. Únicamente se abonará la ayuda excepcional prevista en este capítulo cuando el beneficiario no reciba indemnización o ayuda del Estado donde se cometió el hecho o cuando la reciba por importe inferior a la prevista en el artículo anterior, y en este caso sólo por la diferencia. Si el Estado español hubiese satisfecho una ayuda excepcional y luego el beneficiario percibiera otra del Estado donde se cometió el hecho, estará obligado a reintegrar la primera, en todo o en parte según proceda.

TÍTULO II

Daños materiales

Artículo 23. Daños resarcibles

1. Los resarcimientos por daños materiales comprenderán los causados en las viviendas, en los establecimientos mercantiles e industriales o en elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos políticos, de sindicatos o de organizaciones sociales y los producidos en vehículos, con los requisitos y limitaciones establecidos en el presente real decreto.
2. Los resarcimientos tendrán carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contrato de seguro, reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos. El conjunto de resarcimientos no podrá superar, en ningún caso, el valor del daño producido.
3. No serán resarcibles los daños causados en bienes de titularidad pública.

Artículo 24. Daños en viviendas

1. En las viviendas habituales serán objeto de resarcimiento los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que aquéllas recuperen sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos que la Administración considere que tienen carácter suntuario.
En las viviendas que no tengan carácter habitual el resarcimiento comprenderá el 50 % de los daños, con el límite de 113.680 euros.
2. Se entenderá por vivienda habitual, a los efectos de este reglamento, la edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un período de, al menos, seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de ésta en tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación.

Artículo 25. Alojamiento provisional

1. Los gastos derivados del alojamiento provisional de las personas que tengan que abandonar temporalmente su vivienda, se abonarán mientras duren las obras de reparación, con el límite de 90 euros diarios si el alojamiento tiene lugar en un establecimiento hotelero, o de 1.500 euros mensuales si se trata del alquiler de una vivienda.

2. A estos efectos el Ministerio de Interior podrá celebrar convenios o acuerdos con otras Administraciones Públicas u organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de catástrofe o siniestro.

Artículo 26. Daños en establecimientos mercantiles o industriales

1. Serán resarcibles los daños sufridos en la estructura, instalaciones, mobiliario y equipo necesarios para poner nuevamente en funcionamiento los establecimientos mercantiles o industriales, con un máximo de 113.680 euros por establecimiento.
2. Con independencia de estas reparaciones, la Administración General del Estado, en supuestos excepcionales y, en particular, cuando quedara interrumpida la actividad de una empresa, con riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo, podrá subsidiar préstamos destinados a reanudar dicha actividad.

El subsidio consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista de la diferencia existente entre los pagos de amortización de capital e intereses, al tipo de interés fijado por la entidad prestamista, y los que corresponderían al tipo de interés subsidiado, que será el del interés legal del dinero en el momento de formalización del préstamo menos tres puntos porcentuales de interés anual.

3. También podrá celebrar la Administración General del Estado convenios con entidades de créditos a bajo interés, con la finalidad indicada en el apartado precedente.

Artículo 27. Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales

1. Serán resarcibles los daños sufridos en las sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, incluyendo el mobiliario y el equipo siniestrado, en la cuantía necesaria para que recuperen sus condiciones anteriores de funcionamiento y puedan reanudar su actividad.
2. Se incluirán entre las organizaciones sociales las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo.
3. Igualmente, serán resarcibles los daños de esta naturaleza sufridos en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en la cuantía anteriormente precisada.

Artículo 28. Daños en vehículos

1. Serán resarcibles los daños sufridos en vehículos particulares, así como en los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, siempre

que se disponga de póliza de seguro obligatorio de vehículo vigente en el momento del daño, cuando ésta sea exigible según la normativa reguladora de dicho seguro.

2. El resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación. En caso de destrucción del vehículo, o si la reparación es superior al valor venal, la indemnización abarcará el importe en el mercado de un vehículo de similares características y condiciones de uso al siniestrado, hasta el límite de 30.500 euros. El informe pericial hará constar el valor de las reparaciones o el de reposición, según proceda.

Artículo 29. Tasación de daños materiales

1. La tasación pericial de los daños materiales se realizará por los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros, que tendrá derecho al abono por parte de la Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores de seguros.
2. En la tasación pericial habrán de valorarse tanto los daños indemnizables por el Consorcio, con arreglo a su propia normativa, como los resarcibles por la Administración, conforme a lo dispuesto en este reglamento.
3. En los expedientes de resarcimiento de daños materiales de cuantía inferior a 1.803,04 euros será suficiente, para su reconocimiento en la correspondiente resolución administrativa, el informe pericial del Consorcio de Compensación de Seguros.
4. No obstante, se podrá prescindir de la peritación cuando la cuantía total de los daños, acreditada mediante la factura o presupuesto de reparación originales, no alcance 600 euros, si constara a la Administración el cumplimiento de los demás requisitos exigibles.

TÍTULO III

Asistencia inmediata, ayudas y derechos sociales

CAPÍTULO I

Asistencia inmediata

Artículo 30. Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata

Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirán de inmediato, con carácter gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y buscando su mejor y más pronta recuperación.

Artículo 31. Asistencia sanitaria de urgencia

1. La asistencia sanitaria de urgencia se prestará por los órganos y entidades que componen el Sistema Nacional de Salud en las condiciones que establezcan sus normas de funcionamiento.
2. Las autoridades sanitarias y el personal de dirección de los establecimientos sanitarios adoptarán procedimientos específicos dirigidos a localizar e informar a los familiares de las víctimas sobre el estado de éstas. El Ministerio del Interior recabará de las citadas autoridades y centros sanitarios cuanta información precise para la debida prestación de los servicios de atención a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.

CAPÍTULO II

Ayudas para asistencia sanitaria y psicossocial complementaria

Artículo 32. Tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria

1. Las personas que hayan sufrido daños físicos tendrán derecho a que les sean resarcidos los gastos por tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estas personas se encuentren acogidas.
2. Para justificar la necesidad y la no cobertura pública o privada de la ayuda se acompañará a la solicitud un informe médico acreditativo de la misma

y una certificación de la entidad aseguradora de la víctima de que la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus prestaciones. El órgano instructor podrá recabar la certificación anterior, previo consentimiento del interesado, cuando el sistema de aseguramiento o previsión sea público.

3. Estos gastos podrán ser abonados directamente a la entidad prestataria o al destinatario de la ayuda, previa presentación de la factura original acreditativa.

Artículo 33. Tratamiento psicológico

1. Las víctimas y amenazados y sus familiares o personas con quienes convivan, que sufran secuelas psicológicas derivadas de los actos de terrorismo que se manifiesten con posterioridad, tendrán derecho a la financiación del coste de la atención psicológica, previa prescripción facultativa, con un límite de 3.600 euros por tratamiento individualizado.
2. A tal efecto, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas en dicha asistencia.

En defecto de los oportunos conciertos, la Administración General del Estado podrá financiar el coste de los tratamientos individuales requeridos, siempre que quede acreditada, a juicio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, su necesidad, vinculación con las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y falta de adecuación al trauma causado por las acciones terroristas del tratamiento psicológico prestado por el sistema de previsión público o privado.

La ayuda correspondiente se abonará por trimestres vencidos al profesional interviniente, previa presentación de las facturas originales de los honorarios correspondientes.

Artículo 34. Apoyo psicopedagógico

El Ministerio del Interior, en cooperación con las Comunidades Autónomas y en el marco de la normativa que regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, desarrollará las medidas necesarias para que los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que, como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, padezcan problemas de aprendizaje o adaptación social, puedan recibir apoyo psicopedagógico, prioritario y gratuito.

CAPÍTULO III

Ayudas educativas

Artículo 35. Titulares

Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual.

Artículo 36. Contenido

1. Las citadas ayudas podrán concederse para iniciar o proseguir enseñanzas en las cuantías que se indican por cada curso escolar:
 - a) Primer ciclo de educación infantil: 1.000 euros.
 - b) Segundo ciclo de educación infantil y educación primaria: 400 euros.
 - c) Educación secundaria obligatoria: 400 euros.
 - d) Bachillerato: 1.000 euros.
 - e) Formación profesional de grado medio y superior: 1.500 euros.
 - f) Grado o equivalente: 1.500 euros.
 - g) Máster: 1.500 euros.
 - h) Otros estudios superiores: 750 euros.
 - i) Enseñanzas de idiomas en centros oficiales: 300 eu os.
2. Estas cantidades se incrementarán en un 20 % siempre que el centro de estudios diste, al menos, 50 km de la localidad en la que se encuentre el domicilio familiar, y en un 40 % si la asistencia al citado centro implica cambio de residencia respecto del domicilio familiar.

Artículo 37. Requisitos

1. Para ser destinatario de las ayudas será preciso no estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo nivel o de nivel superior al de los estudios para los que se solicita la ayuda.
2. En los niveles de bachillerato o formación profesional media o superior, enseñanzas universitarias conducentes al título de grado, máster universitario, enseñanzas de idiomas y otros estudios superiores no integrados en la universidad, serán de aplicación los requisitos académicos de matriculación y carga lectiva superada establecidos en el capítulo III del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio.

No obstante, para el cálculo de los rendimientos académicos mínimos exigidos a los beneficiarios de las ayudas al estudio, el Ministerio del Interior aplicará un coeficiente corrector del 0,60 a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran de una adaptación curricular o de un aumento de tiempos para realizar los estudios en los supuestos de incapacidad física o psíquica.

3. De manera motivada, el Ministerio del Interior podrá eximir del cumplimiento de los requisitos académicos mínimos al solicitante de la ayuda, atendiendo a la fecha de comisión del atentado terrorista o a su repercusión en el solicitante y/o en su ámbito familiar.

Artículo 38. Incompatibilidades

1. Las ayudas al estudio percibidas por la condición de víctima de terrorismo serán incompatibles con las percibidas por los mismos conceptos de otras Administraciones. En caso de percepción de más de una ayuda por el mismo concepto, se procederá a la revocación de la ayuda concedida por el Ministerio del Interior.
2. Sólo se concederá una ayuda por curso, aunque se realicen de forma simultánea varios cursos o grados universitarios.

Artículo 39. Tasas académicas

La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas, acordará las medidas necesarias para eximir del pago de las tasas y precios por los servicios académicos en los centros oficiales de estudios a quienes hayan sufrido daños físicos o psíquicos de carácter permanente como consecuencia de la actividad terrorista, así como a los hijos de los anteriores y de las personas fallecidas en actos terroristas.

CAPÍTULO IV

Ayudas en materia de vivienda pública

Artículo 40. Vivienda pública

1. La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas, acordará las medidas necesarias para que los beneficiarios del régimen de ayudas e indemnizaciones contemplado en este reglamento tengan una consideración preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública a precio tasado o para arrendamiento.

2. A estos efectos, los planes estatales de vivienda incluirán medidas específicas para facilitar el acceso a las viviendas de protección pública en régimen de propiedad o arrendamiento. En particular, dichas medidas podrán exonerar la aplicación de requisitos de umbrales de renta familiar cuando las secuelas que se deriven del atentado terrorista padecidas sean de tal entidad que obliguen a cambio de vivienda.

Artículo 41. Ayudas para la adaptación de vivienda

La Administración General del Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas, acordará las medidas necesarias para la adaptación de viviendas cuando esta sea necesaria en atención a las secuelas derivadas de las acciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente reglamento. Sin perjuicio de ello, el Ministerio del Interior atenderá con carácter extraordinario el abono de ayudas destinadas a esa finalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

CAPÍTULO V

Ayudas extraordinarias y anticipos

Artículo 42. Ayudas extraordinarias

1. El Ministerio de Interior podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas por el régimen de ayudas e indemnizaciones previstas en este reglamento.
2. En los supuestos de daños personales, las ayudas podrán cubrir necesidades sociales, sanitarias, psicológicas o educativas, previa evaluación efectuada por los órganos competentes del Ministerio del Interior.
3. En los supuestos de daños materiales, las ayudas podrán cubrir la adaptación o cambio de vivienda cuando las secuelas del atentado terrorista así lo exijan, así como aquellas otras necesidades personales o familiares derivadas de la acción terrorista.
4. Las personas que acrediten la condición de amenazado podrán percibir ayudas que faciliten el traslado de localidad, abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros que guarden relación con dicha situación.
5. Estas ayudas serán compatibles con las ayudas ordinarias reguladas por este reglamento y podrán ser solicitadas por las víctimas o familiares que convivan con ellas, o bien ser promovidas de oficio por el Minis-

terio de Interior, en atención a la necesidad detectada, elevándose por el órgano competente en materia de ayudas y resarcimientos a las víctimas del terrorismo la propuesta de concesión al titular del Ministerio del Interior.

Artículo 43. Anticipos

En supuestos de perentoria necesidad podrán otorgarse anticipos a cuenta de las ayudas extraordinarias, gastos de asistencia médica, traslados de afectados y alojamientos provisionales, cuya cuantía no excederá el 70 % de la que previsiblemente fuera a corresponder en la resolución que acuerde su concesión.

CAPÍTULO VI

Derechos laborales

Artículo 44. Derechos laborales

Las personas incluidas en los artículos 5 y 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral:

- a) A la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de reordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, en los términos del artículo 37.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
- b) A la movilidad geográfica, mediante el derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo, en los términos expresados en el artículo 40.3 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 45. Derechos de los empleados públicos

Las personas a las que se refiere el artículo anterior que tuviesen la condición de funcionarios públicos y de personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica, en los términos previstos en el artículo 35 de la Ley 29/2011 y en la legislación específica

Artículo 46. Políticas activas de empleo

Las personas incluidas en el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tendrán derecho:

- a) a ser beneficiarias de las medidas de bonificación a la contratación previstas en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
- b) a ser beneficiarias de medidas de inserción laboral para colectivos con especiales dificultades para el acceso y permanencia en el empleo, de conformidad con lo previsto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

Artículo 47. Convenios con empresas para facilitar la contratación de víctimas del terrorismo

El Ministerio del Interior, con el fin de facilitar la contratación de las víctimas del terrorismo y la movilidad geográfica, para aquéllas que precisen trasladar su residencia con la garantía de un empleo, promoverá la suscripción de convenios de colaboración con empresas para fomentar la sensibilización sobre la violencia terrorista y la inserción laboral de las víctimas.

TÍTULO IV

Procedimientos

CAPÍTULO I

Procedimiento general para el reconocimiento de resarcimientos, indemnizaciones y ayudas

Artículo 48. Iniciación del procedimiento. Forma y lugar de presentación de las solicitudes

1. El procedimiento para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y prestaciones reguladas en el presente reglamento se iniciará mediante solicitud de persona interesada, directamente o por medio de un representante acreditado por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, debiendo formalizarse aquella conforme a los modelos contenidos en el anexo. Las solicitudes estarán igualmente disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Ministerio del Interior en la dirección <https://sede.mir.gob.es/>. Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación acreditativa de la condición de afectado, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de este reglamento o, en su caso, del grado de parentesco con la víctima. Si se solicitan ayudas al estudio, habrá de adjuntarse la documentación acreditativa de los créditos en los que se haya matriculado y del rendimiento académico exigido de acuerdo con el artículo 37 de este reglamento. El solicitante no deberá aportar documentación que se halle en poder de la Administración actuante, en cuyo caso podrá autorizar a ésta para que recabe en su nombre la documentación necesaria para la tramitación del expediente.
2. Los procedimientos de concesión de las condecoraciones previstas en el artículo 60 se iniciarán a solicitud del interesado o de las personas indicadas en el artículo 6 de este reglamento para, por orden de presentación de la solicitud, instar la que correspondiera a la persona fallecida. No obstante, este procedimiento podrá también iniciarse de oficio por el Ministerio del Interior, previa consulta con los destinatarios, cuando tuviese conocimiento de los hechos que pudieran dar lugar al reconocimiento.
3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el registro general del Ministerio del Interior, en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Co-

munidades Autónomas o de cualquier Entidad Local que hubiese suscrito el oportuno convenio, en las Oficinas de Correos o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica a través del registro electrónico del Ministerio del Interior (<https://sede.mir.gob.es/>).

Artículo 49. Plazo de presentación de solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes de indemnización por daños personales o materiales será de un año, a contar desde el día en que se produjeron los daños.

En el caso de daños personales, se computará desde la fecha de alta o consolidación de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud.

Si, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese un agravamiento de secuelas o el fallecimiento del afectado derivado de las lesiones sufridas como consecuencia del acto terrorista, se abrirá de nuevo el plazo de un año para solicitar la diferencia cuantitativa que proceda.

Si la víctima incapacitada hubiera fallecido por causa distinta a las secuelas derivadas del atentado, resultarán destinatarios de la indemnización que hubiera correspondido al causante las personas a las que se refiere el artículo 6 de este reglamento, según el orden de preferencia establecido en el mismo.

En el caso de daños psicológicos, el plazo de un año se computará desde el momento en que existiera un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela.

2. El plazo para solicitar el abono con carácter extraordinario de la responsabilidad civil fijada en sentencia firme será de un año desde la notificación al interesado de la sentencia o, en su caso, de la resolución judicial que fijó la cuantía indemnizatoria.
3. El plazo de presentación de solicitudes de ayudas al estudio será de tres meses desde la formalización de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda.
4. El plazo para solicitar las condecoraciones previstas en el artículo 60 será de cinco años a contar desde la comisión del acto terrorista o desde que la Administración Pública tuviera conocimiento del mismo.

Artículo 50. Subsanción y mejora de la solicitud

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de quince días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación

de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto.

2. El plazo mencionado en el apartado anterior podrá ser ampliado hasta 5 días, a petición de la persona interesada o a iniciativa del órgano instructor, cuando la aportación de documentos requeridos presente dificultades especiales.

Artículo 51. Instrucción del procedimiento

1. El procedimiento para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas será instruido por el órgano competente en materia de atención a víctimas dependiente del Ministerio del Interior, que actuará como ventanilla única de cualquier otro procedimiento que el interesado pueda deducir ante la Administración General del Estado.
2. Los procedimientos se ajustarán a lo dispuesto en este título y, en lo no previsto, a las previsiones generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en la normativa de desarrollo de las anteriores.
3. No se requerirá la aportación documental del interesado referida a hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los antecedentes o archivos de la Administración actuante.

A tal efecto, el órgano instructor podrá recabar del Instituto Nacional de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa los datos correspondientes al reconocimiento de pensiones extraordinarias por delitos de terrorismo que afecten al solicitante. Igualmente, podrá solicitar la información que precise para sustanciar de forma adecuada el procedimiento.

Asimismo, podrá solicitar a las autoridades policiales, a las autoridades consulares, al Ministerio Fiscal, a los órganos jurisdiccionales, a los órganos autonómicos competentes en materia de atención a víctimas del terrorismo, así como a las autoridades sanitarias, con el consentimiento previo del interesado, la información que precise para sustanciar de forma adecuada el procedimiento.

4. Si durante la instrucción de un procedimiento de concesión de indemnización por el fallecimiento de una persona como consecuencia de atentado terrorista se advierte la existencia de otras personas que sean titulares de este derecho al mismo nivel que el primer solicitante siguiendo el orden de prelación previsto en el artículo 6 de este reglamento, cuya identificación resulte del expediente, se comunicará a estas personas, a instancia de parte

- o de oficio por el órgano instructor, la tramitación de este procedimiento para su consideración como parte interesada.
5. Corresponderá al Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos de concesión de las condecoraciones, quedando facultada para interesar de toda clase de tribunales, autoridades, centros oficiales y entidades, los informes que estime convenientes, en orden a la determinación de la procedencia del otorgamiento, en su caso. En todo caso, la condición de víctima del terrorismo o ileso quedará acreditada mediante informe del Ministerio del Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este reglamento.

Artículo 52. Suspensión del procedimiento

1. El transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
 - a) Cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del presente reglamento.
 - b) Cuando deban realizarse, por cualquiera de los tribunales médicos a los que se refiere el artículo 11 del presente reglamento, las evaluaciones médicas de las lesiones sufridas por los interesados, por el tiempo que medie entre la petición de examen y valoración al tribunal médico correspondiente, que deberá comunicarse al interesado, y la recepción del acta médica por el órgano instructor.
 - c) Cuando, con motivo de la instrucción de un expediente indemnizatorio por daños materiales, deban realizarse las tasaciones periciales de dichos daños por parte de los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguro, por el tiempo que medie entre la petición de valoración al citado Organismo, que deberá comunicarse al interesado, y la recepción del informe resultante por el órgano instructor.
 - d) Cuando deban solicitarse los informes mencionados en el artículo 3.2.b) in fine de este reglamento, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe por el órgano instructor.
 - e) Cuando deban solicitarse otros informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órganos de la Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los

interesados, y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no podrá exceder de tres meses.

2. Asimismo, el transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver y notificar la resolución se podrá suspender cuando se encuentre pendiente un proceso judicial del orden penal contra los responsables del acto terrorista que haya producido los daños sobre los que se solicita indemnización, por el tiempo que medie desde la petición al órgano jurisdiccional hasta la fecha de certificación de la firma de la sentencia o de la resolución judicial que proceda y no ejecución de la responsabilidad civil derivada de delito.

Artículo 53. Resolución

1. La resolución será dictada por el titular del Ministerio del Interior, salvo en el supuesto de concesión de condecoraciones, que corresponderá a los órganos previstos en el artículo 60.2.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de doce meses, salvo en el caso de las ayudas al estudio, que será de seis meses.
3. Transcurridos los plazos máximos para resolver sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.

CAPÍTULO II

Normas para facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones

Artículo 54. Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de este título resultarán de aplicación a la tramitación y resolución de los procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas reconocidos en este reglamento, cuando los actos descritos en el apartado 1 del artículo 2 se hayan cometido en España y el solicitante de la indemnización tenga su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea.
2. Las disposiciones de este título también serán de aplicación, cuando el lugar en que se cometa el delito sea un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España y el solicitante de la ayuda tenga su residencia habitual en España. En este caso, la autoridad de asistencia llevará a cabo las funciones previstas en el artículo 55, a los efectos de cooperar en la iniciación y tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de

las ayudas e indemnizaciones reconocidas por el Estado miembro de la Unión Europea en el que se haya cometido el delito.

Artículo 55. Designación y funciones de la autoridad de asistencia

1. El Ministerio del Interior actuará como autoridad de asistencia en los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, para que el solicitante pueda acceder, desde España, al resarcimiento que proceda, en su caso, por el Estado en cuyo ámbito territorial se cometió el delito.
2. A estos efectos, el Ministerio del Interior facilitará al solicitante de la ayuda:
 - a) Información sobre las posibilidades de solicitar una ayuda económica o resarcimiento, los trámites e impresos necesarios, incluido el modo en que éstos han de cumplimentarse, y la documentación acreditativa que pueda precisarse.
 - b) Orientación general sobre el modo de cumplimentar las peticiones de información suplementaria.
3. Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de asistencia, deberá:
 - a) Trasladar la solicitud y documentación acreditativa, y también la documentación que, en su caso, sea requerida posteriormente, a la autoridad de decisión designada por el Estado en cuyo territorio se cometió el delito.
 - b) Cooperar con el organismo a que se refiere el párrafo anterior cuando, de conformidad con su legislación nacional, éste acuerde oír al solicitante o a cualquier otra persona.

Esta cooperación por parte del Ministerio del Interior podrá consistir, a petición de la autoridad de decisión, en disponer lo necesario para que esta última realice directamente la audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, o bien en dar audiencia al solicitante de la ayuda económica o a cualquier otra persona y remitir a la autoridad de decisión un acta de la audiencia.

Artículo 56. Autoridad de decisión

1. Cuando las solicitudes hayan sido presentadas a través de la autoridad de asistencia donde el solicitante resida habitualmente, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al solicitante y a la autoridad de asistencia:
 - a) La recepción de la solicitud, el órgano que instruye el procedimiento, el plazo para su resolución y la fecha previsible en la que se adoptará la resolución.

- b) La resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, podrá recabar la cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante tenga su residencia habitual, a fin de oír al solicitante o a cualquier otra persona si lo estima necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
- A tal efecto, podrá solicitar a la autoridad de asistencia a que se refiere el párrafo anterior que disponga lo necesario para que:
- a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta.
 - b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de ésta.

La realización de la audiencia por el Ministerio del Interior se ajustará a lo establecido en este reglamento, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 57. Impresos para la transmisión de solicitudes y comunicación de la resolución

Para el traslado de la solicitud y documentación acreditativa previsto en el artículo 55.3.a) y para la comunicación de la resolución que ponga fin al procedimiento, prevista en el artículo 56.1.b) se utilizarán los impresos que se establezcan por orden del Ministro del Interior.

Artículo 58. Recurso administrativo

1. Cuando el escrito mediante el que se interponga recurso potestativo de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior sea cursado a través de la autoridad de asistencia del Estado miembro donde la víctima del delito tiene su residencia habitual, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al interesado y a la autoridad de asistencia:
 - a) La recepción del escrito de recurso, el órgano que tramita el procedimiento, el plazo para su resolución y notificación, así como los efectos de la falta de resolución y, si es posible, la fecha previsible en la que se adoptará la resolución.
 - b) La resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Asimismo, el órgano al que corresponde la tramitación del recurso podrá recabar la cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante de la indemnización tenga su residencia habitual, para oír al interesado o a cualquier otra persona, si lo estima necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. A tal efecto, podrá solicitar a la autoridad de asistencia a que se refie e el párrafo anterior que disponga lo necesario para que:

- a) El órgano instructor pueda realizar directamente la audiencia, en particular por teléfono o por videoconferencia, con la persona que deba ser oída, si ésta lo acepta, en los términos indicados en el apartado segundo del artículo anterior.
- b) La autoridad de asistencia realice la audiencia y remita al órgano instructor un acta de la misma.

TÍTULO V

Reconocimientos y condecoraciones

Artículo 59. Condecoraciones

La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo configura la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo, de conformidad con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.

Artículo 60. Grados y concesión

1. La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo comprende los siguientes grados:
 - a) Gran Cruz, que se concederá, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas.
 - b) Encomienda, que se otorgará a quienes hayan sufrido daños físicos o psíquicos de carácter permanente y secuestrados en actos terroristas.
2. El titular del Ministerio del Interior elevará a la aprobación del Consejo de Ministros los proyectos de Reales Decretos de concesión del grado de la Gran Cruz y concederá, mediante Orden y en nombre de Su Majestad el Rey, el grado de Encomienda.
3. El Gran Canciller de la Real Orden será el titular del Ministerio del Interior y el Canciller de la misma el titular de la Subsecretaría del Departamento.

Artículo 61. Carácter de las condecoraciones y tratamiento que otorgan

1. Las condecoraciones tendrán carácter personal e intransferible.
2. La Gran Cruz otorga tratamiento de excelencia y la Encomienda de ilustrísimo señor o ilustrísima señora.
3. La concesión de una condecoración no genera derecho a las ayudas o prestaciones reguladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.

Artículo 62. Descripción de las condecoraciones

Los distintivos correspondientes a los distintos grados de la Real Orden responderán a la siguiente descripción:

- a) Gran Cruz: Consistirá en una placa de 85 milímetros de diámetro total, de metal dorado formado por cuatro brazos hendidos a lo largo,

iguales y simétricos, cuya parte central o llama va esmaltada en rojo. Alternándose con estos brazos llevará cuatro ráfagas bruñidas de cinco facetas. En el centro de la Cruz y en forma circular irá esmaltado el Escudo de España en sus colores y en la mitad del brazo superior de la misma, la corona real. En el reverso de la Gran Cruz se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 milímetro, esmaltada en negro, de 35 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un cuadrado dorado de 10 milímetros en su interior.

- b) Encomienda: Consistirá en una placa de iguales características que las descritas para la Gran Cruz, con, la diferencia de su tamaño, que será de 60 milímetros de diámetro. Se portará pendiente del cuello mediante una cinta de 45 milímetros de ancho con los colores de la Orden, rojo y blanco, midiendo las franjas blancas que ocupan los bordes de la cinta 4,5 milímetros. Todo el conjunto de la cruz pende de una corona de laurel en metal dorado. En el reverso de la Encomienda se encontrará una corona circular, con bordes dorados de 1 milímetro, esmaltada en negro, de 25 milímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, donde constará grabada en letra dorada y mayúsculas la siguiente inscripción «reconocimiento y memoria», apareciendo una pequeña cruz latina en la parte inferior. En el interior se encontrará un círculo esmaltado en rojo de 17 milímetros de diámetro, con un cuadrado dorado de 10 milímetros en su interior.

Artículo 63. Expedición de títulos y Libro Registro

1. La Cancillería de la Real Orden, una vez otorgada una condecoración, expedirá el título correspondiente, que estará autorizado con la estampilla de la firma de Su Majestad el Rey e irá firmado por el Gran Canciller de la Real Orden.
2. La concesión de las condecoraciones reguladas en este título se harán constar en un Libro Registro.

Artículo 64. Uso y efectos de las condecoraciones

La concesión de estas condecoraciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en general, a los empleados públicos les servirá de mérito especial, así como de circunstancia especialmente relevante a los efectos de la concesión de condecoraciones

en su respectivo ámbito profesional, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Artículo 65. Actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo

El Gobierno podrá impulsar el reconocimiento y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y, en particular, la entrega de condecoraciones, al amparo de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, así como la presencia institucional el 27 de junio, Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, y el 11 de marzo, Día europeo de las víctimas del terrorismo.

TÍTULO VI

Tutela institucional a las víctimas del terrorismo

Artículo 66. Informe sobre la situación de las víctimas del terrorismo

El Ministerio del Interior elaborará un informe anual sobre la situación del colectivo de víctimas con propuestas de actuación que, en su caso, podrán incluir propuestas de reforma normativa.

En la elaboración de dicho informe, se solicitará información a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

Asimismo, se recogerá el análisis de detección de necesidades que realicen las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo, que será canalizado a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Dicho informe será elevado al Parlamento en el último trimestre del año.

Artículo 67. Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el Ministerio del Interior, en colaboración con las asociaciones más representativas del colectivo de víctimas del terrorismo, elaborará un borrador de Carta Europea de Derechos de las víctimas del terrorismo, que será elevado a la Comisión Europea, al efecto de que sirva como base para el estudio y la aprobación de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.

RECOGNITION AND
COMPREHENSIVE
PROTECTION OF
VICTIMS
OF TERRORISM
IN SPAIN

REGULATIONS

RECOGNITION AND
COMPREHENSIVE
PROTECTION OF VICTIMS
OF TERRORISM IN SPAIN
REGULATIONS

Ministerio del Interior
2015

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
<http://publicacionesoficiales.boe.e>

Edited by:



Issue date: October 2015

NIPO (paper version): 126-15-113-1

NIPO (on-line version): 126-15-114-7

Legal deposit: M-33407-2015

Printed by: Tórculo, S. A.



CONTENTS

Foreword.....	5
Act 29/2011 of 22 September, on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism.....	7
Royal Decree 671/2013 of 6 September adopting the implementing regulations for Act 29/2011 of 22 September on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism	55

FOREWORD

Act 29/2011 of 22 September on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism was adopted by a broad parliamentary consensus and has been internationally recognised as a model for the rest of the democratic countries as it establishes a comprehensive framework for compensations, support and recognition of individuals who make up this group. This fact led to the publishing of a Spanish-English bilingual edition of the Act by the Ministry of the Interior in 2012.

The significant amendments to the Act since 2011 have been included in the subsequent publications, allowing a consolidated text to be always available. This permanent updating takes now a further step by presenting the English version of the regulations implementing the Act and adopted by Royal Decree 671/2013 of 6 September.

In both cases, it was the *Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación* (Subdirectorate-General for Associations, Archives, Libraries and Publications) that took the initiative to publish the text, and the Translation Department attached to this Subdirectorate-General that translated the Act and regulations. Also, the Language Interpretation Office of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation has participated on both occasions revising the English versions and we would like to thank their staff for their valuable collaboration.

Thus, this bilingual publication is issued believing that its distribution in and outside our frontiers will help to the basic regulations of the recognition and protection of victims of terrorism in Spain to be known.

Head of the Technical Secretariat, Directorate-General
JUAN ANTONIO PUIGSERVER MARTÍNEZ

**Act 29/2011 of 22 September,
on the Recognition and Comprehensive
Protection of Victims of Terrorism**

BOE No 229, 23rd September 2011*

JUAN CARLOS I
KING OF SPAIN

To all to whom these presents shall come,
know ye that the Spanish Parliament has approved,
and I hereby enact, the following Act:

PREAMBLE

I

The present Act enables Spanish society, through its legitimate representatives in the Congress of Deputies and the Senate, to pay tribute to the victims of terrorism and to express its ongoing commitment towards all those who have suffered or might suffer from terrorism in the future, in whatever form. This Act is, therefore, not only a sign of recognition and respect for their memory, but also a gesture of deserved solidarity. Inspired by the principles of remembrance, dignity, justice and truth, the comprehensive support being sought through this Act represents the joint effort of redress that the victims and their families deserve.

In fact, remembrance, dignity, justice and truth are the core principles on which the provisions of this Act are based, and which, ultimately, seek to provide full reparation to victims. Based on these four core principles, the State reiterates its commitment to bringing about a definitive defeat to all forms of terrorism, unconditionally and without concessions.

The significance of remembrance guarantees that Spanish society and its representative institutions will never forget those who have lost their lives, have been left with physical and psychological scars, or have been deprived of their freedom due to terrorist fanaticism. The State preserves the memory of the victims of terrorism, paying special attention to their political meaning and thus the State defends everything that terrorism seeks to eradicate in its attempt to impose its totalitarian and exclusionary project. The political significance of the victims demands for their social recognition, and also constitutes an essential tool for discrediting terrorism ethically, socially and politically. Remembrance is, therefore, an act of justice, as well as a civilising instrument to teach values and definitively eradicate the use of violence to impose political ideas, by discrediting this in the eyes of society.

The victims of terrorism are also an ethical reference point for our democratic system. They symbolize the defence of freedom and Rule of Law in the face of the terrorist threat. Public authorities shall guarantee that the rights of victims are respected, and ensure that their dignity is effectively safeguarded. This is why the present Act, through its system of subsidies, benefits and honours, seeks to pay a special tribute to the State Security Forces and Armed Forces of Spain, both for their continuous efficiency to fight the terrorist threat and, also, for having unfortunately suffered the highest number of casualties in terrorist attacks committed in Spain or by international terrorists groups. This tribute would be neither genuine nor complete if it did not also recognise the role of the families of all those

working for the National Police, the *Guardia Civil*, the Army, the *Ertzaintza* (Basque regional police force), the *Mossos d'Esquadra* (Catalan regional police force) and the local police forces, all of which have been victims of terrorist attacks. The effort, resilience, courage and dignity showed in these difficult years are, without a doubt, an example of civil-mindedness and commitment to democracy, the Constitution and its values.

Groups representing victims of terrorism in our country, the numerous and diverse associations, foundations and civic movements are also, undoubtedly, a fundamental source of support for those families who have suffered the terrible blow of terrorism. They are also an instrument to promote participation and to channel their demands and claims, and to make them more visible and organised, as well as contribute to delegitimizing terrorism socially and disseminating the principles of democratic coexistence within the framework of the Constitution and Rule of Law. This Act also aims to reinforce their status and their role in society by recognizing them as legitimate stakeholders and favouring their initiatives and support programmes for victims. In this sense, supporting or justifying terrorism is incompatible with democratic participation in the different representative bodies.

Respect for justice is a basic requirement for Rule of Law, in accordance with its norms and safeguards. Thus, public authorities, within their scope of competence, shall ensure that victims do not suffer from situations of or lack of protection. Specifically, they shall focus on preventing the impunity of terrorist crimes, regardless of their nature, and shall ensure that terrorists serve out their full sentences, in accordance with the stipulations of criminal legislation.

Moreover, public authorities shall contribute both to making the truth be known, paying special attention to the real causes of victimisation, and to reporting what actually occurred, avoiding moral or political equidistance, value neutrality or ambiguity. Such an account should be absolutely clear about the existence of both victims and terrorists, about who has been damaged and who has caused the damage, favouring an outcome in which victims feel supported and respected, and in which there is no place for any kind of justification of either terrorism or terrorists. In this respect, the present Act also expresses Spanish society's firm condemnation of terrorist acts committed throughout our history, which are incompatible with democracy, pluralism and the most basic values of civilisation. The recognition of the victims through this Act is the best way to denounce the senselessness of terrorism during all these years.

The regulation of these principles in this Act, and in the terms established therein, must seek the victims' moral, political and legal reparation, being also an expression of due solidarity with them and their families, taking into

account the damage they have suffered and aimed at achieving their prompt and satisfactory recovery.

When terrorism strikes democratic societies, victims are used to destroy the State and its institutions, affecting peaceful coexistence and freedom. In this regard, terrorism, more than any other violent crime, treats people as objects, seeking to deprive them of their humanity. Citizens, political representatives, law enforcement officials, members of the armed forces, men, women, children and elderly people are utilised indiscriminately or selectively as a means to reach ideological, religious or identity-based ends which are unreasonable and undesirable. In democracy, ideas are definitely perverted if violence is used to impose them, and the means and goals used to achieve such ideas turn into something that is incompatible with freedom, pluralism and democracy.

This Act also embraces a relatively new idea, with which its entire text is imbued: the victims of terrorism are in fact individuals whose human rights have been violated. This idea undoubtedly reinforces the victims' legal status, linking their rights to the constitutional and universal values of all open and democratic societies. It also stipulates legally binding obligations for the State, ensuring that victims of terrorism are adequately compensated.

In the present Act, this collective effort and commitment take the form of recognising and supporting the victims of terrorism, and this results in a qualitative as well as quantitative increase in the subsidies, benefits and honours they are entitled to.

This Act is also inspired by the principle of equality, establishing criteria to ensure fairer treatment regarding compensation, avoiding, in any case, different responses to similar cases. The general rule of territoriality for the subjective recognition of victim status is, at the same time, completed with the principle of citizenship. The legal incorporation of this principle leads to the protection of all Spanish victims of attacks outside Spain or the European Union, regardless of whether 'Spanish interests' are targeted, or whether they are perpetrated by groups normally operating in Spain or affect peace and security operations abroad.

The principles of respect, justice and solidarity justify the consolidation into a single Act of all the existing legislation approved since the beginning of our democracy, to respond to the needs of the victims and their families.

This comprehensive Act, articulated under the principles of constituting a single body of law, regulates the direct benefits and economic assistance, and any other entitlements, enabling victims to integrate family, social or work life under the best possible conditions. Without prejudice to the foregoing, once the rights have been recognised, it might be necessary in some cases to employ other regulatory tools for this Act to be adequately implemented.

This is particularly the case when the support of the different various Public Administrations responsible for certain areas is needed with regard to those who have died and their families, those who have suffered bodily harm, and to such aspects as health care, housing or employment.

The dignity of a society is also measured by the dignity with which it defends and protects those who have been victims of terrorist acts. That is why safeguarding the dignity and respecting the memory of those who have been directly affected, physically or psychologically by terrorism, as well as their next of kin, is a basic pillar of this Act.

The ban in public places on collective or individual glorification of terrorism or terrorists, including the use of symbols, monuments, coat of arms, badges, commemorative plaques and other commemorative objects to exalt them is complemented by other measures ensuring the respect of the victims; such measures concern the use of images of individuals or families in the mass media.

All the aspects included in the previous legislation have been preserved and updated in the present Act. Moreover, new measures have been introduced in order to respond both to the proposals made by the groups representing and defending victims, and to the need for countering new forms of transnational terrorism and for supporting Spanish participation in peacekeeping and security operations.

In order to be comprehensive, this approach to the victims' assistance should not only take the future into consideration. Thus, this Act provides for retroactive application to all the acts occurred as of 1 January 1960, and is open to retroactive application for those who under previous legislation may have received benefits or compensation totalling less than the amounts established in the Act.

II

Title One begins by defining the purpose of the Act from the point of view of the comprehensive protection of victims of terrorism. The defence of their dignity is particularly highlighted and individuals who are threatened are now also included into a new category. As to the Act's timeframe, it is extended to apply to events occurred since 1 January 1960.

Title Two includes the general measures to be implemented immediately after a terrorist attack, based on the necessary cooperation from every level of the Public Administrations in order for all available resources to be placed at the service of victims and other individuals affected, so that they may receive individualised assistance enabling them to exercise their rights.

Title Three, on entitlements and benefits, begins by enumerating and defining the beneficiaries of this Act. It preserves the provisions already existing in previous legislation regarding victims' legal status, compatibility system, and tax benefits. Subsequently, it addresses the rules applying to payments in the event of death, beneficiaries, and the order of precedence thereof. Benefits and subsidies for personal injuries are also regulated with express reference to the Annexes of the Act. The necessary adjustments regarding family responsibilities are taken into account.

This Title includes some of the major innovations introduced by the Act. Firstly, it brings together the diverse regulations existing in previous laws regarding subsidies and increases their amount. The principle that the State is liable for paying the compensation established by a final judicial decision is maintained, stating a specific amount in the event of death, severe disability, different degrees of other disabilities, and non-disabling injuries, so that all victims are guaranteed the same treatment regarding compensation, thus avoiding possible differences in the economic benefits for similar situations. Should the compensations established exceed the amount that for which the State can be held liable, victims shall be entitled to bring civil suits to receive the difference from the perpetrators of the crimes.

Secondly, the compensation system for cases of exceptional financial assistance due to damage suffered abroad has been expressly regulated. Development of this regulation, which was one of the victims associations' demands, was pending. In order to establish this exceptional assistance, and given its nature, the general criteria applied by the Public Administrations for other types of compensation have been taken into account. The amount of 50 % has thus been established for those persons whose habitual place of residence is in the country where the terrorist act took place and of 40 % for those who do not reside in that country.

Subsequently, the Act incorporates the articles establishing the different types of compensation for material damage, damage to homes and vehicles, to businesses or industrial premises, and to the installations of organizations and political parties.

Applications for and processing of assistance and compensation remain within the competence of the Ministry of the Interior. Certain measures have also been adopted to simplify these procedures, ensuring that the said Ministry shall be represented within other bodies that might be involved, and especially that it shall be able to collect information held by the Courts—with the victims' prior consent—regarding documents, reports and other data that may of interest in resolving cases.

Under ‘social protection system’, Title Four establishes the comprehensive set of measures aimed at meeting all types of needs that those affected by a terrorist act may face during their lifetimes.

With regard to health care needs, specialised training for health professionals is provided in order to deal with the care and treatment of victims. Within the specific system referred to above, the National Health System shall provide for the psychological, psychoeducational, and if necessary, psychiatric care of the persons falling within the scope of the Act, and national health programmes shall include comprehensive care for victims.

Additionally, the Act also regulates assistance to finance medical treatment, prosthetics, surgical operations and other medical expenses in cases where the amount is not covered by the victims’ respective health insurance systems.

In order to meet needs arising as a result of terrorist acts, the possibility of geographical and functional mobility, as well as rescheduling of working hours, is guaranteed. The requirement to include a programme for victims within active labour policy plans, according to their physical or psychological needs, is also provided for.

These measures shall not only allow the victims to continue with their professional activities, but also to acquire new training in order to fully enter in working life.

The possibility of receiving extraordinary subsidies from the Ministry of the Interior in situations of special personal or family need is also envisaged. While the Act provides for a system ensuring support and assistance, the inclusion of a complementary instrument for the Administration was deemed necessary in order to help those who might find themselves in these special situations.

The Act establishes the possibility of granting priority in access to housing – whether as a rental or purchase – to those who might need to change their place of residence as a result of terrorist acts.

With regard to education, the Act also regulates academic fees exemptions, scholarship and support systems within the educational system, and curricular adaptation.

These benefits also include the provision that the status as victims of terrorism actions in Spain shall be taken into account in the case of foreigners requesting Spanish citizenship through naturalisation.

Chapter 7 of Title Four reflects the importance given by society as a whole to the defence and protection of the dignity of victims of terrorism. Protection of victims’ privacy, the banning of publicity aimed at humiliating or degrading victims and their families, avoidance of disproportionate or inadequate use of their personal images by the mass media, and training and awareness-raising of mass-media professionals through activities and campaigns by the Public

Administrations shall all result in the victims' dignity being respected at all times.

Title Five is aimed, in its entirety, at protecting victims and their families during court proceedings. Together with aid for specialised legal assistance, this Act also enshrines what is known as the principle of minimal adverse effects on victims throughout criminal proceedings. This implies that they may not be forced to have direct eye contact with the alleged perpetrators or the defendants and that any statement or gesture that might offend or humiliate them is forbidden in order to prevent secondary victimisation.

Courts shall, in all cases, protect and safeguard the dignity and personal security of the victims during criminal proceedings by not allowing gestures or written words that might offend or humiliate them

These measures include the establishment of a permanent victims' support bureau within the *Audiencia Nacional*¹, and specific departments for personalised assistance with specialised staff

Title Six supplements the objective of defending victims' dignity by offering them the necessary public and social recognition through a system of public honours and decorations: The Royal Order of Recognition for Victims of Terrorism. This Order confers the posthumous decoration of Grand Cross (*Gran Cruz*) to those who die in terrorist acts, and the decoration of Commander (*Encomienda*) to those injured or kidnapped in terrorist acts.

The Title also establishes that public authorities shall promote active measures to ensure the remembrance and recognition of victims of terrorism, providing them with maximum respect and dignity, through events, symbols, monuments and analogous commemorations. Public authorities shall also seek to underscore the formal presence and social recognition of victims of terrorism in all institutional events concerning them.

Title Seven addresses the need to protect the public dignity of victims. The State undertakes this protection, and expressly bans all public monuments, insignia, badges, plaques or any other objects or statements that commemorate or exalt terrorism or terrorists, whether individually or collectively. Public Administrations shall adopt the necessary measures to prevent or bring about the cessation of situations.

The Ministry of the Interior undertakes the obligation to maintain adequate channels for providing information, support, and means of participation. In view of the circumstances and needs that may arise, the Ministry shall also

¹ The Audiencia Nacional is the Spanish National Criminal Court that has nation-wide jurisdiction. It is an appeal and 1st instance Court for those matters established by the organic law of the judiciary and it specifically tries terrorism crimes.

draft reports and present those initiatives and regulatory proposals necessary to provide ongoing support and protection for victims of terrorism.

Due to the key role played by victims' associations and organisations, this Title includes a special Chapter concerning support for the association movement.

Apart from formulating an express statement on the public and social acknowledgement of their efforts, subsidies for the associations that defend and represent victims is also mentioned.

In order to implement the principles of this Act and to establish a legal framework for the comprehensive protection of victims of terrorism, provisions have not only been established for the future. Therefore, the first additional provision of the Act addresses retroactive application for those who, over time, may have received economic compensation for amounts lower than those specified in Annex I.

Additional dispositions supplement the provisions of substantive law contained in the Act. Thus, a Commission to analyse the treatment of victims of terrorism within the Inter-Regional Council of the National Health System is established, as well as a specific plan – within the Employment Plan of the Kingdom of Spain – for those victims registered as jobseekers. Moreover, the adoption of measures for the victims to access public employment and the periodic revision of damage compensation are also foreseen.

Title One. General Provisions

Title Two. Immediate Measures to Protect Victims after a Terrorist Attack

Title Three. On Entitlements and Benefits Resulting from Terrorist Acts

- Chapter 1. General provisions
- Chapter 2. Payment of the damages
 - Section I. Personal injuries*
 - Section II. Material damage*
- Chapter 3. Procedures and responsibilities

Title Four. Social Protection System

- Chapter 1. Health care
- Chapter 2. Labour rights and social security entitlements
- Chapter 3. Exceptional assistance for victims of terrorism
- Chapter 4. Actions as regards housing
- Chapter 5. Educational grants
- Chapter 6. Specific rights of alien victims
- Chapter 7. Rights concerning victims' data processing

Title Five. Protection of Victims in Judicial Proceedings

- Sole Chapter. Legal principles and rights of victims of terrorism before the Spanish Courts

Title Six. Recognitions and Decorations

Title Seven. Institutional Protection and Support for Victims of Terrorism

- Chapter 1. Institutional protection
- Chapter 2. Promotion of associations and foundations

Annex I. Compensation for physical and psychophysical damage. Scale

First Additional Provision. *Retroactive application to those who had previously obtained subsidies and compensation*

Second Additional Provision. *Analysis Commission of the Inter-Regional Council of the National Health System*

Third Additional Provision. *Employment plan*

Fourth Additional Provision. *Public employment measures*

Fifth Additional Provision. *Powers of the Autonomous Communities*

Sixth Additional Provision. *European Charter of Terrorism Victims' Rights*

Seventh Additional Provision. *Revising compensation for physical and psychophysical damage*

Transitional Provision

Sole Repealing Provision

Final Provisions

First Final Provision. *Implementing regulations*

Second Final Provision. *Status of the victims' associations as associations of public interest*

Third Final Provision. *Economic and budgetary allocation of the Act*

Fourth Final Provision. *Additional rules*

Fifth Final Provision. *Entry into force*

TITLE ONE

General provisions

Article 1. Purpose

The present Act aims to recognise victims of terrorism and establish a framework for compensation, assistance, benefits, safeguards and honorary decorations in order to mitigate, as much as possible, the consequences of terrorist acts for the victims and their families or for individuals who have suffered damage.

Article 2. Values and objectives

1. This Act is based on the principles of remembrance, dignity, justice and truth.
Remembrance safeguards and keeps alive their social and political recognition. Dignity symbolises, through the victims, the defence against the terrorist threat of the democratic State under Rule of Law. Justice aims to provide reparation to the victims, assuring their permanent legal protection and condemning terrorists. Truth highlights the violation of human rights by terrorist acts.
3. In order to enforce these values, this Act is based on a comprehensive set of measures that the General Administration of the State and competent bodies of the Public Administrations are responsible for promoting and implementing. These measures aim to achieve the following objectives:
 - a) Recognising and promoting the dignity and remembrance of victims of terrorism, as well as guaranteeing justice and effective reparation.
 - b) Providing comprehensive protection to victims of terrorism.
 - c) Compensating victims for personal injury and material damage through compensations and benefits provided for in the Act.
 - d) Strengthening the assistance measures for victims of terrorism, providing public authorities with effective instruments in the fields of social protection and social and health services.
 - e) Demanding from Public Administrations the recognition of the rights of victims of terrorism and thus ensuring prompt, transparent and efficient access to the services established for this purpose.
 - f) Establishing coordination and flexibility mechanisms for all the necessary administrative procedures to obtain the compensations, benefits and assistance provided for in the Act.

- g) Establishing a specific framework for victims in court proceedings, especially when they are a party thereto. Promoting the cooperation and participation of civil society associations and organisations fighting terrorism.
- h) Recognising and supporting individuals facing threats and coercion from terrorist groups and their adherents.

Article 3. Beneficiaries

This Act shall apply to those who have suffered from terrorist acts, understood as those acts carried out by members of organisations or criminal groups whose aim is to subvert the constitutional order or seriously disturb the public peace.

It shall also apply to victims of the acts carried out to achieve the objectives described in the above paragraph, even if the perpetrators are not members of such organisations or criminal groups.

Article 3 bis². Requirements for recognition of assistance and benefits provided for in this Act

1. Individuals meeting at least one of the following conditions shall be considered beneficiaries of the assistance and benefits provided for in this Act.
 - a) Persons having been entitled on the basis of a final judgement to compensation as civil liability derived from crimes and damages provided for in this Act.
 - b) When, in the absence of a final decision, the corresponding judicial formalities have been carried out, or criminal proceedings to prosecute the crimes have been initiated. In these cases, the status of victim or entitled party, amount of damages, nature of acts or events causing the damages and other requirements legally required shall be attested before the competent body of the General State Administration by any means allowed by law.
2. Granting of assistance and benefits recognised in this Act shall be based on the principles set forth in the European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes.

² Article added by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012. As amended by Act 17/2012 of 27 December – 2013 Finance Law. BOE No 312, 28th December 2012.

Article 4³. Persons entitled to the rights and benefits

The following persons shall be entitled to the rights and benefits regulated in this Act:

1. Deceased persons or persons having suffered physical or psychological harm as a result of terrorist acts and who are considered as victims of terrorism for the purpose of this Act.
2. Persons that, in the event of the death of the victim referred to in the previous paragraph, and in accordance with the terms agreed and priority order established in Article 17 of this Act, may be entitled to financial assistance or rights on the grounds of family ties, cohabitation or dependency relationship with the deceased person.
3. Persons having suffered material damage when, in accordance with this Article, they are not considered as victims of terrorist acts or entitled to subsidies, benefits or compensation.
4. The terms for recognition of the status of victim or person entitled to subsidies, benefits or compensation shall be established by this Act and its implementing regulations for each of these situations.
5. In the event of death and only for the purposes of respect, dignity, honour and public defence of these values, the spouse or cohabitant, parents, children, grandparents and siblings shall be considered victims of terrorism. This remains without prejudice to the rights, benefits, compensation and other assistance granted by this Act.
6. Family members of the deceased and the injured who have suffered any of the disabling injuries, up to the second degree of consanguinity, and persons who, despite being terrorist targets, were unhurt, for the purposes of respect and decorations, with no right to any economic compensation.

Article 5⁴. Threatened persons

Persons who, pursuant to Article 3 bis of the Act, are suffering situations of direct and repeated threats or coercion by terrorist organisations shall be the subject of special attention by competent Public Administrations.

Article 6. Territorial scope of application

1. The system of subsidies, benefits and compensation shall be applied when acts are committed on Spanish territory or under Spanish jurisdiction
2. It shall also apply to:

³ As amended by Organic Law 9/2015 of 28 July on National Police Staff regulations. BOE No 180, 29th July.

⁴ As amended by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

- a) Spanish citizens who may be victims abroad of groups usually operating in Spain or victims of terrorist acts against the Spanish State or Spanish interests.
 - b) Persons belonging to the Spanish contingent that participates in peacekeeping or security operations abroad and suffer a terrorist attack.
3. Spanish citizens, who are victims of terrorist acts abroad and are not included in the above paragraphs, shall only be entitled to the benefits established in Article 22 of the present Act.

Article 7. Timeframe of application

The provisions of this Act shall be applicable to events occurred from 1 January 1960 onwards.

TITLE TWO

Immediate measures to protect victims after a terrorist attack

Article 8. General information

1. The competent Public Administrations shall establish general action protocols to deal with the situation resulting from a terrorist attack, with the aim of foreseeing immediate actions to be taken, as well as identifying the services and bodies in charge of the intervention. The General State Administration shall establish the criteria to draw up the above-mentioned protocols.
2. In order to ensure the utmost effectiveness of such protocols, Public Administrations shall lay down specific coordination and cooperation methods, which shall include the creation of units or command posts comprising those responsible for the different services or teams involved.
3. The Ministry of the Interior, through the Government Delegates in the Autonomous Communities (*Delegados del Gobierno*) and the Directorate-General of Support for Victims of Terrorism, shall promote and coordinate the drafting, implementation and dissemination of these protocols.

Article 9. Immediate psychological and psychiatric assistance

1. Those persons affected by a terrorist attack shall benefit from immediate and free psychological and psychiatric assistance for as long as necessary, according to medical criteria, in order to ensure their prompt and satisfactory recovery.
2. To this end, the General State Administration may sign agreements with other Public Administrations or private entities, in order to establish a prompt, coordinated and well-organised system aimed at minimising the personal impact of a terrorist attack.

Article 10. Emergency health care

1. The bodies and entities of the National Health System shall ensure emergency health care pursuant to their operating regulations.
2. Health authorities and management staff of health centres shall adopt specific procedures aimed at identifying and informing the family members about the victims' condition. The Ministry of the Interior shall be authorised to obtain from the above-mentioned authorities and health

centres all the information needed in order to provide adequate assistance for victims of terrorism and their families.

3. The assistance referred to in this Article shall include – according to whatever system is established by regulations – the necessary psychological and psychiatric support until this entitlement is formally granted pursuant to the Articles below.

Article 11. Specific information on subsidies, compensation and other benefits

1. Competent Public Administrations shall establish and coordinate, in their respective domain of competence, information mechanisms regarding procedures on subsidies, compensation and other benefits.
2. This information shall be personalised and adapted to the circumstances and characteristics of the persons affected by terrorist attack, and aimed at recognising the system established by this Act, as well as entitlement to National Health System benefits.
3. The necessary means shall be established to ensure that victims of terrorism who, due to their personal and social circumstances, may have greater difficulty in comprehensively accessing the information can effectively exercise this right. To this end, it shall be guaranteed that those persons to whom the present Act is applicable and who are in a situation of disability or do not speak the language may obtain clear information on their rights and the resources available to meet their needs.

Article 12. Funeral and burial expenses

The General State Administration, under the terms to be established by law, shall bear the costs of the transportation, funeral, burial and/or cremation of those persons who died as a result of a terrorist attack.

Article 13. Consular and diplomatic assistance

The General State Administration abroad shall establish specific instruments for assisting Spanish victims, providing effective consular and diplomatic assistance in situations of terrorist attacks abroad.

TITLE THREE

On entitlements and benefits resulting from terrorist acts

CHAPTER 1

General provisions

Article 14. Definition of entitlements and benefits

1. Persons included in Article 4.1 shall be entitled to the rights and benefits regulated in this Act as a result of personal injuries derived from terrorist acts. In case of decease of victims of terrorist attacks, the persons referred to in Article 4.2 of this Act shall be entitled to the above-mentioned rights.
2. Persons included in Article 4.1 and 4.2 of this Act shall also be entitled to be paid by the State the amount of civil liability imposed on those convicted in a final judicial decision for terrorist crimes, pursuant to the present Act.
3. Persons included in Article 4.1 and 4.2 shall be entitled to benefits from the public social protection systems, with the scope and according to the specific system established by the present Act.
4. Persons included in Article 4.3 shall be entitled to compensation for material damage as established by the present Act.
5. Extraordinary pensions resulting from terrorist acts shall be regulated by the specific provisions of the Social Security System or the corresponding system for civil servants.

Article 15. Subsidies regulation

1. Subsidies and compensation established by this Act are compatible with any other pension, subsidy, or compensation that may be granted therein or in any other Act that may be passed by the Autonomous Communities.
2. Moreover, they are compatible with financial responsibility claims against the State resulting from normal or irregular activities of the Public Administration. The above-mentioned subsidies and reparation shall be charged to the compensation that may be recognized for this cause, and subtracted therefrom.

Article 16. Tax exemptions

Sums obtained as compensation, reparation or financial assistance referred to in this Act shall be exempt from income tax, as well as from any other type of personal tax.

CHAPTER 2

Payment of the damages

Section I. Personal injuries

Article 17. Redress for death

1. In the event of death, the sums referred to in Annex 1 shall be paid.
2. According to Article 4.2, persons entitled to this right shall be, in order of precedence:
 - a) The spouse of the deceased, if they were not legally separated, or the cohabitee having lived for, at least, two years with the deceased immediately before his/her death, unless they had children together, in which case mere cohabitation shall suffice; and the children of the deceased.
 - b) In the absence of the above, parents, grandchildren, siblings and grandparents of the deceased shall be the beneficiaries, in successive order of mutually exclusive precedence.
 - c) In the absence of the above persons, the children of the cohabitee, as well as minors in the permanent family care of the deceased, if economically dependent thereon.
3. In the event of the concurrence envisaged in 2a, compensation shall be shared by halves, with one half for the spouse or cohabitee, and the other for the children, with this latter part being shared equally among them.
4. In the event of concurrence of persons with the same degree of kinship, the corresponding amount shall be shared equally among them.

Article 18. Redress for personal injuries

Victims of terrorism who have suffered personal injuries as a result of the crime shall be entitled to the compensation established in tables I, II and

III of the Annex of the present Act, relating to different degrees of disability, non-disabling injuries and kidnapping.

Article 19. Adjustment according to family responsibilities

Persons referred to in Article 17, as well as victims suffering from a permanent disability, shall be entitled to a fixed increase in their compensation amounting to 20 monthly payments of the public revenue index (IPREM), according to the number of children or of minors in permanent family care, economically dependent on the victim.

Article 20⁵. Payment by the State of the sum imposed as civil liability by the Courts: exceptional nature of the payment

1. The State shall pay in exceptional cases the amount of the corresponding compensation imposed as civil liability in a final judicial decision for the commission of any of the crimes referred to in the present Act.
2. Compensation shall only comprise physical or psychological damage.
3. Compensation shall be paid to victims of terrorism and other persons referred to in Article 17 or, in absence thereof, their heirs or the persons determined in the final judicial decision.
4. The total amount to be paid by the State as civil liability, determined by a judicial decision, shall not exceed the following amounts:
 - Death: EUR 500,000
 - Severe disability: EUR 750,000
 - Absolute permanent disability: EUR 300,000
 - Total permanent disability: EUR 200,000
 - Partial permanent disability: EUR 125,000
 - Non-disabling injuries: EUR 100,000
 - Kidnapping: EUR 125,000
5. If, pursuant to Article 17 of the present Act, those persons referred to in paragraph 3 have received compensation for personal injuries, the sum to be paid by way of exception by the State shall only include the difference between the sum imposed as civil liability by the final judicial decision – taking into account the limits established in the previous paragraph – and the sum received as compensation for personal injuries.

⁵ Paragraph 4 amended by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

6. In the event that the compensation imposed in a final judicial decision has a value equal to or less than the sum received as a result of personal injuries, no payment by the Administration shall be done.
7. In no way shall the payment established in this Article imply the undertaking of subsidiary civil liability by the State within the framework of criminal proceedings.

Article 21⁶. Subrogation of the State for the payment of the civil liability

1. The State shall be subrogated to the ownership of the credit claim flowing from a judgment declaring the civil liability deriving from the crime up to the limit of the compensation paid pursuant to the preceding Article. The repetition of the compensation paid by the State against the civilly obliged by the criminal act shall follow the administrative procedure of seizure under Royal Decree 939/2005, dated 29 July, approving the General Regulations for Collection.
2. Recipients of subsidies or benefits for terrorism acts entitled by a final judicial decision to redress exceeding the sum received from the State under the present Act shall retain the right to claim the difference from the perpetrators of the crime causing the damage.

Article 22⁷. Extraordinary compensations for damages suffered abroad

1. Spanish citizens having suffered terrorist attacks abroad and referred to in Article 6.3 shall only be entitled to obtain an economic compensation, according to the following criteria:
 - Spanish nationals who habitually reside in the country where the terrorist attack occurs, he/she shall receive 50 % of the sums established in Tables I, II and III of the Annex.
 - Spanish nationals who do not habitually reside in the country where the terrorist attack occurs, he/she shall receive 40 % of the sums established in Tables I, II and III of the Annex.
2. The subsidy shall be granted alternatively in the event that no compensation is paid by the country where the attack took place. The Spanish State shall pay the difference if the compensation to be obtained abroad is lower than that established in Spain.
3. In the event of overlapping of subsidies or compensations, the State may be authorised to initially pay the total sum calculated pursuant to

⁶ Paragraph 1 amended by Act 22/2013 of 23 December – 2014 Finance Law. BOE No 309, 26th December 2013.

⁷ Paragraph 1 amended by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

paragraph 1 of the present Article as payment on account of the final corresponding amount.

Here, the sum awarded to victims abroad shall be taken into account, and when appropriate, the obligation to refund the corresponding amount to the State shall be indicated.

4. The award of this subsidy shall have no effects under other specific regulations.

Article 22 bis⁸. Redress for kidnapping

Persons kidnapped as a result of the actions comprised within the scope of the present Act, whose release is subject to conditions, shall be compensated with the amount of 12,000 euros. If appropriate, compensation shall be made to victims for the personal damage caused by the kidnapping, up to the limit of the compensation for partial permanent disability, taking into account the number of days of captivity, according to the amounts resulting from the application of Table III of the Annex.

Article 22 ter⁹. Advances and payments on account

The Ministry of the Interior may advance up to 18,030.36 euros on account of payment of the definitive assistance in those cases in which, due to the seriousness of the injuries suffered from as terrorist act, it seems reasonable to assume that total permanent disability, absolute permanent disability or severe disability shall be subsequently determined.

Furthermore, in cases of disabling injuries or temporary disability, the amounts corresponding to the periods of absence from work may be paid on a three-month basis. These advances shall be determined by multiplying the double of the IPREM in force when the injury occurred by the number of the days of inability to work.

Section II. Material damage

Article 23. Extent of compensation for material damage

1. Material damage resulting from or suffered during terrorist crimes by persons not involved in the commission of the crimes shall be compensated by the General State Administration, under the terms established in this and following Articles.

⁸ Added by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

⁹ Added by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

2. Compensation shall include damage to homes, business and industrial premises or their equipment, headquarters of political parties, trade unions or civil society organisations, as well as damage to vehicles.
The General State Administration may contract and shall directly pay construction companies for the restoration of the buildings referred to in the previous paragraph. Contracts concluded by the Public Administration to restore buildings shall be drawn up according to the emergency procedure established in the public procurement regulations. However, the General State Administration may sign agreements with other Public Administrations in order to ensure that they take on the restoration work. The General State Administration shall make the payment.
Those affected who have benefited from reparation work carried out by the General State Administration shall not be entitled to claim, from the Spanish *Consortio de Compensación de Seguros* (Insurance Compensation Consortium), the corresponding compensation for the repairs made to their damaged insured property. In this case, either the construction company or the Administration acting within the framework of an agreement shall receive the corresponding amount of compensation established by reports of experts from the Insurance Compensation Consortium.
3. Redress for material damage shall be subsidiary to any other compensation recognised by the Public Administrations or derived from insurance policies, and shall be reduced by the amounts received under those concepts.
4. Damage to public properties shall not be compensated.

Article 24. Damage to homes

1. Compensation may be paid for damage to the structure, installations and furniture of habitual residences of natural persons that it is necessary to restore in order to recover their former habitability, excluding sumptuary elements. In the event of damage residences not considered habitual, redress shall comprise 50 % of the value of the damage, according to the legally established thresholds.
2. The General State Administration may contribute to defraying the cost of accommodations for those persons obliged to temporally leave their homes due to a terrorist attack for the duration of the restoration works. To this end, the General State Administration may sign agreements with other Public Administrations or with organisations providing support and assistance for persons affected in case of accident or disaster .

Article 25. Damage to business or industrial premises

1. In case of damage to business or industrial premises, redress shall comprise the value of the restoration to ensure the resumption of the activity, including the restoration of damage to furniture and equipment, in accordance with the thresholds to be established by regulations.
2. Notwithstanding the above, in exceptional cases and, in particular, in the event of cessation of business activity due to terrorist acts that may imply the loss of jobs, the General State Administration may agree to subsidise the granting of loans aimed at restarting said activity.
3. The subsidy shall consist in paying the lending credit institution the difference between the capital amortisation and interest payments – at the interest rate set by the lender – and those corresponding to the subsidised interest rate, which shall be determined in the implementing regulations.
4. In order to achieve the aforementioned objective, the General State Administration may also sign agreements with credit institutions so that these may establish low-interest credit facilities.

Article 26. Damage to offices of political parties, trade unions and civil society organisations

1. In the event of office of political parties, trade unions and civil society organisations, redress shall comprise the value of the restoration necessary to ensure the resumption of their activity, including damaged furniture and equipment.
2. Damage produced by terrorist acts to places of worship belonging to registered religious denominations is understood as being included under damage of this nature liable for compensation.

Article 27. Damage to vehicles

1. Damage to private vehicles, as well as to vehicles for land transport of passengers and freight, except State-owned vehicles, shall be redressable. For compensation to be applicable, it shall be essential to have, at the time when the damage occurred, a valid compulsory insurance policy for the vehicle, provided that such insurance is required by specific regulations.
2. Redress shall comprise the sum needed to repair the vehicle. In the event of destruction of the vehicle, or if its repair cost is higher than its market value, the compensation shall be equivalent to the market price of a vehicle having similar technical specifications and use, according to the legally established threshold.
3. Redress shall be subsidiary to any other compensation from the Public Administrations or resulting from insurance policies. In the event of

overlapping, redress shall be reduced by an amount equal to the value of said compensation.

CHAPTER 3

Procedures and responsibilities

Article 28¹⁰. Procedure for compensation for physical or material damage

1. The procedure for recognising entitlement to compensation for damage referred to in this Title shall be processed and resolved by the Ministry of the Interior. Interested parties must file claims within a year after the damage occurs. The deadline is set according to the moment when the victim is officially considered recovered, or the permanent consequences of the damage are determined, upon report from the National Health System. In the event of death as a direct result of the injuries, a new period of the same duration shall be set in order to claim redress or, when appropriate, the difference between the amount paid for such injuries and that paid for death. The same procedure shall be followed if, as a direct result of the injuries, a more serious situation occurs which would involve higher compensation.

In the event of psychological damage, the one-year deadline shall be set from the moment a diagnosis is drawn attesting to the cause-effect link between the accident and the injury.

Should the disable victim decease by causes other than the physical consequences stemming from the terror attack, the recipients of the compensation to be paid by the responsible of the damage shall be those persons referred to in Article 17 of the present Act according to the order of precedence established thereto.

2. In order to categorise the injuries and calculate the corresponding compensation, an expert report from a disability assessment team shall be required. The members of these teams shall be established by regulations, according to the health system of the compensation claimant. In all cases, these teams shall include a representative from the Ministry of the Interior who is dealing with assistance to victims of terrorism.

The Medical Advisory Board attached to the Administrative Unit responsible for determining redress may evaluate permanent non-disabling injuries.

¹⁰ Paragraph 1 amended by Act 17/2012 of 27 December – 2013 Finance Law. BOE No 312, 28th December 2012.

3. The competent services of the Insurance Compensation Consortium shall carry out an expert appraisal of material damage and shall be refunded for the expenses incurred in the appraisal of those goods not covered by insurance policies.
4. In cases where medical assessments of injuries and expert appraisals of material damage are decisive in making a decision, the procedure shall be suspended until they are included in the compensation file.
According to the powers deriving from this Article, the Ministry of the Interior shall be authorised to obtain information on procedures relating to the recognition of extraordinary pensions as a result of terrorist attacks and contained in the files of the National Social Security Institute and the Directorate-General of Personnel Costs and Public Pensions.
5. Decisions handed down within the aforesaid procedures shall exhaust administrative review procedures, and appeals for reversal may be lodged or the decisions may be challenged before the contentious-administrative jurisdiction.
6. The maximum period for resolving the procedure shall be 12 months. The claim shall be considered as accepted if no express decision is handed down after the deadline has elapsed.

Article 29. Unification of investigative bodies

1. Within the Ministry of the Interior a single administrative body shall be in charge of handling all the claim files referred to in the previous Articles.
2. Injuries assessments included in documents drawn by bodies of the General State Administration shall be binding on any other body that, according to this Act, may be obliged to evaluate personal damages to grant subsidies or benefits. Such assessments also exempt the claimant from undergoing further medical examinations.
3. Moreover, the above-mentioned body shall act as Point of Single Contact for any other procedure that may be initiated by interested parties before the General State Administration. It shall forward all claims to the competent body and maintain contact with the interested parties.

Article 30. Liaising with Courts

In order to verify the situations and circumstances when handling the procedures referred to in the previous sections and avoid inconveniences and formalities for the interested parties, the Ministry of the Interior shall be entitled to obtain directly from the Courts – prior consent of the above-said parties – all records, data or reports needed within the procedure.

TITLE FOUR

Social protection system

CHAPTER 1

Health care

Article 31. Awareness-raising and specific treatment for victims of terrorism

1. Health Administrations, in the framework of the Inter-Regional Council of the National Health System, shall promote and facilitate actions by health care professionals to provide specific assistance to victims of terrorism, and shall propose those measures that they consider necessary to optimise the contribution of the health sector to such assistance.
2. In particular, awareness-raising and continuous training programmes for health care professionals shall be organised with a view to improving and promoting the diagnosis, coordinated assistance, and rehabilitation of victims of terrorism.
3. A specific section concerning comprehensive and coordinated intervention for victims of terrorism shall be envisaged in the relevant National Health Plans.
4. The National Health System shall provide for psychological, psychoeducational and, when appropriate, psychiatric care to the persons referred to in Article 4.1 and 4.2, according to the specific system established in the previous paragraphs. This shall not directly result in the recognition of any right to reparation or economic compensation.

Article 32. Subsidies for medical treatment and health care complementing the assistance provided by the National Health System

1. The persons referred to in Article 4.1 and 4.2 may receive specific subsidies in order to finance medical treatment, prostheses and surgery, provided that the current need therefore is accredited, that they are related to a terrorist attack, and that they have not been covered either by a public or private insurance system or the public system of redress or compensation for victims of terrorist acts.
2. Regarding costs for medical treatments, the amount not covered by other health assistance systems that these persons may be under shall also be recoverable.
3. Such subsidies shall be additional and complementary to those established by the present Act.

They shall be incompatible with those established for the same purposes by the public health system. Furthermore, no compensation shall be applied if the benefit in question is already covered by the public system.

CHAPTER 2

Labour rights and social security entitlements

Article 33¹¹. Labour rights

Should the Ministry of the Interior or a Court in a final judgement recognise such rights, persons having suffered physical and/or psychological injuries as a result of terrorist activities, their spouse or cohabitee having lived with the deceased during, at least, the two previous years, as well as the children, both of the injured and the deceased, shall be entitled to rescheduling of working hours and geographical mobility, according to the rules established in the ‘Estatuto de los Trabajadores’ (Workers’ Statute).

Article 34¹². Active employment policies

According to Article 3bis, should the Ministry of the Interior or a Court in a final judgement recognise such right, persons having suffered physical and/or psychological injuries as a result of terrorist activities, their spouse or cohabitee having lived with the deceased during, at least, two previous years, as well as the children, both of the injured and the deceased, shall be entitled to benefit from hiring incentives and active employment policies provided for under their specific regulations.

Article 35. Entitlements of civil servants and non-civil servant staff of the Public Administrations

1. Persons referred to in Article 4.1 who have the status of civil servants shall be entitled to the reduction or adjustment of their working hours and to geographical mobility as regards their workplace, pursuant to their specific regulation.
2. In the event that the above-mentioned persons should exercise the right to geographical mobility established in the previous paragraph, their spouses or cohabitants shall have a preferential right to be appointed, if there are

¹¹ As amended by Act 3/2012 of 6 July on Urgent Labour Reform Measures. BOE No 162, 7th July 2012.

¹² As amended by Act 3/2012 of 6 July on Urgent Labour Reform Measures. BOE No 162, 7th July 2012.

- vacancies in the same location, to an equal or similar post to the one they held.
3. These entitlements shall also be applicable to non-civil servant staff of the Public Administrations, under the terms established by their specific legislation, and to the extent to which the entitlements may be compatible with their own applicable legal system.

CHAPTER 3

Exceptional assistance for victims of terrorism

Article 36. Exceptional assistance for victims of terrorism

Without prejudice to ordinary redress and assistance, the Ministry of the Interior may grant exceptional assistance to mitigate situations of total, or insufficiently covered, personal or family need. Such assistance is compatible with the ordinary assistance provided for in this Act.

CHAPTER 4

Actions as regards housing

Article 37. Specific treatment in state-subsidised housing

1. Public Administrations shall seek to ensure that all persons included in Article 4 of this Act be given priority in the allocation of state-subsidised housing, particularly when the consequences of a terrorist act force them to leave their former residence.
2. Public Administrations shall ensure that a priority system be established so that such persons can also move to rental housing when the aforesaid is managed through public systems or organisations.
3. Public Administrations shall establish financial aid for the adaptation of the homes of those victims who may so require due to the consequences of terrorist acts.

CHAPTER 5

Educational grants

Article 38¹³. Exemption from academic fees

The competent Public Administrations and, when appropriate, the educational authorities, shall adopt, at the different academic levels, the necessary measures to guarantee the exemption from all types of academic fees in official study centres for the victims of terrorist acts as defined in Article 4.1 of the present Act, as well as for the children of those who have died in a terrorist act or of those who have suffered physical and/or psychological damage as a result of terrorist activity.

Article 39. Awarding educational grants

1. Educational grants shall be awarded when, as a consequence of a terrorist act, there is personal damage to a student, his or her widow/er, cohabiting party or children of the deceased person or for his or her parents, siblings, tutors or guardians, preventing them from pursuing their usual occupational activities.
2. The implementing provisions of this provision shall determine the modalities and amounts of aid, and the requirements for receiving it, establishing, in all cases, its incompatibility with aid received for the same reason from other Public Administrations.

Article 40. Specific system for assistance to the victims in the educational system

1. Public Administrations responsible for education may establish a specific system for assistance to the victims of terrorism referred to in Article 4.1 and 4.2 of this Act, through the designation of tutors or other systems enabling provision of personalised attention and facilitating the continuation of their ongoing or future studies.
2. Moreover, the aforesaid authorities, in collaboration with the directors and other persons responsible for educational centres, shall endeavour, if necessary, to adapt teaching methods to their physical and psychological conditions.

¹³ As amended by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

CHAPTER 6

Specific rights of alien terrorism victims

Article 41. Granting of nationality

The status of victim of terrorism referred to in Article 4.1 of this Act shall be considered as an exceptional circumstance for the purposes of acquisition of Spanish nationality through naturalisation.

CHAPTER 7

Rights concerning victims' data processing

Article 42. Data protection and limits to publicity

In the actions and proceedings related to terrorism, the privacy of the victims shall be protected; in particular, their personal data, those of their descendents or of any other person who may be under their care or custody.

Article 43. Illicit publicity

Pursuant to the provisions of specific legislation on this matter, any publicity using the image of victims for derogatory, degrading or sensationalist purposes or for profit shall be considered illicit.

Article 44. Oversight

The institutions responsible for ensuring that audiovisual media comply with their obligations shall adopt appropriate measures to guarantee treatment of victims of terrorism according to constitutional principles and values, notwithstanding any potential actions that other entities may adopt.

Article 45. Cessation and rectification actions

The persons referred to in Article 4 of the present Act shall be entitled to file before the Courts actions for cessation and rectification of illicit publicity using in a degrading manner the image of victims of terrorism, pursuant to the specific legislation.

Article 46. Principles applicable to information on victims of terrorism

1. The media shall promote the protection and safeguarding the image of victims of terrorism, avoiding any inappropriate or disproportionate use thereof.

2. The dissemination of information regarding victims of terrorism shall take into account respect for the human rights, freedom and dignity of the victims and their families. Special care shall be given to the use of graphic material.

Article 47. Mass media

1. In order to comply with the previous Article, Public Administrations shall promote self-regulation agreements with effective mechanisms and mechanisms for preventive oversight and out-of-court settlements which contribute to compliance with legislation on publicity.
2. To best achieve the aims established in this Article and in the preceding Articles, the competent Public Administrations may promote public-awareness campaigns and training for media professionals.

TITLE FIVE

Protection of victims in judicial proceedings

SOLE CHAPTER

Legal principles and rights of victims of terrorism before the Spanish Courts

Article 48. Right to free legal assistance

1. Victims of terrorism referred to in Article 4.1 and 4.2, who evidence lack of resources to litigate, pursuant to the terms established in Act 1/1996 of 10 January, on Free Legal Assistance, shall have right to free representation and defence by a Barrister and a Solicitor in all administrative processes and proceedings that have direct or indirect causation in the situation that results in the said condition. In this case, only one Solicitor shall take on the defence of the victim.

In the event of death of the victim, this right shall also pertain to those persons referred to in Article 4.

2. In any case, immediate free legal assistance shall be guaranteed to all victims of terrorism that so request, notwithstanding the fact that, if they are not eventually recognised the said right, they shall have to pay the Barrister and Solicitor, when appropriate, the fees that are due.

Article 49. Minimum harm in participating in the proceedings

Courts shall seek that all declarations or participation of any of the persons mentioned in Article 4.1 and 4.2 of the present Act be carried out in a way that causes the least possible discomfort and harm. Particularly, during the proceedings it shall endeavour, by all means set forth in legislation, to avoid subjecting these persons to having direct eye contact with or listening to those suspected of or indicted for the perpetration of terrorist acts.

In any case, Courts shall protect the dignity and personal safety of victims throughout the proceedings, avoiding the use of expressions or gestures that might offend or humiliate them

Article 50. Specialised information

1. Public Administrations responsible for justice as regards material means, in collaboration with the judicial government bodies, shall establish personalised information mechanisms permitting the persons referred to

in Article 4 of the present Act to know the state of the proceedings to which they are party, when appropriate, of the legal actions that they may initiate in defence of their rights. Specifically, the Ministry of Justice shall create an Office of Information and Assistance to Victims of Terrorism at the Audiencia Nacional.

2. Said information mechanisms may consist in the creation of specific offices, in the electronic presentation of information or in any other mechanism that makes it possible to obtain the information needed while reducing the difficulty in obtaining it.
3. The persons providing the aforesaid information and attention shall have the necessary qualifications to avoid overlapping proceedings and unnecessary appearances before the corresponding jurisdictional bodies.

Article 51. Office of Information and Assistance to Victims of Terrorism

The functions of the Office of Information and Assistance to Victims of Terrorism include:

- providing information about the state of the proceedings that affect victims of terrorism;
- giving advice to victims of terrorism regarding everything that relates to the criminal proceedings and the contentious-administrative proceedings that affect them
- offering personal accompaniment to trials held in relation with terrorist acts for which the affected persons filed an action
- promoting the safeguarding of the safety and privacy of the victims in their participation in the judicial proceedings in order to protect them from unlawful interference or acts of intimidation or retaliation and any other offensive or humiliating act;
- establishing channels of information to victims regarding everything that concerns the execution of the sentence until the moment of its full completion; particularly, in cases where the granting of benefits or release of convicts are involved.

TITLE SIX

Recognitions and decorations

Article 52¹⁴. Decorations

1. The Royal Order of Civil Recognition for Victims of Terrorism is the specific recognition of the State to honour victims of terrorism.
2. This honour is awarded posthumously, with the rank of Grand Cross, to those killed in terrorist acts; with the rank of Commander, to those wounded or kidnapped in terrorist acts; and with the rank of Badge, to those threatened, those who have suffered a terrorist act which did not result in any damage, injuries or consequences, as well as the spouse or cohabitee, parents and children, grand-parents, siblings and grandchildren of the deceased, as well as family members of the wounded who have suffered disabling injuries in the different degrees of severity, up to the second degree of kinship.
3. The procedure for the recognition thereof is provided for in Article 54 of the present Act.

Article 53¹⁵. Requirements for the award of decorations

1. Victims of terrorism referred to in Article 4.1 and 4.2 of this Act may request the award of said decorations with the rank of Grand Cross and the rank of Commander, under the terms provided for in the preceding Article.
Persons referred to in Article 4.5 and 4.6 and Article 5 may request the award of a decoration with the rank of Badge.
2. The decorations shall never be awarded to those who, in view of the past life or career, have shown a behaviour contrary to the values enshrined in the Constitution and in this Act and to the Human Rights recognised in international treaties.

Article 54¹⁶. Procedure for awarding decorations

1. The Ministry of the Interior shall be responsible for the procedures to award decorations. Such proceedings may be initiated at the request of any of the persons referred to in the preceding Article, or of the

¹⁴ As amended by Organic Law 9/2015 of 28 July on National Police Staff regulations. BOE No 180, 29th July.

¹⁵ Paragraph 1 amended by Act 22/2013 of 23 December – 2014 Finance Law. BOE No 309, 26th December 2013.

¹⁶ Paragraph 1 amended by Act 22/2013 of 23 December – 2014 Finance Law. BOE No 309, 26th December 2013.

persons who have suffered the crime, even though they may have not been referred to in the previous sections, or *ex officio* by the Directorate General responsible for the assistance to the victims of terrorism of the aforesaid Ministry, when it has knowledge of facts that may lead to entitlement.

When the proposed decoration is that of a Grand Cross, it shall be awarded by a Royal Decree approved in the Council of Ministers at the behest of the Ministry of the Interior.

When the proposed decoration is that of Commander and of Badge, the resolution corresponds to the Ministry of the Interior, and it shall be granted in the name of His Majesty the King.

2. The period for submitting a request or for the Administration to act *ex officio* shall be five years.
3. The maximum period to notify the resolution of requests shall be twelve months from the entry date in the register of the agency competent for the processing thereof. In those proceedings in which a resolution has not been handed down within the established period, the requests shall be deemed granted.
4. The resolution, whether it is favourable or not, shall exhaust the administrative channel, but it shall be possible to lodge a contentious-administrative appeal against it.
5. The award of a decoration shall not imply, in itself, entitlement to the compensation set forth in this Act.

Article 55. Recognition of the status of victim of terrorism in the honorary activity of the State

The aforesaid notwithstanding, the status of victim of terrorism shall be particularly taken into account for the awarding of the decorations and compensations that could correspond to such victims due to their profession, occupation, or place of residence.

Article 56. Recognition and remembrance of victims of terrorism

The public authorities shall promote active measures to ensure, with the highest degree of respect for the dignity of victims, and via acts, symbols, monuments or similar elements, the remembrance and the recognition of victims of terrorism.

Article 57. National Centre for the Remembrance of Victims of Terrorism

The Government shall create a National Centre for the Remembrance of Victims of Terrorism with the goal of preserving and transmitting the democratic and ethical values embodied by victims of terrorism, building

the collective memory of the victims and raising public awareness for the defence of freedom and human rights, and against terrorism. The National Centre for the Remembrance of Victims of Terrorism shall have its seat in the Autonomous Community of the Basque Country.

Article 58. Institutional recognition of victims' presence

The formal presence and social recognition of victims of terrorism shall be highlighted in all institutional acts that involve them.

Article 59. Education for the defence of freedom, democracy and peace

The educational administrations, with the aim of guaranteeing respect for human rights and the defence of freedom within the democratic principles of peaceful coexistence, shall promote plans and projects of education for freedom, democracy and peace, and shall endeavour to obtain the direct testimony of victims of terrorism as part thereof.

Article 60. Day of remembrance and homage to victims of terrorism

Every 27 June is hereby declared a day of remembrance and homage to victims of terrorism.

Every 11 March, the European Day of Remembrance of Victims of Terrorism shall be commemorated.

On both days, public institutions shall promote acts of recognition of the victims of terrorism with the purpose of keeping their memory alive and defending their ethical message.

TITLE SEVEN

Institutional protection and support for victims of terrorism

CHAPTER 1

Institutional protection

Article 61. Defence of the honour and dignity of the victims

1. The State undertakes to defend the dignity of victims by banning in public places the use of monuments, coats of arms, badges, commemorative plaques and other objects or expressions aiming at commemorating or glorifying, collectively or individually, terrorism, terrorists or terrorist organisations.
2. The Public Administrations, in the performance of their duties, shall adopt the necessary measures to enforce this ban, notwithstanding the actions that the victims and their family members may take in defence of their right to honour and dignity.
3. Moreover, they shall prevent the celebration of public acts that entail discredit, disrespect or humiliation of the victims or of their family members, exaltation of terrorism, homage or public awarding of distinctions to terrorists.
4. The Government Delegates in the Autonomous Communities shall seek compliance by the local authorities with the obligation provided for in the aforementioned paragraphs, to the effect of *ex officio* appeals before the competent Courts.

Article 62. Institutional protection of victims of terrorism

1. The Ministry of the Interior shall appoint a General State Administration body to be an instrument in liaising with, assisting and orienting persons who suffer the terrorist acts and their family members.
2. Furthermore, this body shall act in drafting proposals for legislative or organisational reforms aimed at optimising the assistance and benefits system established, or that may be established, to improve their situation.

Article 63. Reports on the situation of victims of terrorism

1. The Ministry of the Interior, in the performance of its duties of advice, assessment, and institutional collaboration, shall draft reports and conduct

- studies, as well as making proposals regarding assistance to victims of terrorism.
2. Such reports on the situation of victims of terrorism shall also highlight the need for legal reform with the aim of ensuring that the application of the protection measures adopted guarantees the maximum degree of protection for victims of terrorism. On a yearly basis, the Ministry of the Interior shall submit to Parliament a report on the situation of victims of terrorism collectively, and, when appropriate, proposals for action.
 3. The participation of the Autonomous Communities, local entities, and social partners and victims' associations shall be sought in all cases for the drafting of these studies and reports.

CHAPTER 2

Promotion of associations and foundations

Article 64. Recognition of the role and the importance of associations

1. The associations and foundations of victims of terrorism contribute to promoting unity among victims, defending their interests and improving their condition, as well as promoting social awareness against terrorism and for remembrance. The efore, their activity has the social recognition enabling Public Administrations to promote their creation and maintenance.
2. The associations and foundations of victims of terrorism are acknowledged as representatives thereof in the present Act.

Article 65¹⁷. Subsidies

The General State Administration shall grant subsidies to the associations, foundations and not-for-profit entities whose object is the representation and defence of the interests of victims of terrorism, pursuant to the terms and provisions established in the implementing regulations. When establishing this subsidy system, entities having the largest number of victims shall have priority, and to this end, a procedure shall be established, with the consent of the interested parties, so that this status, as well as the assistance work carried out by the organisations on behalf of victims of terrorism, may be made public to the body responsible for granting subsidies.

¹⁷ As amended by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

ANNEX I

Compensation for physical and psychophysical damage. Scale

Table I. Compensation for death and permanent disabilities

Concept	Euros
Death	250,000.00
Severe disability	500,000.00
Absolute permanent disability	180,000.00
Total permanent disability	100,000.00
Partial permanent disability	75,000.00

Table II. Compensation for non-disabling permanent injuries

Compensation for non-disabling permanent injuries shall be established according to the provisions contained in Royal Legislative Decree 8/2004, dated 29 October, approving the Consolidated Text of the Act on Civil Liability and Insurance in the Circulation of Motor Vehicles and according to the scale resulting from the application of the social security regulations on the amount of compensation for definitive and non-disabling injuries, mutilations and deformities caused by work accidents or occupational diseases.

Table III. Compensation for temporary disability and for kidnapping

Concept	Compensation
Temporary disability	IPREM/day x 2, to the limit of 18 monthly allowances
Kidnapping	IPREM/day x 3, to the limit of that established in this Annex for partial permanent disability

First Additional Provision. *Retroactive application to those who had previously obtained subsidies and compensation*

Persons who, prior to the enactment of this Act, have received a total aggregate sum for compensation, or have been paid, when applicable, the amounts for civil liability established in the final judicial decision, less than the figure established in Annex I of this Act, may request the payment of the differences to which they may be entitled, within a year from the entry into force of the implementing regulation of the Act.

Second Additional Provision. *Analysis Commission of the Inter-Regional Council of the National Health System*

1. As part of the Inter-Regional Council of the National Health System, within a year from entry into force of the present Act, an Analysis Commission shall be created to analyse the treatment of victims of terrorism to provide technical support and orientation in the planning of the health measures established in this Act, as well as to assess and propose the necessary measures for the implementation of a health protocol and any other measures that may be deemed necessary so that the health sector may contribute to specialised care in this area.
2. The Commission for the Treatment of Victims of Terrorism of the Inter-Regional Council of the National Health System shall comprise representatives of the Autonomous Communities.
3. The Commission shall draft an annual report that shall be submitted to the plenary session of the Inter-Regional Council.

Third Additional Provision. *Employment plan*

1. Within the framework of the Employment Plan of the Kingdom of Spain, a specific action programme shall be included for the persons referred to in Article 4 .1 of this Act who are registered as job seekers.
2. This programme shall include measures aimed at promoting new self-employed activity.

Fourth Additional Provision. *Public employment measures*

The Public Administrations shall adopt, within the scope of their powers, measures aimed at favouring access by victims of terrorism to public employment.

Fifth Additional Provision. *Powers of the Autonomous Communities*

All the provisions of the present Act shall be understood without prejudice to the powers of the Autonomous Communities in this regard.

Sixth Additional Provision. *European Charter of Terrorism Victims' Rights*

The Government shall support and promote the approval of the European Charter of Terrorism Victims', drafted in collaboration with all the associations of victims of terrorism on a European scale.

Seventh Additional Provision. *Revising compensation for physical and psychophysical damage*

Subsidies and compensation regulated in this Act shall be the revised periodically pursuant to the provisions established in the annual General State Budget Acts.

Transitional Provision¹⁸

Requests filed prior to entry into force of this Act and which are being processed shall be resolved pursuant to the legislation applicable when the request was filed.

Sole Repealing Provision

All the provisions of the same or inferior rank that are contrary to what is established in this Act are hereby repealed.

First Final Provision. *Implementing regulations*

1. The Government, within sixth months from the date of enactment of this Act, shall adopt the implementing regulations pursuant thereto, at

¹⁸ Added by Act 2/2012 of 29 June – 2012 Finance Law. BOE No 156, 30th June 2012.

- the joint proposal of the Ministries of Justice, of the Economy and of the Treasury, of the Interior and of Labour and Immigration.
2. Within one year, the General State Administration shall establish the essential criteria for drafting the action protocols for situations arising from a terrorist attack. Likewise, within the same period, it shall promote and coordinate the drafting, implementation and dissemination of these action protocols on the part of all the Public Administrations with powers in this regard.

Second Final Provision. *Status of the victims' associations as associations of public interest*

Article 32.1 of Organic Law 1/2002 of 22 March, on the Right to Association, is hereby amended and shall henceforth be worded as follows:

- a) That its object, pursuant to its Articles of Association, tends to promote the general interest, in the terms defined by Article 31.3 of this Act, and involve civic, educational, scientific, cultural, sporting or health purposes or promote constitutional values, human rights, victims of terrorism, social assistance, development cooperation, promotion of women, family protection and promotion, protection of children, equal opportunities and tolerance, defence of the environment, promotion of social economy and research, promotion of social volunteers, defence of consumers and users, promotion and care of persons at risk of exclusion due to physical, social, economic or cultural reasons or any other of a similar nature.'

Third Final Provision. *Economic and budgetary allocation of the Act*

1. The Government shall submit to Parliament a bill to grant an extraordinary credit to finance the foreseeable payments after the entry into force of this Act.
2. Ordinary budgetary needs shall be reflected in the General State Budget Acts.

Fourth Final Provision. *Additional Rules*

In all matters not covered by this Act, the legislation on redress to victims of crimes committed by terrorists or armed groups shall be applicable, as well as the provisions on public aid and subsidies and, when applicable, Act 30/1992

of 26 November, on the Legal System of Public Administrations and the Common Administrative Procedure.

Fifth Final Provision. *Entry into force*

This Act shall enter into force on the same day of its publication in the BOE.

**Royal Decree 671/2013 of 6 September adopting
the implementing regulations for Act 29/2011
of 22 September on the Recognition
and Comprehensive Protection
of Victims of Terrorism**

BOE No 224, 18th September 2013*

The purpose of the present Royal Decree is to implement Act 29/2011 of 22 September on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism, approved unanimously by both Houses of Parliament as an expression of Spanish society's recognition of and ongoing commitment to all victims of terrorism.

In compliance with the authorisation for regulatory implementation contained in First Final Provision of the aforesaid Act, these Regulations incorporate major legal innovations and, as in the case of the said Act, are inspired by a comprehensive approach to assisting the victims of terrorism, as well as by the principles recognised by the European Union law for the protection of victims of crime.

These Regulations include the reparations, compensation, assistance and decorations that, to date, were regulated separately by Royal Decree 288/2003 of 7 March and Royal Decree 1912/1999 of 17 December governing, respectively, reparations for damages derived from terrorist attacks and payment by the State, on an exceptional basis, of the sum imposed by the Courts as civil liability derived from terrorist offences. They also include the honours and distinctions previously set out in Royal Decree 1974/1999 of 23 December, approving the regulations governing the Royal Order of Civil Recognition for Victims of Terrorism.

The adoption of the present Regulations makes it possible to fully implement the comprehensive approach to assisting victims of terrorism established by the aforesaid Act 29/2011. It also makes it possible to advance towards enhanced complementarity and coordination of the various public administrations' protection systems for victims of terrorism. This goal was among the measures included in the report for the Commission on Public Administration Reform, approved by Spain's Council of Ministers on 21 June 2013.

These new Regulations, as well as the Act from which they are derived, aim to ensure a fair treatment of victims of terrorism regardless of when and where the terrorist attacks were perpetrated. Thus, they establish a transitional regime designed to regulate the cases of retroactive application of redress, compensation and subsidies dating back to 1 January 1960. As for their territorial scope, this encompasses attacks committed on Spanish territory

and abroad, both when the victim is a Spanish national and the damages have been caused by acts of groups usually operating in Spain or aimed at attacking the Spanish State or Spanish interests, and when the victim is Spanish but the acts are not of that nature.

The Regulations are structured into seven Titles and an Annex.

The Preliminary Title establishes the territorial scope and timeframe of application, requirements for accreditation as a beneficiary, the fixation for compensation, redress, subsidies and decorations, and the legal framework for subsidies.

The first three chapters of Title One establish the persons entitled to redress and the amounts thereof in cases of death, personal injury caused by terrorist acts, and kidnapping. Chapter 4 regulates the payment by the State, on an exceptional basis, of the sum imposed by the Courts as civil liability. Chapter 5 establishes extraordinary assistance for victims of terrorist attacks perpetrated abroad that are not included in the ordinary compensation system.

Title Two regulates material damages. Compensation includes damage to homes, business and industrial premises, headquarters of political parties, trade unions and other civil society organisations, as well as damage to vehicles. Such compensations shall be paid up to the maximum threshold established by the Regulations.

Chapter 1 of Title Three provides for the immediate psychological and psychiatric assistance, and urgent health care necessary in the event of a terrorist attack. Chapters 2, 3 and 4 provide for complementary health care and psychosocial assistance, psychological treatment, psychoeducational support for the victims and their relatives, as well as for the system applicable to educational grants and state-subsidised housing. It also envisages the possibility of providing exceptional assistance, regulated in Chapter 5, for situations of personal or family need which are insufficiently covered, and of granting advance payments. Finally, Chapter 6 sets forth a series of labour rights for those affected by terrorist acts.

Title Four provides for the relevant provisions regarding the procedures for recognition of entitlement to redress, compensations, assistance and decorations provided in Chapter 1 of these Regulations. Chapter 2 establishes the rules aimed at facilitating recognition of entitlement to compensation for victims of terrorism in cross-border situations pursuant to the laws of the European Union Member States. The obligations deriving from Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims are thus incorporated here.

Title Five includes the regulation of the Royal Order of Civil Recognition for Victims of Terrorism which can be conferred, *ex officio* or at the request

of the interested party, with the rank of Grand Cross or Commander. This decoration constitutes the specific recognition of the State to honour victims of terrorism.

Finally, Title Six establishes the regulation of the institutional protection of victims of terrorism and the Annex includes the applications forms requested for redress, compensation, subsidies and decorations covered by these Regulations.

By virtue thereof, at the proposal of the Ministry of the Interior, the Ministry of Justice, the Ministry of the Treasury and Public Administrations, and the Ministry of Employment and Social Security, in agreement with the Council of State and after discussion by the Council of Ministers on 6 September 2013, I hereby decree:

Sole Article. Adoption of the Regulations

The Regulations of Act 29/2011 of 22 September on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism, the text of which is included below, are adopted.

First Transitional Provision. Transitional rules

Procedures initiated before the entry into force of these Regulations shall continue in accordance with the rules applicable at the time the application was submitted.

Second Transitional Provision. Retroactive application to those already awarded redress, compensation and subsidies

1. Persons who, prior to the entry into force of Act 29/2011 of 22 September on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism, had received an aggregate sum as redress for personal injuries or, when applicable, a compensation sum determined by the Courts as civil liability, totalling less than the figure established in Annex I of said Act, may request the payment of the differences to which they may be entitled, within a year from the entry into force of the present Regulations.
2. Should material damages not have been redressed in the past because the legal system did not provide for it, redress for material damages resulting from terrorist acts occurred since 1 January 1960, may be requested within one year from the entry into force of the present Regulations. Educational grants, medical treatment, and psychoeducational assistance, as well as exceptional assistance, may be requested under the same conditions, except for the one-year deadline.

3. For events occurred before the entry into force of these Regulations, the five-year deadline provided for in Article 49.4 for the conferral of decorations shall be counted from the day following the publication of the present Regulations.

Sole Repealing Provision. Repealed provisions

All provisions of equal or lesser rank which are contrary to what is established in this Royal Decree are hereby repealed, specifically, Royal Decree 1912/1999 of 17 December, adopting the implementing regulation for Act 32/1999 of 8 October on Solidarity with the Victims of Terrorism, Royal Decree 1974/1999 of 23 December adopting the Regulation of the Royal Order of Civil Recognition for Victims of Terrorism, and Royal Decree 288/2003 of 7 March adopting the Regulations on assistance and reparations to victims of terrorist offences

First Final Provision. Powers to pass regulations

The present Royal Decree is enacted in accordance with Article 149.1.1 of the Spanish Constitution.

Second Final Provision. Incorporation of European Union law

By means of these Regulations, Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims is incorporated into the Spanish law.

Third Final Provision. Entry into force

These Regulations shall enter into force on the day after their publication in the BOE.

Regulations for Act 29/2011 of 22 September on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism

PRELIMINARY TITLE

General Provisions

Article 1. Purpose

The purpose of the present Regulations is to implement Act 29/2011 of 22 September on the Recognition and Comprehensive Protection of Victims of Terrorism.

Article 2. Scope of application

1. The system of subsidies, redress, compensation and decorations recognised by these Regulations shall be applicable to victims of terrorist acts committed on Spanish territory or under Spanish jurisdiction and to those threatened by terrorists or terrorist organisations according to Article 3 and 5 of Act 29/2011 of 22 September respectively.
2. This system shall also apply to acts committed abroad provided that the victims are Spanish citizens and, at least, one of the following circumstances is met:
 - a) The damages were caused by acts committed by groups usually operating in Spain.
 - b) The terrorist acts were aimed at attacking the Spanish State or Spanish interests.
3. The system shall also apply, under the conditions provided for in these Regulations, to Spanish nationals who are victims of terrorist acts committed abroad and are not included in the above paragraph.
4. The system of subsidies, redress, compensation and decorations recognised by these Regulations shall also apply to persons belonging to the Spanish contingent that participates in peacekeeping or security operations abroad and suffer a terrorist attack.

To this end, it shall apply to:

- a) Members of the Spanish Armed Forces participating in the aforesaid operations, including those who, under the supervision of the Ministry

- of Defence, are part of the crew of the means of transports used for travel.
- b) Members of State Security Agencies participating in the aforementioned operations.
 - c) Staff of the Public Administrations, including those hired individually by the Spanish state, travelling to the place where the operation is conducted to take part in it, or posted there.
5. The system of subsidies, redress, compensation and decorations recognised by the present Regulations shall be applicable to events occurred since 1 January 1960.

Article 3. Beneficiaries

1. Individuals affected by the acts included in the scope of application of the present Regulations shall be considered eligible for subsidies, redress, compensation and decorations.
2. For the purposes of the provisions of the previous paragraph, the status of affected individuals shall be certified
 - a) By a final judicial decision recognising the right for compensation as civil liability for the events and damages referred to in the scope of application of the Act.
 - b) When, without such a final judicial decision, the relevant judicial proceedings were carried out or the criminal proceedings to prosecute the crimes were initiated; in which case, evidence of the status of victim or entitled persons, the level of damages suffered, the nature of the acts or events causing the damages and any other legal requirements may be provided to the General State Administration by any legally admissible means of proof. In the cases referred to in Article 2.2, 2.3 and 2.4 of the present Regulations, the Minister of Foreign Affairs and Cooperation, the Minister of Defence and the Minister of the Interior shall be asked to submit a report, within their respective powers, in order to accredit the aforesaid.
3. Subsidies and benefits recognised in these Regulations shall be subject to the principles established by the European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes in order to be awarded.
4. Final administrative decisions handed down by bodies of the General State Administration leading to the recognition of the status of victim of terrorism for interested parties shall be valid for the processing and

resolution of the relevant administrative procedures based on these Regulations, pursuant to the applicable provisions.

Article 4. Fixation of subsidies, redress, compensation and decorations

1. In the event of death of the victim resulting from the acts referred to in these Regulations and under the terms established herein, the following shall be granted:
 - a) The State shall pay the transportation, funeral, burial and/or cremation costs borne by the victim's relatives under the terms established in Article 8.
 - b) Payment by the State of the sum established in Article 7 for redress for death.
 - c) When appropriate, the sum to be paid by the State on an exceptional basis and determined in a final judicial decision as civil liability for physical or psychological damage resulting from events included in the scope of application of these Regulations, under the terms established in Chapter 4 of Title One.
 - d) The payment for material damage pursuant to Title Two.
 - e) Subsidies for medical treatments and complementary health care and psychosocial assistance established in Chapter 2 of Title Th ee.
 - f) Educational grants pursuant to Chapter 3 of Title Th ee.
 - g) Financial assistance as regards housing pursuant to Chapter 4 of Title Th ee.
 - h) Exceptional assistance for situations of need pursuant to Chapter 5 of Title Th ee.
 - i) Decorations conferred by the State pursuant to Title 5 of these Regulations.
2. Individuals having suffered physical or psychological damage as a result of the acts referred to in the scope of application of these Regulations shall be entitled to payment by the State of redress for personal injuries in the amounts established in Article 10, as well as to the compensation, benefits, and decorations recognised in Article 4.1 c to 4.1 i of the previous paragraph.
3. Individuals having been kidnapped as a result of the acts referred to in the scope of applications of these Regulations shall be entitled to financial redress with the sums established in Article 14 of these Regulations, as well as to receive the compensation, benefits, and decorations recognised in paragraph 1 above, Article 4.1c to 4.1i.

4. Individuals having suffered material damage as a result of the acts referred to in these Regulations and not included in any of the previous cases shall be entitled to redress from the State under the terms established in Title Two of the present Regulations.
5. Spanish nationals not belonging to any Spanish overseas contingent, who may be victims of terrorist attacks abroad perpetrated by groups that do not usually operate in Spain and that are not targeting Spain or Spanish interests, shall be entitled to redress from the State for personal injuries with the sums established in Article 21.

Article 5. Specific system for assistance to threatened persons

Those threatened persons referred to in Article 5 of Act 29/2011 of 22 September shall only be entitled to receive the exceptional assistance from the State established in paragraph 4 of Article 42 of the present Regulations.

TITLE ONE

Personal Injuries

CHAPTER 1

Death

Article 6. Beneficiaries

1. Persons entitled to redress for death, applicable from the date thereof, shall be:
 - a) The spouse of the deceased, if they were not legally separated, or the person who had been living with the deceased permanently in relationship analogous to marriage for at least two years immediately prior to the death, unless they had children together, in which case mere cohabitation shall suffice; and the children of the deceased.
 - b) In the absence of the above, parents, grandchildren, siblings and grandparents of the deceased shall be the beneficiaries, in successive order of mutually exclusive precedence.
 - c) In the absence of the above persons, the children of the cohabitee, as well as minors in the permanent family care of the deceased or in pre-adoption placement with him/her, if economically dependent thereon.

2. In the event of concurrence within the same paragraph of Article 6.1 of several persons entitled to redress, the amount shall be distributed as follows:
 - a) In the case envisaged in Article 6.1a above the sum shall be shared by halves, with one half for the spouse not legally separated or cohabitee, and the other half for the children, with this latter part being shared equally among them.
 - b) In the case envisaged in Article 6.1b above the sum shall be shared equally among persons with the same degree of kinship.
 - c) In the case envisaged in Article 6.1c above the sum shall be shared equally among the entitled beneficiaries

3. For the purposes of this Article, individuals shall be deemed economically dependent on a deceased person if, at the time of the death, they were living totally or partially at the expense of the deceased person and not perceiving any form of annual income over 150 per cent of the yearly public income index.

Article 7. Amounts

The sum for compensation for death due to a terrorist act shall be 250,000 euros, and victims shall be entitled to a fixed increase in said compensation amounting to 20 monthly payments of the public revenue index at the date of the terrorist act, according to the number of children or minors in permanent family care economically dependent on the victim at the time of the death.

Article 8. Funeral and burial expenses

1. The General State Administration, shall pay, up to the limit of 6,000 euros, the costs of the transportation, funeral, burial and/or cremation for those persons who died as a result of a terrorist attack that are not covered by an insurance policy.
2. Costs shall be reimbursed on submission of the relevant invoices. The insurance policy covering these costs or an affidavit verifying the non-existence of such an insurance policy shall also be necessary.

CHAPTER 2

Physical and psychological damage

Article 9. Beneficiaries

Those persons having suffered personal injuries, including physical and psychological damage, shall be entitled to compensation.

Article 10. Amounts

1. The amounts for compensation for personal injuries shall be as follows:
 - a) Severe disability: EUR 500,000
 - b) Absolute permanent disability: EUR 180,000
 - c) Total permanent disability: EUR 100,000
 - d) Partial permanent disability: EUR 75,000

- e) The amount for non-disabling permanent injuries shall be determined according to the assessment system for damages caused to people in road accidents established in the Annex of the Consolidated Text of the Act on Civil Liability and Insurance in Motor Vehicles Traffic adopted by Royal Legislative Decree 8/2004 dated 29 October. The amount thereof is updated pursuant to the resolution of the Directorate-General for Insurance and Pension Funds of the Ministry of Economy and Competitiveness applicable at the time of the submission of the application, and according to the scale resulting from the application of the social security regulations regarding the amount of compensation for permanent and non-disabling injuries, mutilations and deformities caused by work accidents or occupational illness. In no case shall the total amount exceed the amount for partial permanent disability.
 - f) Temporary disability: twice the amount of the daily multiplier for the public income index corresponding to the temporary disability period, to the limit of 18 monthly allowances. To this end, it shall be understood that victims are in a situation of temporary disability while they are receiving medical assistance and are prevented from carrying out their professional duties or routine activities.
2. Victims affected by a degree of permanent disability shall be entitled to a fixed increase in their compensation amounting to 20 monthly payments of the relevant public income index according to the number of children or minors in permanent family care economically dependent on the victim at the time of the terrorist act that caused the injuries.

Article 11. Assessment of injuries

1. In order to classify the injuries and calculate the corresponding compensation, an expert report from a disability assessment team, determined by the National Institute for Social Security, shall be required. In all cases, this team shall include a representative designated by the Ministry of the Interior to assess the causal link between the injuries and the terrorist acts.

The disability assessment team shall only require that the medical examination of the victim and complementary medical tests be carried out if they are deemed essential.

In the event that the competent bodies of the General State Administration had already draft an injury assessment report no other medical examinations shall be required, in which case said assessment shall be binding for the examining body of the procedure.

Additional reports, tests and medical examinations shall be financed through the appropriations from the relevant part of the national budget with the corresponding amounts being paid to the Social Security Treasury by the Ministry of the Interior.

2. A summary medical report including all the information and reports requested and provided by the victim shall be drawn up by a physician from the medical services of the Provincial Directorate of the National Institute for Social Security from the province where the interested party resides. Failing this, an equivalent body of the public health service of the relevant Autonomous Community shall do so.
3. For victims living outside Spanish territory, the medical report shall be produced based on the expert reports filed as part of the criminal proceedings and on any additional reports or tests to be requested to the consular posts nearest to the victim's place of residence.
4. The categorisation of the disabling injuries of members of the Armed Forces, the *Guardia Civil* or the National Police, shall be determined by their respective medical-expert bodies or courts. To this end, a person designated by the Ministry of the Interior shall participate in all cases to report on the causal link assessment.
5. The assessment of non-disabling permanent injuries may be made, when appropriate, by the Medical Advisory Board attached to the administrative unit responsible for determining subsidies and compensations, which may require additional medical reports from different public health services.

Article 12. Payments on account

1. An advance payment system shall be applicable in cases of temporary disability and disabling injuries resulting from acts referred to in these Regulations.
2. In cases in which, due to the seriousness of the injuries, it seems reasonable to assume that total permanent disability, absolute permanent disability or severe disability shall be subsequently determined, the Ministry of the Interior may advance up to 18,030.36 euros to be deducted from the financial aid finally granted.

In such cases, at the request of a party or of the Ministry of the Interior, should the victim be unable to complete the necessary formalities, the examining body in charge of assistance to victims of terrorism shall urgently initiate a procedure for which, once the causal link between the injuries and the acts referred to in these Regulations is proven, the medical reports submitted to assess the presumable future disability of the victim shall be examined. It shall then submit to the Directorate-General for

Support of Victims of Terrorism the decision on the amount to be paid in advance.

Victims not in agreement with the amount established in such a decision may ask for a reassessment within 15 working days, counting from the day after the notification the eof.

3. In all other cases of disabling injuries or temporary disability, the amounts to be paid shall be those resulting from multiplying twice the amount of the public income index in force at the time the injury occurred, by the days of incapacity, and shall be paid quarterly.

The bodies referred to in the previous paragraph shall be in charge of processing and resolving the procedure for granting payment. For such a decision, accreditation of the beneficia y's status and medical leave or temporary disability shall suffice. However, the first payment shall be subject to the submission of a document accrediting the medical leave or temporary disability of the victim during the entire previous three months. Subsequent quarterly payments shall be made as the extension of the medical leave is accredited, for a maximum of 18 months.

4. Once the patient is given medical discharge and, in any event, after the period of 18 months established in the above paragraph, a procedure shall be carried out for the full payment of the corresponding reparation and the sums previously paid shall be deducted therefrom.

CHAPTER 3

Kidnapping

Article 13. Beneficiaries

Any persons having been kidnapped as a result of the acts referred to in these Regulations, and for whose freedom demands have been made, shall be entitled to the benefits established in the foll wing Article.

Article 14. Amounts

The amount of 12,000 euros shall be paid for the act of kidnapping, and three times the daily public revenue index for each day the kidnapping lasted, up to the limit of the compensation established for partial permanent disability. Victims may receive redress, where appropriate, for the personal injuries the kidnapping may have caused them.

CHAPTER 4

Payment of civil liability determined by a court decision**Article 15. Beneficiaries**

The victims of acts falling within the scope of these Regulations shall be entitled to redress from the State, which shall undertake on an exceptional basis to pay the corresponding compensations as civil liability for death or physical or psychological damages.

Article 16. Amounts

1. The obligations undertaken by the State, according to the provisions of the previous Article, shall be extended to the payment of compensation resulting from the following contingencies:
 - a) Death
 - b) Severe disability
 - c) Absolute permanent disability
 - d) Total permanent disability
 - e) Partial permanent disability
 - f) Non-disabling permanent injuries
 - g) Kidnapping
2. The amount of compensation shall be determined as follows:
 - a) When there is a final judgment recognizing a compensation as civil liability, whether for death or for physical or psychological damages resulting in one of the contingencies specified in the above paragraph, the amount determined in said judgment shall be paid, up to the limit established in paragraph 3.
 - b) When the final judgment does not recognize or allow recognizing an amount as civil liability for physical or psychological damages, the amount established in Annex I of Act 29/2011 of 22 September shall be paid.
3. The total amount to be paid by the State, as civil liability determined by a court decision, shall not exceed the following amounts:
 - a) Death: EUR 500,000
 - b) Severe disability: EUR 750,000

- c) Absolute permanent disability: EUR 300,000
- d) Total permanent disability: EUR 200,000
- e) Partial permanent disability: EUR 125,000
- f) Non-disabling permanent injuries: EUR 100,000
- g) Kidnapping: EUR 125,000

Article 17. Legal system

1. Under no circumstances shall the payment established in this chapter imply the undertaking of subsidiary civil liability by the State within the framework of criminal proceedings.
2. If the persons referred to in Article 15 have received redress for personal injuries, the sum to be paid on an exceptional basis as civil liability by the State shall only cover the difference between the sum determined as civil liability by the final judicial decision – taking into account the limits established in paragraph 3 of the previous Article – and the sum received for personal injuries.

Article 18. Subrogation of the State in civil liability claims

1. The State shall be subrogated in the claims that the beneficiaries of compensations and benefits received under the present Act may lodge against the perpetrators of terrorist acts, up to the limit of the compensation paid by the State. To this end, the aforesaid beneficiaries shall assign the corresponding civil actions to the State before obtaining assistance or benefits
2. Recipients of compensation or benefits for terrorist acts who are entitled by a final court decision to redress exceeding the sum received from the State under this Act shall retain the right to claim the difference from the perpetrators of the crime causing the damage.
3. To this end, the persons entitled to compensation shall attach to their application the document whereby they assign to the State the actions derived from the civil liability to which they may be entitled.

Article 19. Liaising with Courts

The court that delivered the judgment declaring the civil liability in which the State had been subrogated shall be informed of the award of compensations.

CHAPTER 5

Exceptional assistance for damages suffered abroad**Article 20. Beneficiaries**

Spanish citizens not belonging to any Spanish overseas contingent and who are the victims of terrorist attacks abroad perpetrated by groups that do not usually operate in Spain and that are not targeting Spain or Spanish interests shall be entitled to the exceptional redress regulated in the present Chapter.

Article 21. Amounts

1. Spanish citizens who habitually reside in the country where the terrorist attack occurs shall receive 50 % of the sums established in the event of death, personal injuries or kidnapping in Articles 7, 10 and 14 of these Regulations.
2. Spanish citizens who do not habitually reside in the country where the terrorist attack occurs shall receive 40 % of the sums established in said Articles in the above paragraph.

Article 22. Subsidiarity

1. This assistance shall be subsidiary to any assistance granted to the victim by the State on whose territory the attack was perpetrated. To this end, the examining body may collect the relevant information through the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
2. The exceptional assistance established in this Chapter shall be granted only in the event that the beneficiary does not receive any compensation or assistance from the country where the attack took place or when the total sum of said compensation or assistance is lower than the sum provided for in the previous Article, and in this case only for the difference between the two. If the Spanish State had paid an exceptional compensation and the beneficiary subsequently received compensation from the State where the attack took place, he shall refund the former, in whole or in part, as appropriate.

TITLE TWO

Material Damage

Article 23. Redressable damage

1. Compensation for material damage shall include damage to homes, business and industrial premises or their equipment, headquarters of political parties, trade unions or civil society organisations; as well as damage done to vehicles, with the requirements and limits laid down in the present Royal Decree.
2. Redress shall be subsidiary to any other compensation recognized by the Public Administrations or derived from insurance policies, and shall be reduced by the amounts received for these concepts. The total sum received as compensation shall not exceed, in any case, the value of the damage done.
3. Damage to public properties shall not be compensated.

Article 24. Damage to homes

1. Compensation may be paid for damage to the structure, installations and furniture of habitual residences which it is necessary to restore in order to recover their former habitability, excluding those elements deemed sumptuary by the Administration.
In the event of damage to residences not considered habitual, redress shall comprise 50 % of the value of the damage, with the threshold of 113,680 euros.
2. For the purposes of these Regulations, habitual residence shall mean the building where a person or a household lives for at least six months a year. Likewise, a residence shall be considered habitual when, in a period of less than one year, it has been inhabited for at least half the time elapsed from the date when the occupancy started.

Article 25. Temporary accommodation

1. The expenses incurred for temporary accommodation by those persons obliged to temporarily leave their homes shall be paid for the duration of the repair works, with a limit of 90 euros per day if said temporary accommodation is in a hotel establishment, or of 1,500 euros per month if in rented housing.

2. To this end, the Ministry of the Interior may sign agreements with other Public Administrations or with organizations specialized in providing support and assistance for persons affected in case of accident or disaster .

Article 26. Damage to business or industrial premises

1. In case of damage to business or industrial premises, redress shall comprise the value of the restoration to ensure the resumption of the activity, including the restoration of damage to the structure, installations, furniture and equipment, up to a maximum of 113,680 euros per establishment.
2. Notwithstanding the above, in exceptional cases and, in particular, in the event of cessation of business activity that may imply the loss of jobs, the General State Administration may agree to subsidise the granting of loans aimed at restarting said activity.

The subsidy shall consist in paying the lending credit institution the difference between the capital amortisation and interest payments, at the interest rate set by the lender, and those corresponding to the subsidised interest rate, which shall be the annual rate calculated by subtracting three percentage points from the statutory interest rate that was in force when the loan was arranged.

3. The General State Administration may also formalize low-interest agreements with credit institutions to achieve the purpose of the above paragraph.

Article 27. Damage to political parties, trade unions and social organisations headquarters

1. Damage to political parties, trade unions and civil society organisations headquarters, including damage to furniture and equipment, shall be compensated up to the amount necessary for said headquarters to be returned to their former working conditions and resume their activity.
2. Social organisations shall include associations, foundations and non-profit entities whose purpose is to represent and defend the interests of victims of terrorism.
3. Damage of this nature to office or places of worship belonging to religious denominations included on the Registry of Religious Entities shall also be compensated up to the above-mentioned amount.

Article 28. Damage to vehicles

1. Damage to private vehicles, as well as to vehicles for land transport of passengers and freight, shall be redressable, provided that the vehicle has a compulsory insurance policy in force at the time when the damage

occurred, when such a policy is required according to the regulations for said insurance.

2. Redress shall comprise the sum needed to repair the vehicle. In the event of destruction of the vehicle, or if its repair cost is higher than its market value, compensation shall be equivalent to the market price of a vehicle having similar characteristics and in a condition similar to the damaged vehicle, up to a limit of 30,500 euros. The expert report shall state the cost of reparation or replacement, as appropriate.

Article 29. Appraisal of material damages

1. The expert appraisal of material damages shall be done by the competent services of the Insurance Compensation Consortium, which shall be entitled to payment by the General State Administration for the appraisal on the basis of the professional scale that said Consortium has approved for its insurance appraisers.
2. The expert appraisal shall estimate the damages to be compensated by the Consortium, according to its own regulations, and those compensated by the Administration, as set out by the present Regulations.
3. In cases of redress for material damage fewer than 1,803.04 euros, the expert report from the Insurance Compensation Consortium shall suffice for recognition in the corresponding administrative decision.
4. However, if the total amount of damages, supported by an original repair invoice or estimate, does not exceed 600 euros, the expert report shall not be necessary if the Administration has evidence that all the other requirements have been fulfilled

TITLE THREE

Immediate Treatment, Assistance and Social Entitlements

CHAPTER 1

Immediate treatment

Article 30. Immediate psychological and psychiatric treatment

Those persons affected by a terrorist attack shall benefit from immediate free psychological and psychiatric treatment to cover their needs for as long as necessary, according to medical criteria, seeking their prompt and satisfactory recovery.

Article 31. Emergency health care

1. The bodies and entities of the National Health System shall provide emergency health care pursuant to their operating regulations.
2. Health authorities and management staff of health centres shall adopt specific procedures aimed at identifying and informing the family members about the victims' condition. The Ministry of the Interior shall obtain from the above-mentioned authorities and health centres all the information needed in order to provide adequate assistance for victims of terrorism and their families.

CHAPTER 2

Assistance for complementary medical and psychosocial care

Article 32. Complementary medical treatment and health care

1. Persons having suffered physical damage are entitled to reimbursement for expenses incurred in medical treatment, prostheses and surgery, provided that the aforesaid are related to terrorist acts, that the need therefor is accredited, and that such expenses are not covered by the public or private insurance system to which they belong.
2. To justify the need for assistance and non-coverage thereof, whether public or private, the application shall be accompanied by a medical

report accrediting said need and certification from the victim's insurer that said assistance does not fall within its coverage. The examining body may request said certification, with the prior consent of the person concerned, when the insurance system is public.

3. These expenses may be paid directly to the provider or to the beneficiary of the assistance, on presentation of the supporting original invoice.

Article 33. Psychological treatment

1. The victims and persons threatened, and their relatives or persons, with whom they live, subsequently suffering psychological aftereffects resulting from terrorist acts, shall be entitled to the funding of the cost of their psychological treatment, when prescribed, up to a limit of 3,600 euros per individualized course of treatment.
2. To this end, the General State Administration may formalize agreements with other Public Administrations or with private entities specialized in said assistance.

In the absence of such agreements, the General State Administration may finance the cost of the required individual treatments, provided that, in the opinion of the Ministry of the Interior's Directorate-General for the Support of Victims of Terrorism there is accreditation of the need, of the link to acts within the scope of application of these Regulations, and of the fact that the psychological treatment provided by the public or private insurance system is not adequate for the trauma caused by the terrorist acts.

The corresponding assistance shall be paid at the end of each quarter to the professional involved, on submission of the original invoices for the corresponding fees.

Article 34. Psychoeducational support

The Ministry of the Interior, in collaboration with the Autonomous Communities and within the framework of legislation regulating assistance to students with specific educational needs, shall adopt the necessary measures to ensure that students in Pre-school Education, Primary Education, and Compulsory Secondary Education who, as a result of the acts within the scope of application of these Regulations, have learning or social adaptation difficulties, may enjoy priority psychoeducational support free of charge.

CHAPTER 3

Educational grants

Article 35. Beneficiaries

Educational grants shall be awarded when, as a consequence of a terrorist act, there is personal damage to a student, his or her widow/er, cohabiting party or children of the deceased; or to his or her parents, siblings, tutors or guardians, preventing them from pursuing their usual occupational activities.

Article 36. Amounts

1. Said grants may be awarded to begin or to continue studies, for the amounts determined for each academic year:
 - a) First cycle of Pre-school Education: EUR 1,000
 - b) Second cycle of Pre-school Education and Primary Education: EUR 400
 - c) Compulsory Secondary Education: EUR 400
 - d) Baccalaureate: EUR 1,000
 - e) Intermediate and Higher Vocational Training: EUR 1,500
 - f) University Degree or equivalent: EUR 1,500
 - g) Master's Degree: EUR 1,500
 - h) Other higher studies: EUR 750
 - i) Language learning at official schools: EUR 3
2. These sums shall be increased by 20 % when the study centre is at least 50 km from the family's place of residence and by 40 % if attending said centre involves a change of residence in relation to the family residence.

Article 37. Requirements

1. Beneficiaries of these grants shall not already hold, or meet the legal requirements to obtain, a diploma of the same level as, or of a higher level than, that of the studies for which the grant is requested.
2. At the levels of Baccalaureate, Intermediate and Higher Vocational Training, university studies leading to a Degree, University Master's Degree, language learning, and other non-university higher studies, the applicable academic requirements regarding enrolment and completed course load shall be those defined in Chapter 3 of Royal Decree 1721/2007, of 21 December, establishing the study grants scheme.

However, to determine the minimum academic performance required from the beneficiaries of educational grants, the Ministry of the Interior shall apply a 0.60 correction coefficient to those students with special educational needs who require curricular adaptation or a longer period of time to pursue their studies, in cases of physical or mental incapacity.

3. The Ministry of the Interior may, specifying the grounds therefor, exempt the applicant from the minimum academic requirements, taking into account the date when the terrorist act was perpetrated or its impact on the applicant and/or on his or her household.

Article 38. Incompatibilities

1. Educational grants received due to having the status of victim of terrorism shall be incompatible with assistance received for the same purpose from other Administrations. In the event of receiving more than one form of assistance for the same purpose, the grant awarded by the Ministry of the Interior shall be revoked.
2. Only one grant shall be awarded per academic year, even if several programmes or university degrees are studied simultaneously.

Article 39. Academic fees

The General State Administration, in collaboration with the Autonomous Communities, shall adopt the necessary measures to guarantee the exemption from all kinds of academic fees in official study centres for those who have suffered permanent physical and/or psychological damage as a result of terrorist acts, as well as for the children of the aforesaid and of those who died in a terrorist act.

CHAPTER 4

Public housing assistance

Article 40. Public housing

1. The General State Administration, in collaboration with the Autonomous Communities, shall adopt the necessary measures to ensure that the beneficiaries of the assistance and compensations scheme referred to in these Regulations be given priority in the allocation of State-subsidised housing with controlled prices for purchase or rent.

2. For these purposes, the State housing plans shall include specific measures to facilitate access to State-subsidised housing as homeowners or renters. Specifically, these measures may waive family income eligibility requirements when the consequences of a terrorist attack are such that victims are forced to move to a new home.

Article 41. Assistance for housing adaptation

The General State Administration, in collaboration with the Autonomous Communities, shall establish appropriate measures for adapting homes when the consequences of acts within the scope of application of these Regulations so require. Without prejudice to the foregoing, the Ministry of the Interior shall, on an extraordinary basis, bear the costs of assistance for this purpose, in accordance with the provisions of the following Article.

CHAPTER 5

Exceptional assistance and advance payments

Article 42. Exceptional assistance

1. The Ministry of the Interior may grant exceptional assistance to mitigate situations of personal or family need that are fully or insufficiently covered by the assistance and compensations scheme provided for in these Regulations.
2. In the event of personal damage, assistance may cover social, health, psychological or educational needs, after an assessment by the competent bodies of the Ministry of the Interior.
3. In the event of material damage, such assistance may cover the adaptation or change of housing when the consequences of the terrorist attack so require, as well as any other personal or family needs resulting from the terrorist act.
4. Persons who accredit having been threatened shall be entitled to assistance for relocation, leaving their habitual residence, school fees and other expenses related to said situation.
5. Such assistance shall be compatible with the ordinary assistance regulated by these Regulations and may be requested by victims or family members living with them, or be initiated *ex officio* by the Ministry of the Interior, responding to the need detected. The competent body as regards assistance

and compensation to victims of terrorism shall submit the grant proposal to the Minister of the Interior.

Article 43. Advance payment

In the event of pressing need, advance payment may be granted for extraordinary assistance, medical expenses, and relocation of concerned persons and temporary housing, which shall not exceed 70 % of the sum to be foreseeably granted in the corresponding decision.

CHAPTER 6

Workplace entitlements

Article 44. Workplace entitlements

Persons included in Articles 5 and 33 of Act 29/2011 of 22 September, shall be entitled to the following to effectuate their entitlement to protection or comprehensive social assistance:

- a) Reduced work day, with the corresponding and proportional reduction of salary, or rescheduling of working time, through the adjustment of working hours, the application of a flexible timetable or of any other form of adjustment of working time used in the company, pursuant to Article 37.7 of the consolidated text of the Workers' Statute Act, approved by Royal Legislative Decree 1/1995, of 24 March.
- b) Geographical mobility, by means of the preferential right to take another post, within the same professional group or an equivalent category, that the company has vacant in any of its workplaces, pursuant to Article 40.3 *bis* of the consolidated text of the Workers' Statute.

Article 45. Entitlements of civil servants

Persons referred to in the above Article having the status of civil servants or contracted employees working for the Public Administrations shall be entitled to the reduction or adjustment of their working hours and to geographical mobility as regards their workplace, pursuant to Article 35 of Act 29/2011 and to specific legislation.

Article 46. Active employment policies

Persons included in Article 34 of Act 29/2011 of 22 September, shall be entitled to:

- a) Be the beneficiaries of measures providing hiring incentives under Act 43/2006 of 29 December, on Improved Growth and Employment.
- b) Be the beneficiaries of measures aimed at favouring the employability of groups that face particular difficulties regarding employment access and durability, pursuant to Act 56/2003 of 16 December, on Employment.

Article 47. Agreements with companies to facilitate hiring victims of terrorism

The Ministry of the Interior, in order to facilitate hiring victims of terrorism and their geographic mobility, in the case of those victims needing to change their place of residence with the guarantee of a job, shall favour cooperation agreements with companies to promote awareness of terrorist violence and victims' integration into the workforce.

TITLE FOUR

Procedures

CHAPTER 1

General procedure for the recognition of redress, compensation and assistance

Article 48. Initiation of the procedure: manner and place of submission of applications

1. The procedure for the recognition of redress, compensation and benefit regulated by the present Regulations shall be initiated by means of an application from the person concerned, directly or through a representative accredited by any legally valid means that can be reliably recorded. The application shall be formalized in accordance with the forms included in the Annex. Applications may also be completed and submitted online, via the website of the Ministry of the Interior: <https://sede.mir.gob.es/>. Applications shall be accompanied by the documents accrediting the victim's status, pursuant to Article 3.2 of these Regulations or, when appropriate, the degree of kinship to the victim.
In the case of educational grants, applications shall be accompanied by documents certifying both the academic credits for which the applicant has been enrolled, and the academic performance required pursuant to Article 37 of these Regulations.
Applicants shall not provide documents that are already in the possession of the acting Administration, in which case they may authorize said Administration to obtain on their behalf the necessary documents for processing the application.
2. The procedure for conferring the decorations provided for in Article 60 shall be initiated at the request of the interested party or of the persons referred to in Article 6 of the present Regulations in order to claim, following the order of presentation of the applications, a decoration corresponding to a deceased person. However, this procedure may also be initiated *ex officio* by the Ministry of the Interior, after consultation with the beneficiaries, when it has knowledge of facts that may provide entitlement.
3. Applications may be presented at the General Registry of the Ministry of the Interior; at the registry of any administrative body of the General State

Administration, of the Administrations of the Autonomous Communities or any other Local Entity which has signed a corresponding agreement; at post offices or at Spain's diplomatic missions and consular posts abroad. Moreover, applications may be submitted online at the e-registry of the Ministry of the Interior (<https://sede.mir.gob.es/>).

Article 49. Application period

1. The deadline for presenting applications for compensation for personal and material damage shall be one year, counted from the day when said damage occurred.

In the event of personal damage, the period shall be counted from the date of medical discharge or of consolidation of the aftereffects, as accredited by the National Health System.

If, as a direct consequence of the injuries, these aftereffects were to worsen or the affected person were to die from the injuries suffered as a result of a terrorist act, there shall be a further one-year period for requesting the corresponding difference.

If a disabled victim dies due to a cause different from the aftereffect resulting from a terrorist act, the beneficiaries of the compensation that would have been granted to the deceased shall be those persons referred to in Article 6 of the present Regulations, in the order of preference established by said Regulations.

In the event of psychological damages, the deadline of one year shall be counted from the moment when there was a diagnosis accrediting the causal link involved.

2. The deadline to apply for payment of civil liability on an exceptional basis determined by a final court decision shall be of one year from the date of notification of the decision to the interested party or, when appropriate, of the court decision establishing the amount of compensation.
3. The deadline for the presentation of applications for educational grants shall be of three months from the formalization of enrolment in the course for which the grant is requested.
4. The deadline to apply for the decorations provided for in Article 60 shall be of five years counted from the commission of the terrorist act or from the moment the Public Administration has knowledge of it.

Article 50. Correction and improvement of the application

1. If originally submitted applications do not meet the requirements established in Article 70 of Act 30/1992 of 26 November, on the Legal System of the Public Administration and the Common Administrative Procedure, the persons concerned shall be asked to correct the deficiency

- or to attach the mandatory documents within fifteen days, and be notified that, if they fail to do so, such persons shall be deemed, in a decision handed down to that effect, to have withdrawn their application.
2. The deadline mentioned in the paragraph above may be extended to fifteen days, at the request of the person concerned or at the initiative of the examining body, when the provision of the documents required involves special difficulties.

Article 51. Conducting the procedure

1. The procedure for the recognition of redress, compensation and assistance shall be conducted by the competent body for assisting victims that is under the aegis of the Ministry of the Interior, which shall act as a one-stop-shop for any other procedure that the concerned person may initiate before the General State Administration.
2. The procedures shall conform to the provisions set forth in this Title, and on all matters not covered by it, to the general provisions contained in Act 30/1992 of 26 November, and Act 11/2007 of 22 June, on Citizens' Electronic Access to Public Services, and in the implementing regulations thereof.
3. The provision by the person concerned of documents related to well-known facts or circumstances whose accreditation has been entered in the records or files of the acting administration shall not be necessary. To this end, the examining body may obtain from the National Social Security Institute of the Ministry of Employment and Social Security, from the Directorate-General for Personnel Costs and Public Pensions of the Ministry of the Treasury and Public Administrations, and from the Directorate-General for Personnel of the Ministry of Defence, the data corresponding to the recognition of extraordinary pensions for terrorist crimes affecting the applicant. Similarly, it may also request the information needed to adequately substantiate the procedure. It may also request from police authorities, consular authorities, the Public Prosecutor's office, the courts, the competent bodies of the Autonomous Communities for assisting victims of terrorism, as well as from the health authorities, with the prior consent of the person concerned, the information needed to adequately substantiate the procedure.
4. In the event that during the conducting of a procedure for the award of compensation for the death of a person as a result of a terrorist attack it is found that there are other persons who are entitled at the same level as the original applicant following the order of precedence provided for in Article 6 of the present Regulations, whose identification results from the procedure, those persons shall be notified, at the request of a party or

ex officio by the examining body, of the conducting of this procedure for their consideration as interested parties.

5. The Ministry of the Interior shall conduct the procedures for conferring decorations, and shall be empowered to obtain from courts, authorities, official centres and entities of all kinds the reports deemed necessary, when appropriate, in order to determine the suitability of conferring such decorations. In any event, the status of victim of terrorism or uninjured beneficiary shall be accredited by means of a report from the Ministry of the Interior, pursuant to Article 3 of the present Regulations.

Article 52. Suspension of the procedure

1. The lapse of the legally established deadline for resolution of the procedure and notification thereof may be suspended in the following cases:
 - a) When it is necessary to ask the interested party to provide corrections, documents and other information considered necessary, such suspension shall comprise the time between notification of the aforesaid and its effective completion by the recipient or, failing this, the lapse of the time period granted, without prejudice to the provisions of Article 50 of the present Regulations.
 - b) When any of the medical assessment teams referred to in Article 11 of the present Regulations is to carry out assessments of the injuries sustained by those concerned, such suspension shall comprise the time between the examining body's request that the corresponding medical assessment team carry out an examination and assessment, regarding which the interested party shall be notified, and reception of the medical certificate by said examining body.
 - c) When, due to the examination of a file on compensation for material damage, the expert appraisals for said damage must be carried out by the competent services of the Insurance Compensation Consortium, such suspension shall comprise the time between the examining body's request that said Consortium carry out an appraisal, regarding which the interested party shall be notified, and reception of the resulting report by the examining body.
 - d) When the reports referred to in Article 3.2.b *in fine* of the present Regulations need to be requested, such suspension shall comprise the time between the examining body's request, regarding which the interested parties shall be notified, and reception of the report by the examining body.
 - e) When other reports that are mandatory and may determine the content of the decision need to be requested from bodies of the General State

Administration or other Public Administrations, such suspension shall comprise the time between the request, regarding which the interested parties shall be notified, and reception of the report. This suspension period may not exceed three months.

2. Moreover, the lapse of the legally established deadline for resolution of the procedure and notification thereof may be suspended when criminal proceedings against the perpetrators of the terrorist act that caused the damage for which compensation is requested are pending. Such suspension shall comprise the time between the request to the court until the date of certification of the final nature of the relevant judgment or court decision, and non-execution of civil liability payments resulting from the offence

Article 53. Decisions

1. Decisions shall be issued by the Minister of the Interior, except in the conferral of decorations, which shall correspond to the bodies stipulated in Article 60.2.
2. The maximum period of time for decision and notification shall be twelve months, with the exception of educational grants, in which it shall be six months.
3. After the end of said maximum period, if no decision has been expressly notified, the request shall be considered accepted.

CHAPTER 2

Standards for facilitating the recognition of compensation to victims of terrorism in cross-border situations

Article 54. Scope of application

1. The provisions of this Title shall be applicable to the processing and resolution of the procedures for the recognition of redress, compensation and assistance under these Regulations, when the acts described in Article 2.1 have been committed in Spain and the applicant for compensation habitually resides in another Member State of the European Union.
2. The provisions of this Title shall also be applicable when the place where the crime was committed is a Member State of the European Union other than Spain, and the applicant for compensation habitually resides in Spain. In this case, the authority providing assistance shall carry out the duties

stipulated in Article 55, for the purposes of cooperating in the initiation and processing of the procedure for the recognition of the assistance and compensation recognized by the Member State of the European Union where the crime was committed.

Article 55. Designation and duties of the authority providing assistance

1. The Ministry of the Interior shall act as the authority providing assistance in the cases cited in paragraph 2 of the preceding Article, in order for the applicant to have access in Spain to the appropriate redress from the State in whose territorial jurisdiction the offence was committed.
2. For these purposes, the Ministry of the Interior shall provide the applicant for compensation with:
 - a) Information regarding possibilities for requesting financial support or redress, and the necessary procedures and forms, including information on how the application should be completed and what supporting documentation may be required.
 - b) General guidelines on how requests for additional information should be completed.
3. Moreover, the Ministry of the Interior, the authority providing assistance, shall:
 - a) Forward, to the deciding authority designated by the State in whose territory the crime was committed, the application and any supporting documentation, as well as the documentation that may subsequently be required.
 - b) Cooperate with the body referred to in the previous paragraph when, in accordance with its national legislation, said body decides to hear the applicant or any other person.
This cooperation from the Ministry of the Interior may comprise, at the request of the deciding authority, either providing whatever may be necessary for said authority to conduct the hearing directly, particularly through the use of telephone or video-conferencing, or hearing the applicant for financial support or any other person and forwarding to the deciding authority a report of the hearing.

Article 56. Deciding authority

1. When the applications have been submitted through the authority providing assistance where the applicant habitually resides, Spain's

Ministry of the Interior, as the deciding authority, shall notify the applicant and said assisting authority regarding:

- a) Reception of the application, the examining body for the procedure, the time-frame for resolving, and the foreseeable date on which the decision is to be adopted.
 - b) The decision, when the procedure is closed.
2. Moreover, the Ministry of the Interior, as the deciding authority, may request the cooperation of the authority providing assistance in the State in whose territory the applicant habitually resides, in order to hear the applicant or any other person if deemed necessary, for determining, discovering, and verifying the facts and the information by virtue of which the decision is to be issued.

For this purpose, it may request that the authority providing assistance cited in the previous paragraph make available whatever may be necessary for:

- a) The examining body to conduct the hearing directly, particularly through the use of telephone or video-conferencing, with the person who is to be heard, if the latter accepts it.
- b) The authority providing assistance to conduct the hearing and to forward a report of the hearing to the examining body.

The Ministry of the Interior shall conduct the hearing pursuant to the provisions of these Regulations, of Act 30/1992 of 26 November, and of Act 11/2007 of 22 June.

Article 57. Forms for submitting applications and notifying decisions

For submitting the applications and supporting documentation stipulated in Article 55.3.a and for notifying the decision whereby the procedure is closed, stipulated in Article 56.1.b, the forms established by order of the Ministry of the Interior shall be used.

Article 58. Administrative appeals

1. When the document whereby an appeal for reversal lodged against the decision of the Ministry of the Interior is submitted through the authority providing assistance in the Member State in whose territory the victim of the crime habitually resides, Spain's Ministry of the Interior, as the deciding authority, shall notify the interested party and the authority providing assistance regarding:

- a) Reception of the appeal, the examining body for the procedure, the time-frame for resolving and notifying the decision, as well as the effects of the lack of a decision, and, where possible, the foreseeable date on which the decision is to be adopted.
 - b) The decision, when the procedure is closed.
2. Moreover, the body responsible for processing the appeal may request the cooperation of the authority providing assistance in the State in whose territory the applicant for compensation habitually resides, to hear the applicant or any other person, if deemed necessary, for determining, discovering, and verifying the facts and the information by virtue of which the decision is to be issued.

For this purpose, it may request that the authority providing assistance cited in the previous paragraph make available whatever may be necessary for:

- a) The examining body to conduct the hearing directly, particularly through the use of telephone or video-conferencing, with the person who is to be heard, if the latter accepts it, in the terms set forth in Article 56.2.
- b) The authority providing assistance to conduct the hearing and to forward a report of the hearing to the examining body.

TITLE FIVE

Recognition and Decorations

Article 59. Decorations

The Royal Order of Civil Recognition of Victims of Terrorism is the specific recognition of the State to honour victims of terrorism, pursuant to Act 29/2011 of 22 September.

Article 60. Degrees and conferral

1. The Royal Order of Civil Recognition of Victims of Terrorism has the following degrees:
 - a) Grand Cross, which shall be awarded posthumously to those killed in terrorist acts.
 - b) Commander, which shall be awarded to those having suffered permanent physical or psychological damage and those kidnapped in terrorist acts.
2. When the decoration is that of Grand Cross, the Minister of the Interior shall submit a draft Royal Decree to the Council of Ministers for it to approve the conferral of said degree. When the decoration is that of Commander, the Minister of the Interior shall confer said degree through an Order in the name of His Majesty the King.
3. The Grand Chancellor of the Royal Order shall be the Minister of the Interior and the Chancellor thereof, the Under-Secretary of the Interior.

Article 61. Nature of decorations, and their honorific titles

1. Decorations shall be personal and non-transferrable.
2. The degree of Grand Cross bestows the title of Excellency and that of Commander, the title of Most Illustrious.
3. The conferral of a decoration does not create entitlement to the assistance or benefits set forth in Act 29/2011 of 22 September.

Article 62. Description of the insignia

The distinctive characteristics of the insignia corresponding to degrees of the Royal Order shall be as follows:

- a) Grand Cross (*Gran Cruz*): The insignia shall be a badge with a total diameter of 85 mm, made of a golden metal formed by four symmetrical, gold-clefted arms of equal size, whose main part, or flame, is enamelled in red. Alternating with these arms, it shall have four polished five-faceted starbursts. In the centre of the Cross, in a circle, shall be placed the coat of arms of Spain, enamelled in its colours and, in the middle of the upper arm of the Cross, the Royal Crown. The reverse of the Grand Cross shall bear a circular crown enamelled in black, with golden edges 1 mm thick, having a diameter of 35 mm, and being 4 mm thick, where the inscription *RECONOCIMIENTO Y MEMORIA* (Recognition and Remembrance) shall be engraved in golden capital letters, with a small Latin cross underneath containing a 17-mm circle enamelled in red, with a 10-mm golden square inside.
- b) Commander (*Encomienda*): The insignia shall be a badge having the same characteristics described for the Grand Cross, except for its size, which shall be 60 mm in diameter. It shall be worn hanging around the neck with a ribbon 4 mm wide in the colours of the Order – red and white – having white stripes on the edges of the ribbon 4.5 mm wide. The entire Cross shall hang from a laurel wreath in golden metal. The reverse of the Commander insignia shall bear a circular crown enamelled in black, with golden edges 1 mm thick, having a diameter of 25 mm, and being 4 mm thick, where the inscription *RECONOCIMIENTO Y MEMORIA* (Recognition and Remembrance) shall be engraved in golden capital letters, with a small Latin cross underneath containing a 17-mm circle enamelled in red, with a 10-mm golden square inside.

Article 63. Issue of titles and Registration Book

1. The Chancellery of the Royal Order, once a decoration has been conferred, shall issue the corresponding title, which shall be authorized by the stamp of the signature of His Majesty The King and shall be signed by the Grand Chancellor of the Royal Order.
2. The conferral of the decorations under the present Title shall be recorded in a Registration Book.

Article 64. Use and effect of decorations

The conferral of these decorations to members of the armed forces, to members of the law enforcement agencies and, in general, to public employees, shall be considered a special merit, as well as a circumstance particularly relevant to the conferral of decorations in their respective professional fields, pursuant to the corresponding governing regulations.

Article 65. Acts of homage and recognition of victims of terrorism

The Government may promote the recognition and preservation of the memory of victims of terrorism and, in particular, the conferral of decorations, as provided for by the Royal Order of Civil Recognition of Victims of Terrorism, as well as having an institutional presence on 27 June, the Day of Remembrance and Homage to Victims of Terrorism, and on 11 March, the European Day of Remembrance of Victims of Terrorism.

TITLE SIX

Institutional Protection of Victims of Terrorism

Article 66. Report on the situation of victims of terrorism

The Ministry of the Interior shall draw up an annual report on the situation of victims of terrorism collectively, with proposals for action that, when appropriate, may include proposals for regulatory reform.

Autonomous Communities and local entities shall be requested to provide information for drafting this report.

The needs analyses conducted by the different associations of victims of terrorism shall also be collected, channelled through the Victims of Terrorism Foundation.

Said report shall be submitted to Parliament during the last quarter of each year.

Article 67. European Charter of Terrorism Victims' Rights

Within one year of the date of entry into force of these Regulations, the Ministry of the Interior, in collaboration with the most representative associations of the collective of victims of terrorism, shall draw up a draft of a European Charter of Terrorism Victims' Rights, which shall be submitted to the European Commission, to be used as a basis for the study and adoption of a European Charter of Terrorism Victims' Rights.